

18
BIBLIOTECA
MUSEO
NACIONAL
DE HISTORIA
Y GEOGRAFIA
DE CHILE
SANTIAGO
1900

72
1

THE
CENTRAL
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF
TORONTO
100 ST. GEORGE STREET
TORONTO, ONTARIO
M5S 1A5

KS78
.M6
M4
1904
c. 1

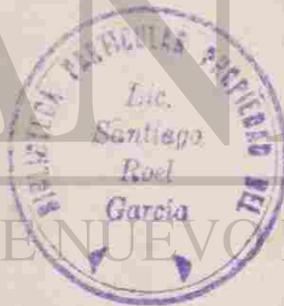
31074
V715A



1080007360

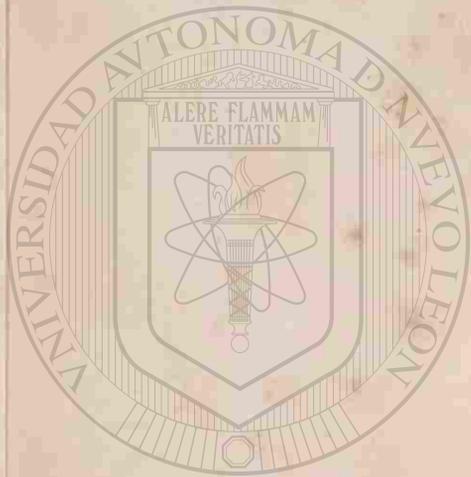


UANL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
MÉXICO

LEYES FEDERALES VIGENTES

SOBRE

Tierras, Bosques, Aguas, Ejidos, Colonización

Y GRAN

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

COLECCIÓN ORDENADA Y ANOTADA

POR EL

LIC. ANICETO VILLAMAR

Ex-Oñcial 1º de la Sección 3ª
de la Secretaría de Hacienda y Oficial de la Sección de Comercio
del Registro Público de la Propiedad en la Capital

edición reformada y aumentada



HERRERO HERMANOS EDITORES.

10—CALLEJON DE SANTA CLARA—10

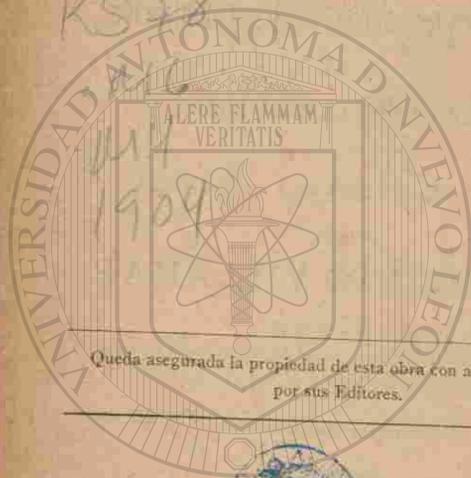
1904

328.72

V7156

16 febrero 79

KS28



Queda asegurada la propiedad de esta obra con arreglo a la Ley
por sus Editores.



FSRM

7360

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

7360

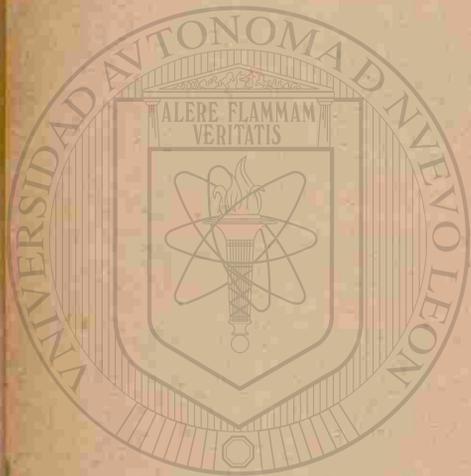
TIP. J. I. GUERRERO Y CIA., SCS DE FRANCISCO DIAZ DE LEON.

Autorización para publicar la siguiente Colección

Un sello que dice:

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.—México.—Sección de archivo.— Núm. 137.

Se recibió en esta Secretaría el ocurso de Uds. fecha 2 del corriente, en el que solicitan autorización para llevar á cabo la publicación de una colección de leyes sobre tierras, bosques, aguas, Gran Registro, colonización, ejidos, patentes, marcas de fábrica y minas.—En contestación manifiesto á Uds. que en vista de lo que exponen, se les concede la indicada autorización para reproducir las referidas disposiciones relativas á los ramos de esta propia Secretaría, bajo la inteligencia de que han de procurar la mayor corrección en la impresión de ellas.—Libertad y Constitución. México, Octubre 5 de 1900.—FERNÁNDEZ LEAL.—Rúbrica.—A los Sres. Herrero Hermanos.—Presente.



SECRETARIA DE ESTADO

Y DEL

DESPACHO DE FOMENTO, COLONIZACION E INDUSTRIA

DE LA REPUBLICA MEXICANA.

Sección 1ª

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

“Que en uso de la autorización concedida al Ejecutivo por la ley de 18 de Diciembre de 1893, he tenido á bien expedir la siguiente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

LEY SOBRE OCUPACION Y ENAJENACION

De terrenos baldíos de los Estados Unidos Mexicanos. ®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

TITULO I.

De los terrenos baldíos y nacionales, de las demasías y excedencias, y bases generales para su ocupación y enajenación.

Art. 1º Los terrenos de propiedad de la Nación, que son objeto de la presente ley, se considerarán, para sus efectos, divididos en las siguientes clases:

- I. Terrenos baldíos.
- II. Demasías.
- III. Excedencias.
- IV. Terrenos nacionales.

Art. 2º Son baldíos todos los terrenos de la República que no hayan sido destinados á un uso público, por la autoridad facultada para ello por la ley, ni cedidos por la misma á título oneroso ó lucrativo, á individuo ó corporación autorizada para adquirirlos.

Art. 3º Son demasías, los terrenos poseídos por particulares con título primordial, y en extensión mayor que la que éste determine, siempre que el exceso se encuentre dentro de los linderos señalados en el título, y, por lo mismo, confundido en su totalidad con la extensión titulada.

Art. 4º Son excedencias, los terrenos poseídos por particulares durante veinte años ó más, fuera de los linderos que señale el título primordial que tengan; pero confundiendo con el terreno que éste ampare.

Art. 5º Son nacionales, los terrenos baldíos descubiertos, deslindados y medidos por comisiones oficiales ó por compañías autorizadas para ello y que no hayan sido legalmente enajenados.

También se reputarán terrenos nacionales los baldíos denunciados por particulares, cuando éstos hubieren abandonado el denuncia ó éste se haya declarado desierto ó impropio, siempre que se hubiere legado á practicar el deslinde y la medida de los terrenos.

Art. 6º Todo habitante de la República, mayor de edad y con capacidad legal para contratar, tiene derecho, en los términos de la presente ley, para denunciar terrenos baldíos, demasías y excedencias en cualquiera parte del territorio nacional, y sin limitación de extensión; excepto los naturales de las naciones limítrofes de la República y de los naturalizados en ellas, quienes, por ningún título, pueden adquirir baldíos en los Estados que con ellas lindan.

La franquicia otorgada en el presente artículo no do-

roga las limitaciones establecidas ó que establezcan las leyes vigentes, sobre adquisición por extranjeros, de bienes inmuebles en la República.

Art. 7º Cesa la obligación hasta ahora impuesta á los propietarios y poseedores de terrenos baldíos, de tenerlos poblados, acolados y cultivados; y los individuos que no hubieren cumplido las obligaciones que á este respecto han impuesto las leyes anteriores á la presente, quedan exentos de toda pena, sin necesidad de declaración especial en cada caso y sin que la Nación pueda, en lo futuro, sujetar á inquisición, revisión ó composición los títulos ya expedidos, ni mucho menos reivindicar los terrenos que éstos amparen, por la sola falta de población, cultivo ó acotamiento.

Art. 8º Cesa también la prohibición impuesta á las Compañías deslindadoras de terrenos baldíos por el artículo 21 de la ley de 15 de Diciembre de 1883 ó por cualquiera otra disposición legal, de enajenar las tierras que les hayan correspondido, por compensación de gastos de deslinde, en lotes ó fracciones que excedan de dos mil y quinientas hectaras; y si alguna enajenación se hubiere hecho en lotes ó fracciones de mayor extensión, no podrá ser invalidada por este solo motivo, ni la Nación podrá, en ningún tiempo, reivindicar los terrenos así enajenados por sólo esta circunstancia.

Art. 9º Los terrenos baldíos, salvo el caso previsto en el artículo siguiente, sólo se enajenarán previo denuncia y mediante los trámites que establece esta ley, y á los precios que se fijan en la tarifa especial que el Ejecutivo Federal publicará y sancionará, conforme al art. 12.

Art. 10. Las demasías y excedencias, así como los terrenos baldíos poseídos por particulares durante veinte años ó más, sin título primordial, pero con título translativo de dominio, emanado de particulares ó de autoridad pública no autorizada para enajenar baldíos, se adquirirán también por denuncia, ó por composición ajustada directamente con la Secretaría de Fomento, conforme á las prevenciones de esta ley.

Art. 11. Los terrenos nacionales solamente podrán ser enajenados por la Secretaría de Fomento, á los precios y bajo las condiciones que ella determine en cada caso, atendiendo á la calidad y ubicación de los terrenos y al objeto á que se les destine. Dichos precios no podrán nunca ser inferiores á los señalados para los terrenos baldíos en la tarifa vigente al acordarse la enajenación; y solo podrá hacerse enajenación de terrenos á título gratuito, en los casos en que por razón de utilidad pública, recompensa de servicios ó otros motivos, lo autorice expresamente la ley.

Art. 12. El Ejecutivo de la Unión fijará, por medio de un decreto, que se publicará en el mes de Enero de cada año, la tarifa de precios de los terrenos baldíos, de cada Estado, y del Distrito y Territorios Federales.

Esta tarifa regirá durante el año fiscal inmediato á su publicación.

Art. 13. Del precio de los terrenos baldíos, excedencias y demasías que se enajenen, conforme á la ley, se aplicarán dos tercios al Erario Federal y un tercio al del Estado en donde el terreno estuviere ubicado; pero sin que ni la Federación ni los Estados puedan rehusar el pago que se les haga en los títulos ó créditos legítimos que constituyan respectivamente su deuda pública, cuando el adquirente del terreno quiera pagar en esa especie.

El precio de los baldíos, excedencias y demasías ubicados en el Distrito y Territorios Federales, así como el de los terrenos nacionales, sea cual fuere su ubicación, se aplicará íntegramente al Erario Federal.

Art. 14. No podrán enajenarse, por ningún título, ni estarán sujetos á prescripción, sino que permanecerán siempre del dominio de la Federación:

I. Las playas del mar;

II. La zona marítima, con una extensión de veinte metros contados desde la orilla del agua en la mayor pleamar y á lo largo de las costas de tierra firme y de las islas;

III. Una zona de diez metros en ambas riberas de los ríos navegables y de cinco metros en los flotables;

IV. Los terrenos en que se encuentren ruinas monumentales, con la superficie que se declare necesaria para el cuidado y conservación de éstas.

Art. 15. Los terrenos baldíos en las islas de ambos mares, se enajenarán en los mismos términos que los demás del territorio nacional; pero en toda isla se reservará, además de la zona marítima, una extensión mínima de cincuenta hectaras para establecimiento de poblaciones y otros usos públicos, y en caso de que la isla no tenga esa extensión, se reservará en su totalidad para aquellos usos.

Las islas de los ríos, lagos y esteros navegables, no se enajenarán sino después de practicados los reconocimientos periciales y de recogidos los informes de la autoridad superior política del respectivo Estado, Distrito ó Territorio que demuestren que no hay inconveniente para efectuar la enajenación.

Art. 16. Los esteros, lagunas y estanques de propiedad nacional que no sean navegables, ni susceptibles de llegar á serlo, así como las marismas, podrán ser enajenados con arreglo á esta ley, previos los reconocimientos periciales y los informes de la autoridad competente de Marina y de la superior política del respectivo Estado, Distrito ó Territorio que demuestren que no hay inconveniente para efectuar la enajenación.

Art. 17. Los terrenos á que se refiere esta ley, y cuya adquisición se solicite con objeto de establecer salinas ó que fueren propios para ello, se enajenarán también con arreglo á las prevenciones de esta ley; pero la Secretaría de Fomento podrá mandarlos valuar especialmente y acordar su enajenación á precios superiores á los de la tarifa que estuviere vigente, cuando así lo estimare conveniente.

Art. 18. La Secretaría de Fomento podrá celebrar, para la explotación de los terrenos baldíos, y mientras no haya quien solicite su enajenación, los contratos de arrendamiento, aparecería ú otros que no transfieran el dominio, así como expedir reglamentos conforme á los cua-

les haya de permitirse la explotación de maderas, resinas ú otros productos de dichos terrenos, señalando las penas en que incurran lo que infringan las reglas de explotación, y sin perjuicio de que se castigue administrativamente ó judicialmente, conforme á las leyes, al que invada ó explote sin permiso los terrenos baldíos.

A los arrendatarios de éstos podrá dárseles en los contratos respectivos, el derecho de adquirirlos por el tanto cuando otro pida su enajenación; siempre que hagan uso de ese derecho dentro de un término que no exceda de un mes y que indemnicen al denunciante de los gastos que hubiere hecho en el denuncia, mensura y deslinde del terreno.

Art. 19. Los contratos á que se refiere el artículo anterior, se celebrarán siempre en términos que no impidan la enajenación de los terrenos baldíos á que se refieren, los cuales se entregarán al que los hubiere denunciado y adquirido, á más tardar seis meses después de expedido el título correspondiente.

Igualmente, todo permiso expedido conforme á los reglamentos administrativos, para la explotación de terrenos baldíos ó sus productos, se entenderá siempre otorgado con calidad de que cesará tan luego como el terreno fuere adjudicado conforme á esta ley, sin más derecho, por parte de quien obtuvo el permiso, que el de pedir la devolución de lo que por él hubiere satisfecho, proporcionalmente al tiempo que faltare para su expiración.

Art. 20. La adjudicación de terrenos baldíos y nacionales, así como la de excedencias y demasías, con sujeción á los trámites y formalidades establecidos en esta ley, confiere al adquirente la propiedad del terreno contra la Nación y contra los particulares que hubieron prestado su conformidad á la adjudicación ó que, habiéndose opuesto á ella, hubieren sido judicialmente vencidos. Respecto de terceros que no hubieren sido oídos, la propiedad sólo se adquirirá por prescripción ú otro título legal.

Art. 21. El Ejecutivo Federal queda facultado para reservar temporalmente los terrenos baldíos que estime

conveniente, para conservación ó plantío de montes, reservación ó reducción de indios, ó colonización, en los términos que establezcan las leyes.

TÍTULO II.

De la manera de adquirir los terrenos que son objeto de esta ley.

Art. 22. Para tramitar los asuntos relativos á terrenos baldíos, se establecerán Agencias en los Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios, á cargo de personas nombradas por la Secretaría de Fomento. Estos Agentes serán en número variable, determinándose con claridad el territorio dentro del cual hayan de ejercer sus funciones; y por cada uno de ellos, se nombrará uno ó más suplentes. No percibirán sueldo del Erario Federal; pero cobrarán honorarios de acuerdo con la tarifa que, al efecto, expida la Secretaría de Fomento.

Art. 23. El denuncia de terrenos baldíos se hará ante el Agente de la Secretaría de Fomento, dentro de cuya circunscripción se encuentre el terreno, presentando el denunciante escrito por duplicado, en el que se harán constar, con toda claridad, la situación del terreno y los linderos que lo separen de cualquiera otra propiedad.

Art. 24. Presentado el escrito, el Agente procederá á registrarlo en un libro especial y en presencia del denunciante, consignando el día y la hora de la presentación, tanto en el libro como en el escrito y en su duplicado, devolviéndose éste, en el acto, al denunciante para resguardo de su derecho.

Art. 25. Dentro de los quince días siguientes al de la presentación del escrito de denuncia, el Agente investigará si el terreno que se denuncia ha sido deslindado ó está reservado para bosque, colonia ó reducción de indios, ó por si algún otro motivo está en posesión de él la Hacienda pública; y no hallándose en ninguno de los casos anteriores, procederá á admitir el denuncia y á tra-

mitarlo en los términos que fije el Reglamento de procedimientos administrativos.

Art. 26. Los Agentes no tramitarán los denuncios que se les presenten, relativos á terrenos ya denunciados ó titulados; pero en todo caso deberán registrar estos denuncios, y los acuerdos que dictaren, desechando un denuncia, serán revisables por la Secretaría de Fomento en los términos que en los Reglamentos se establezcan.

Art. 27. Todo denuncia de terrenos baldios se publicará, tanto en el local de la Agencia como en el periódico oficial de la capital del Estado, Distrito ó Territorio donde el terreno estuviere ubicado, por el término y en la forma que determinen los Reglamentos.

Los gastos de esa publicación serán por cuenta del denunciante, así como los de medición del terreno y los de deslinde, que en cada caso se ha practicar, previa citación de colindantes, por perito titulado, que nombrará el denunciante con aprobación del Agente.

Art. 28. Si el baldío denunciado estuviere limitado en todo su perímetro por terrenos no baldíos, podrá conservar la figura que tenga, sea cual fuere. Si sólo estuviere limitado en parte por terrenos de esta clase, los lados que de nuevo se tracén serán rectilíneos, y los ángulos cuanto menos agudos y obtusos sea posible. Si estuviere circundado en su totalidad por baldíos, la figura será forzosamente un cuadrado.

Quando el baldío denunciado esté próximo á terrenos no baldíos, se tomará el límite de éstos por límite del terreno denunciado, ó se dejará entre ambos, según prefiera el adjudicatario, una distancia que no baje de un kilómetro.

Art. 29. Levantado el plano del terreno denunciado, hecho el deslinde, y concluidos los plazos que fije el Reglamento de procedimientos, y siempre que dentro de ellos no se hubiere presentado opositor, el Agente sacará copias del expediente y del plano, á fin de enviarlas á la Secretaría de Fomento para su revisión, por conducto

del Gobernador del Estado respectivo, quien informará lo que estime por conveniente.

Art. 30. Revisadas las copias del expediente y del plano por la Secretaría de Fomento, y encontrándose que se ha cumplido con todos los trámites requeridos por la ley y sus Reglamentos, y que los trabajos periciales relativos al levantamiento del plano y al deslinde se han ejecutado debidamente, la expresada Secretaría adjudicará el terreno al denunciante y le notificará que proceda á hacer el pago del precio del terreno, para que se le expida el título correspondiente de propiedad. Esta notificación se hará por conducto del Agente ante quien se hubiere hecho el denuncia, si el denunciante no residiere en esta capital, ni tuviere en ella persona autorizada para representarle.

Art. 31. El precio del terreno baldío denunciado, será el que fije la Tarifa vigente en la época en que se hizo el denuncia, y se ha de pagar dentro de los dos meses siguientes al acuerdo de la Secretaría de Fomento, que hubiere ordenado la adjudicación del terreno. Si pasare este plazo sin que se presenten á la mencionada Secretaría los comprobantes de haberse verificado el pago, el denunciante perderá los derechos que hubiere adquirido, y el terreno se incorporará á los nacionales. Si, por el contrario, se presentaren oportunamente dichos comprobantes, se mandará extender y se entregará el título de propiedad al denunciante.

Art. 32. Si concluidos los trámites de un denuncia, la Secretaría de Fomento creyere que el terreno de que se trata debe reservarse para algún uso público ó para alguno de los fines que autoriza la presente ley, podrá negarse la adjudicación al denunciante é incorporar el terreno á los nacionales; pero en este caso, se indemnizará al denunciante de los gastos que hubiere hecho en el denuncia y medición del terreno y en la tramitación del expediente respectivo.

Art. 33. Los Agentes suspenderán la tramitación del expediente desde el momento en que hubiere oposición

relativa á todo el terreno de que se trate, formulada, de tal manera, que no pueda precisarse extensión determinada de tierras. Si la oposición fuere sólo de una parte claramente especificada del terreno, continuarán los trámites administrativos, en todo lo que la oposición no comprenda, si así lo pidiere el denunciante; y sólo por lo que ésta afecte, se abrirá el juicio correspondiente ante el Juzgado de Distrito del Estado, Distrito ó Territorio de la ubicación del terreno.

Art. 34. El juicio de oposición se substanciará con audiencia del Promotor Fiscal, como representante de la Hacienda pública y con sujeción á los procedimientos que señalen las leyes en materia federal, para el juicio sumario, causando siempre ejecutoria la sentencia de segunda instancia.

Art. 35. La sentencia definitiva que se pronuncie sobre una oposición, contendrá siempre declaración expresa sobre las costas del juicio y se remitirá en testimonio al Agente de tierras, para que la agregue al expediente administrativo. Si fuere totalmente adversa al denunciante, el denuncia se tendrá por no hecho en lo que ataque los derechos del opositor; y, por último, si fuere totalmente adversa á éste, el denuncia continuará sus trámites como si no hubiese habido oposición.

Art. 36. La Secretaría de Fomento podrá negar la adjudicación de los terrenos baldíos que se denuncien á lo largo de los ríos ó cursos de agua, cuando por esos denuncios se inhabiliten, por quedar sin acceso al río ó al curso de agua, los terrenos colindantes; pues hasta donde fuere posible se procurará que todos los lotes ó fracciones que se formen con los terrenos baldíos que atravésare un río, tengan acceso á éste.

Art. 37. Solamente por causa de oposición podrán los Agentes suspender los trámites de un denuncia; pero por ningún otro motivo, ni en ningún otro caso, suspenderán dichos trámites, ni ampliarán los plazos, debiendo á la conclusión de éstos, y en la sucesión en que ocurran, sacar copia del expediente, á fin de remitirla á la Secreta-

ría de Fomento, para que ésta declare la deserción del denunciante moroso ó exija la responsabilidad del Agente. El denunciante que una vez hubiere sido declarado moroso, no podrá volver á denunciar el mismo terreno baldío, dentro de un año de haber sido declarado desierto su primer denuncia.

Art. 38. Las excedencias y demasías de una propiedad, así como los terrenos á que se refiere el art. 10 de la presente ley, pueden adquirirse por denuncia, llenando los requisitos que se establecen en los artículos anteriores, ú ocurriendo directamente á la Secretaría de Fomento, la cual queda autorizada para celebrar arreglos y composiciones en todo lo que se refiera á los intereses de la Nación, ya sea declarando que no hay baldíos, excedencias ni demasías dentro de los límites de una propiedad, ó ya acordando que al dueño de ésta se adjudiquen los baldíos, demasías ó excedencias que resultaren.

Art. 39. Para la celebración de los arreglos y composiciones á que se refiere el artículo anterior, serán requisitos indispensables:

I. Que por perito titulado, y á satisfacción de la Secretaría de Fomento, se levante y presente el plano del terreno á la escala y con los demás requisitos y detalles que fijen los reglamentos administrativos.

II. Que se haga constar de una manera auténtica y fehaciente, la conformidad de todos y cada uno de los actuales colindantes, con los linderos que en el plano se señalan al terreno cuya composición se solicita, ó que si alguna diferencia se hubiere suscitado sobre dichos linderos, se haya decidido por sentencia definitiva y pasada en autoridad de cosa juzgada.

La ley reputa medio bastante para comprobar la indicada conformidad de los colindantes, cualquiera de los siguientes:

A. Escritura pública otorgada ante Notario ó Juez autorizado para otorgar instrumentos públicos.

B. Comparecencia ante un Juez de primera Instancia.

C. Comparecencia ante el Agente de tierras de la cir-

cunscripción en donde la propiedad estuviere ubicada.

III. Que se presenten, en forma legal, los títulos primordiales, ó en su caso, los translativos de dominio.

IV. Que se presente igualmente en forma legal, el último título translativo de dominio, debidamente inscrito en el Registro de la propiedad del Distrito, Partido ó Cantón en que esté ubicado el terreno de que se trate.

V. Que se presente también, original ó en copia certificada, la información rendida ante el Juzgado de Distrito correspondiente, y que compruebe la posesión del terreno ó de las excedencias ó demasías, durante el término requerido por esta ley.

Art. 40. Llenados los requisitos que exige el artículo anterior, la Secretaría de Fomento podrá hacer la declaración de no existir baldíos dentro de los límites de una propiedad, ó adjudicar á su poseedor los baldíos, demasías y excedencias que en ella hubiere, previo pago del precio que corresponda, conforme á la tarifa vigente en la época en que se haya hecho la solicitud, y con las rebajas concedidas por esta ley á los poseedores.

Art. 41. Los terrenos nacionales serán vendidos por la Secretaría de Fomento, al contado ó á plazos, y á precios convencionales, que en ningún caso serán inferiores á los que señale la tarifa vigente al acordarse la enajenación. La Secretaría de Fomento, previos los informes que estime convenientes, podrá acordar ó negar la enajenación, y aun conceder plazos para el pago del precio; pero en este último caso, no se expedirá título de propiedad al adquirente, sino cuando haya acabado de pagar el precio convenido.

Cuando los terrenos se enajenen para objetos de colonización, los contratos respectivos se sujetarán á lo que establecen las leyes especiales sobre esta materia.

TÍTULO III.

De las franquicias que se conceden á los poseedores de terrenos baldíos, demasías y excedencias.

Art. 42. Los poseedores de demasías gozarán de una rebaja de sesenta y seis por ciento en el precio de tarifa. Los de excedencias y de baldíos con título translativo de dominio y posesión de más de veinte años, gozarán de una rebaja de cincuenta por ciento sobre el indicado precio de tarifa, y esa rebaja será sólo de treinta y tres por ciento para los poseedores de baldíos con título translativo de dominio y posesión de más de diez años y menos de veinte.

Art. 43. Durante un año, contado desde la fecha en que comience á regir esta ley, solamente los poseedores de demasías, excedencias y terrenos baldíos, á quienes se refiere el artículo anterior, podrán solicitar su adquisición, quedando después de este plazo denunciabiles por cualquiera otra persona; pero sin que el denunciante tenga derecho á rebaja en el precio.

Transcurrido el plazo de un año que queda indicado, aun en caso de denuncia por un tercero, el poseedor tendrá el derecho de ser preferido en la adjudicación del terreno de que se trate, siempre que hiciere uso de él antes de que el expediente sea remitido por la Agencia respectiva á la Secretaría de Fomento, y pagando al denunciante los gastos que hubiere hecho en el denuncia.

Art. 44. Queda derogada, desde la fecha en que esta ley comience á regir, cualquiera ley ó disposición que prohíba la prescripción de los terrenos baldíos. En consecuencia, podrá, en lo sucesivo, cualquier individuo, no exceptuado por la ley, prescribir hasta cinco mil hectaras de terreno baldío, y no más, si concurren los requisitos que con relación al tiempo de posesión y á la naturaleza del título que lo ampare, establece el Código Civil del Distrito Federal.

TÍTULO IV.

Del Gran Registro de la propiedad de la República.

Art. 45. Se establece el Gran Registro de la propiedad de la República, que estará á cargo de una Oficina dependiente de la Secretaría de Fomento, y en la cual se inscribirán con los requisitos y formalidades que fijen esta ley y sus Reglamentos, los títulos primordiales de terrenos baldíos ó nacionales y los expedidos en virtud de los arreglos y composiciones que hubiere hecho ya ó hiciera en lo futuro la Secretaría de Fomento.

Art. 46. El Gran Registro de la propiedad de la República será público, pudiendo examinar y pedir certificación y copia de las inscripciones y planos que en él se conserven, toda autoridad ó persona que lo solicite.

Art. 47. La inscripción en el Gran Registro de la propiedad de la República será enteramente voluntaria para los dueños y poseedores de tierras; y, por lo mismo, la falta de dicha inscripción no les privará de ninguno de los derechos que les correspondan, conforme á las leyes vigentes; pero sin que gocen de las franquicias concedidas á las propiedades registradas.

Art. 48. Toda propiedad inscrita en el Gran Registro de la propiedad de la República, será considerada por el Gobierno Federal como perfecta, irrevocable y exenta de todo género de revisión. En consecuencia, los efectos que en la inscripción surtirá, con relación al Gobierno y autoridades de la Nación, serán que ninguna de éstas, sea cual fuere su categoría, ni sus agentes de cualquiera especie, puedan exigir en ningún tiempo la presentación de títulos ó documentos primordiales, ni mucho menos sujetarlos á inquisición ó revisión de ninguna clase, pues el simple certificado de una inscripción surtirá el efecto de un título perfecto é irrevocable, sin que por ningún motivo pueda rectificarse la extensión superficial de la propiedad inscrita.

Art. 49. Con relación á los denunciantes de terrenos comprendidos dentro de los límites de una propiedad inscrita en el Gran Registro de la propiedad de la República, sea que el denuncia se haga á título de ser dichos terrenos baldíos, excedencias ó demasías, la inscripción surtirá el efecto de que el denuncia se considere infundado é improcedente, declarándose así de plano, tan luego como se presente el certificado de la inscripción; pero sin perjuicio de que tal declaración sea revisable por la Secretaría de Fomento, según lo establecido en el artículo 26.

Art. 50. Con relación á los colindantes de una propiedad ó terreno inscrito en el Gran Registro de la propiedad de la República, surtirá los mismos efectos que las leyes atribuyen á un título válido y perfecto, mientras no se obtenga una sentencia judicial que haya causado ejecutoria y en la cual se declare que es nula la inscripción ó que ésta debe modificarse en la parte que concierne al colindante opositor.

Art. 51. No será admitido á pedir la nulidad de una inscripción:

I. El que hubiere consentido en los linderos fijados á la propiedad inscrita en el plano que sirvió para la inscripción, ya sea que este consentimiento se haya dado personalmente ó ya por alguno de los antecesores ó causahabientes del que pretenda oponerse.

II. El que habiéndose opuesto á que se fije determinado linderos, antes de que la inscripción se verifique, hubiere sido vencido en juicio por sentencia definitiva.

Art. 52. Los efectos atribuidos á la inscripción de una propiedad en los artículos que preceden, no librarán á los poseedores de tierras de la obligación de permitir que se identifiquen por el Gobierno ó sus agentes ó por particulares, en ello interesados, los límites ó linderos de la propiedad inscrita en los casos en que tal identificación proceda con arreglo á derecho.

Art. 53. Ninguna inscripción de un terreno ó propiedad se verificará sino por acuerdo expreso de la Secre-

taria de Fomento, que se archivará en unión del plano de la finca ó terreno de que se trate.

Art. 54. Toda inscripción comprenderá:

I. El nombre del que la solicite.
II. El nombre con que sea conocida la finca, propiedad ó terreno á que la inscripción se refiera, ó el que lo pusiere su propietario.

III. La ubicación de la finca, propiedad ó terreno, con relación á la división política del territorio nacional, expresando, cuando menos, el Estado, Distrito, Cantón ó Partido y Municipalidad.

IV. Los linderos de la finca, propiedad ó terreno en todo su perímetro, con referencia, hasta donde fuere posible, á puntos fijos é invariables de fácil identificación, ó á mojones artificiales de construcción sólida y permanente.

V. Fecha y extracto de todos los títulos primordiales de dominio que sirvan de fundamento á la inscripción.

VI. Fecha y extracto del último título translativo de dominio extendido en favor del que solicite la inscripción.

VII. Copia literal del acuerdo de la Secretaría de Fomento que ordene la inscripción.

VIII. Los demás datos y circunstancias que exijan los reglamentos administrativos.

Art. 55. La Secretaría de Fomento no podrá acordar la inscripción de una propiedad sin que previamente se hayan llenado las siguientes condiciones:

I. Declaración hecha por la misma Secretaría, de que está satisfecho todo interés de la Nación, en lo que se refiera á la enajenación de la propiedad ó terreno de que se trate.

II. Presentación del último título translativo de dominio en favor del que solicite la inscripción, debidamente inscrito en el Registro Público del Distrito, Partido ó Cantón en que la propiedad esté situada.

III. Levantamiento y presentación del plano del terreno

no ó propiedad, con los requisitos que exige la fracción I del art. 39.

IV. Constancia de la conformidad de todos y cada uno de los colindantes, con los linderos que en el plano se señalen al terreno, en la forma que expresa la fracción II del citado art. 39, ó la justificación de haber sido vencido en juicio el colindante que se hubiere opuesto.

Art. 56. Cada inscripción se referirá á una sola finca ó propiedad; en consecuencia, ninguna inscripción podrá comprender fincas ó terrenos que no estuvieren unidos, constituyendo una sola propiedad, aunque pertenezcan á un mismo dueño.

Art. 57. Para que el certificado de una inscripción en el Gran Registro de la propiedad de la República surta los efectos que esta ley le atribuye, no se necesitará que exte extendido en nombre de la persona que lo exhiba; pero los propietarios de fincas ó terrenos tendrán el derecho de pedir que se varíe el nombre de aquel en cuyo favor se haya hecho una inscripción, presentando al Gran Registro de la propiedad de la República un instrumento público que compruebe que son sucesores legítimos á título singular ó universal de la persona en cuyo favor se haya hecho la inscripción, siempre que tal documento esté debidamente inscrito en el Registro Público de la propiedad del Distrito, Cantón ó Partido en donde el terreno estuviere ubicado.

Art. 58. En caso de que un terreno ó propiedad ya inscrito se fraccione ó divida, se hará la anotación correspondiente en la primitiva inscripción, y se abrirá una nueva, respecto de cada fracción ó parte que hubiere pasado á otro propietario, pero sin que al abrirse la nueva inscripción puedan omitirse la presentación y archivo del plano de la fracción á que aquella se refiera, ni las anotaciones que corresponda hacer en el plano primitivo de la propiedad fraccionada.

Art. 59. Fuera de los casos de transmisión, división ó fraccionamiento de una propiedad inscrita, á que se refieren los dos artículos anteriores, sólo podrá alterarse,

modificarse ó cancelarse una inscripción, por virtud de sentencia definitiva y pasada en autoridad de cosa juzgada, dictada por el Juez ó Tribunal federal que fuere competente por razón de la ubicación del terreno ó finca de que se trata, y en la cual se declare que la inscripción fué nula ó que debe alterarse ó modificarse. Sólo será causa legal para declarar la nulidad ó modificación de una inscripción, la comprobación de haberse acordado ésta por error, dolo ó fraude, ó sin haberse llenado los requisitos previos que la ley establezca. En esta clase de juicios se oirá siempre y se tendrá como parte al Promotor fiscal.

Art. 60. La Secretaría de Fomento dará noticia á los agentes de tierras de las propiedades que havan sido inscritas en el Gran Registro de la propiedad de la República y que estén ubicadas dentro de los límites de su circunscripción, con objeto de que por ningún título ni motivo, admitan denuncia de ellas ó de parte de las tierras que las formen.

Art. 61. La inscripción en el Gran Registro de la propiedad de la República causará un derecho que será pagado en estampillas que se adherirán al libro en que se haga cada inscripción, con arreglo á la tarifa siguiente:

Por las propiedades que midan menos de 10,000 hectaras, se pagará á razón de un centavo por hectara, sin que en ningún caso pueda pagarse una cuota menor de \$2.

Las propiedades que midan más de 10,000 y menos de 10,000 hectaras, pagarán la cuota que queda expresada de un centavo por hectara, por las primeras 10,000, y por las que hubiere de exceso, medio centavo por hectara.

Por las propiedades que midan más de 50,000 hectaras, se pagarán las cuotas que quedan indicadas, y un cuarto de centavo por cada hectara que exceda de 50,000.

Estos derechos se pagarán por una sola vez; pero por las copias certificadas que se dieren de una inscripción

y por las anotaciones que en ellas se hicieren, en caso de cambio de propietario ó de división de una propiedad, se podrán cobrar los derechos que fije el Arancel que apruebe la Secretaría de Fomento, y los cuales se pagarán también en estampillas del timbre.

Art. 62. El Jefe ó Encargado del Gran Registro de la propiedad de la República otorgará una fianza que no bajará de \$10,000, por los perjuicios que á la Hacienda pública ó á los particulares pueda causar por dolo ú omisión en las inscripciones que hiciere; pero tendrá derecho de hacer observaciones á los acuerdos en que tales inscripciones se mandan hacer, y sólo cesará su responsabilidad cuando, á pesar de ellas, se le repitiere el acuerdo.

TITULO V

Disposiciones generales.

Art. 63. Se declaran exentos de toda revisión y composición los títulos expedidos por autoridad competente, conforme á las leyes, y especialmente los que la Secretaría de Fomento hubiere otorgado desde la fecha en que comenzó á regir la ley de 20 de Junio de 1863, los cuales, expresamente se confirman y ratifican en lo que se refiere al interés de la Hacienda pública, sin que, en lo sucesivo, puedan ser nulificados ni modificados, sino por causa de error ó dolo, declarados por los tribunales competentes de la Federación en sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, los títulos expresados sólo ampararán los terrenos comprendidos dentro de la extensión superficial á que se refieren, y de los linderos que en ellos se fijen, sin que puedan extenderse á mayor superficie ó á otros linderos.

Art. 64. Igualmente se confirman y ratifican en los términos indicados y por lo que al interés de la Hacienda pública se refiere, las enajenaciones de terrenos baldíos y nacionales hechas por la Secretaría de Fomento á título de composición, y las declaraciones de la misma Se-

cretaría sobre que, determinada propiedad, no contiene baldíos, excedencias ni demasías, las cuales enajenaciones y declaraciones sólo podrán ser nulificadas mediante sentencia definitiva, pronunciada por los tribunales competentes de la Federación, en que se declare que fueron obtenidas por error ó dolo.

Art. 65. Todo título primordial de terrenos baldíos, expedido por autoridad competente y con todos los requisitos establecidos por las leyes vigentes en la época en que se expidió, es firme y valedero, y no necesita, por lo tanto, de revisión, ratificación ni confirmación de ninguna especie, siempre que dicho título esté conforme con la extensión superficial y los linderos fijados en él al terreno, ó que se hayan suplido los vicios que pudiera haber adolecido por composición ajustada con autoridad competente.

La prevención anterior no modifica los preceptos de esta ley en lo referente á propiedades inscritas en el Gran Registro de la propiedad de la República, cuyos poseedores sólo tendrán obligación de permitir que se identifiquen los linderos, de conformidad con lo establecido en el art. 52.

Art. 66. Los ingenieros que intervengan en el deslinde y medición de terrenos baldíos y nacionales, ó de excedencias y demasías, son civilmente responsables para con la Hacienda pública de los dañosos y perjuicios que le causen por negligencia ó impericia en el desempeño de su encargo; sin perjuicio de las penas en que incurran en caso de dolo ó fraude con arreglo á las leyes penales.

Art. 67. Subsisten la prohibición y la incapacidad jurídica que tienen las comunidades y corporaciones civiles para poseer bienes raíces; y los Gobiernos de los Estados, auxiliados por las autoridades federales, continuarán el señalamiento, fraccionamiento en lotes y adjudicación entre los vecinos de los pueblos, de los terrenos que forman los ejidos, y de los excedentes del fundo legal, cuando no se hubieren hecho esas operaciones; sujetándose para el señalamiento á los límites fijados por las concesiones

otorgadas á los pueblos, ya por el Gobierno español en la época colonial, ya por los Gobiernos de los Estados en la época en que pudieron disponer de los baldíos. En caso de que en la concesión no se hubieren fijado ni la extensión ni los límites de dichos terrenos, se asignará á cada población una legua cuadrada, conforme á las disposiciones antiguas, siempre que haya terrenos baldíos en los que pueda hacerse el señalamiento, porque no ha de invadirse la propiedad particular, ni ha de tomarse de los baldíos mayor cantidad de terreno que la que exprese la concesión.

Art. 68. Si algún pueblo estuviere poseyendo, á título de ejidos, excedencias ó demasías, podrá ser admitido á composición, en los mismos términos que los particulares.

Art. 69. Para solicitar las composiciones que expresa el artículo que precede, así como para defender de denuncias ilegales los ejidos, terrenos y montes de pueblos, y para gestionar su repartición ó fraccionamiento entre los individuos que á ello tengan derecho, se confiere personalidad jurídica á los Ayuntamientos, Asambleas ó corporaciones municipales de la República, sea cual fuere la denominación con que sean designados por las leyes locales.

Art. 70. La Secretaría de Fomento expedirá los reglamentos para la explotación de los bosques y terrenos baldíos que temporalmente mandará reservar conforme á la facultad que al Ejecutivo Federal concede el art. 21 de la presente ley.

Art. 71. Todo contrato celebrado y toda disposición dictada sobre terrenos baldíos, demasías y excedencias, ó sobre terrenos nacionales, por funcionarios á quienes la ley no comete esta facultad, son nulos de pleno derecho y no constituyen responsable, en cosa alguna, á la Hacienda pública.

Art. 72. Nadie puede oponerse á que se midan, deslinden ó ejecuten por orden de autoridad competente cualesquiera otros actos necesarios para averiguar la verdad ó legalidad de un denuncia; pero siempre que la senten-

cia declare no ser baldío, en todo ni en parte el terreno denunciado, habrá derecho á la indemnización de los daños y perjuicios que por el denuncia se irroguen, á reserva de la acción criminal que proceda conforme á las leyes.

La prevención que precede, en manera alguna modifica las contenidas en los arts. 48 y 49.

Art. 73. El simple hecho de haber denunciado un terreno baldío no da derecho para tomar posesión de él, que no se confiere legalmente sino mediante la expedición del título que corresponda, en la forma y con los requisitos que establece esta ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 74. Los expedientes sobre denuncios de terrenos baldíos que se encuentren en tramitación al comenzar á regir esta ley, continuarán radicados ante los Juzgados de Distrito que de ellos estén conociendo, y se proseguirán y terminarán de conformidad con las leyes vigentes al ser iniciados; sin perjuicio del derecho de los denunciados de desistirse de sus denuncios, para formularlos de nuevo ante la Agencia de terrenos baldíos que corresponda, en caso de que no haya habido oposición, pues si la hubiere, ésta seguirá subsistiendo conforme á la ley.

Art. 75. Los Jueces de Distrito y los Tribunales de Circuito ante quienes esté pendiente alguno de los asuntos á que se refiere el artículo que precede, remitirán á la Secretaría de Fomento, dentro del mes siguiente á la fecha en que esta ley comienza á regir, una noticia de los expedientes sobre terrenos baldíos de que estuviere conociendo, con indicación del nombre del denunciante, del terreno denunciado, del nombre del opositor, si lo hubiere, de la última diligencia practicada y de la fecha en que ésta hubiere tenido lugar.

Art. 76. Los Juzgados de Distrito y los tribunales de Circuito que estuviere conociendo de asuntos referentes á terrenos baldíos, procederán de oficio á hacer efec-

tiva la prevención del art. 21 de la ley de 22 de Julio de 1863 y de las circulares relativas de 27 de Julio de 1868 y de 26 de Octubre de 1884, declarando desiertos y abandonados los denuncios, cuyos trámites se hubieren paralizado sin motivo legal, y mandando archivar los expedientes relativos.

Art. 77. Los expedientes sobre denuncios de terrenos baldíos, que á la fecha en que comience á regir esta ley estuvieren pendientes ante la Secretaría de Fomento, se decidirán con arreglo á las leyes vigentes en la época en que fueron iniciados; pero las composiciones, declaraciones y arreglos que en la fecha indicada no estuviere definitivamente resueltos, se sujetarán á las reglas que esta ley establece.

Art. 78. Por ahora la planta y sueldos de la Oficina encargada del Gran Registro de la propiedad de la República, serán los siguientes:

Un Director	\$ 3,000 00
Un Oficial 1º	2,000 00
Un ídem 2º	1,800 00
Dos escribientes á \$600	1,200 00
Un archivero	1,200 00

Art. 79. Esta ley comenzará á regir en toda la República el 1º de Julio del presente año; y desde esa fecha quedarán derogadas la de 20 de Julio de 1863 y las demás que estén vigentes sobre terrenos baldíos.

“Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á veintiséis de Marzo de mil ochocientos noventa y cuatro. — Porfirio Díaz. — ALC. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 26 de Marzo de 1894. — Fernández Leal. — AL...

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1.^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORRIRIO DIAZ, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con las prescripciones de la ley de 26 de Marzo del presente año, he tenido á bien expedir el siguiente

REGLAMENTO para los procedimientos administrativos en materia de terrenos baldíos y nacionales, excedencias y demasías.

CAPÍTULO I.

De los agentes.

Art. 1.^o Conforme á lo prescripto en el art. 22 de la ley, la Secretaría de Fomento nombrará en cada Estado, en el Distrito Federal y en los Territorios, un Agente propietario y uno ó más suplentes, los cuales recibirán y tramitarán las solicitudes de denuncios de terrenos baldíos, demasías y excedencias que se les presenten, y ejercerán las demás funciones que les designen la ley y sus reglamentos. Si las circunstancias locales ó el número de negocios indicaren la conveniencia del nombramiento de mayor número de agentes, se procederá á hacerlo previos lo informes y estudios que se juzguen necesarios.

Art. 2.^o Para ser Agente de la Secretaría de Fomento en el ramo de terrenos baldíos, se requiere, además de las condiciones generales de honradez y moralidad, ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, y

no ejercer ningún cargo de autoridad del Estado, Territorio ó Distrito Federal en que se establezca la Agencia.

Art. 3.^o Por cada Agente propietario que se nombre, se nombrará uno ó más suplentes, según lo requiera el movimiento de negocios en la localidad.

Los Agentes suplentes deberán tener las mismas cualidades que los propietarios, y han de suplir á estos en todas las faltas temporales y absolutas que puedan ocurrir, así como en las ocasionadas por impedimento legal en determinado negocio, previo llamamiento que se les haga por los propietarios.

Art. 4.^o En el caso de muerte ó de enfermedad grave, que impida al Agente propietario llamar al suplente, entrará éste á ejercer sus funciones, dando aviso inmediato á la Secretaría de Fomento, por correo y por telégrafo, si lo hubiere.

Art. 5.^o Los Agentes propietarios ó los suplentes en ejercicio, no podrán separarse del lugar de su residencia, sin previo permiso de la Secretaría de Fomento. En casos urgentes ó cuando la separación no ha de exceder de ocho días, bastará que den aviso á la misma Secretaría, por telégrafo y por correo, expresando la causa de la separación, y la constancia del llamamiento al suplente.

Art. 6.^o Se considerarán impedimentos legales para los Agentes, los que para los jueces establecen las fracs. I á XI y XII del art. 1,132 del Código de Comercio.

Art. 7.^o Los Agentes han de dar á conocer al público el lugar en que se han de despachar los asuntos del ramo y las horas que han de consagrar diariamente á ese despacho, el cual no podrá interrumpirse sino los domingos y en los días de fiesta nacional.

Art. 8.^o Los Agentes no tendrán derecho á percibir más honorarios que los que fije el arancel respectivo, y consultarán con la Secretaría de Fomento acerca de cuál deba ser el monto de los correspondientes á los casos no previstos en dicho arancel.

Art. 9.^o Los Agentes remitirán á la Secretaría de Fomento en los primeros diez días de cada mes, una noticia

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1.^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORRIRIO DIAZ, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con las prescripciones de la ley de 26 de Marzo del presente año, he tenido á bien expedir el siguiente

REGLAMENTO para los procedimientos administrativos en materia de terrenos baldíos y nacionales, excedencias y demasías.

CAPÍTULO I.

De los agentes.

Art. 1.^o Conforme á lo prescripto en el art. 22 de la ley, la Secretaría de Fomento nombrará en cada Estado, en el Distrito Federal y en los Territorios, un Agente propietario y uno ó más suplentes, los cuales recibirán y tramitarán las solicitudes de denuncias de terrenos baldíos, demasías y excedencias que se les presenten, y ejercerán las demás funciones que les designen la ley y sus reglamentos. Si las circunstancias locales ó el número de negocios indicaren la conveniencia del nombramiento de mayor número de agentes, se procederá á hacerlo previos lo informes y estudios que se juzguen necesarios.

Art. 2.^o Para ser Agente de la Secretaría de Fomento en el ramo de terrenos baldíos, se requiere, además de las condiciones generales de honradez y moralidad, ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, y

no ejercer ningún cargo de autoridad del Estado, Territorio ó Distrito Federal en que se establezca la Agencia.

Art. 3.^o Por cada Agente propietario que se nombre, se nombrará uno ó más suplentes, según lo requiera el movimiento de negocios en la localidad.

Los Agentes suplentes deberán tener las mismas cualidades que los propietarios, y han de suplir á estos en todas las faltas temporales y absolutas que puedan ocurrir, así como en las ocasionadas por impedimento legal en determinado negocio, previo llamamiento que se les haga por los propietarios.

Art. 4.^o En el caso de muerte ó de enfermedad grave, que impida al Agente propietario llamar al suplente, entrará éste á ejercer sus funciones, dando aviso inmediato á la Secretaría de Fomento, por correo y por telégrafo, si lo hubiere.

Art. 5.^o Los Agentes propietarios ó los suplentes en ejercicio, no podrán separarse del lugar de su residencia, sin previo permiso de la Secretaría de Fomento. En casos urgentes ó cuando la separación no ha de exceder de ocho días, bastará que den aviso á la misma Secretaría, por telégrafo y por correo, expresando la causa de la separación, y la constancia del llamamiento al suplente.

Art. 6.^o Se considerarán impedimentos legales para los Agentes, los que para los jueces establecen las fracs. I á XI y XII del art. 1,132 del Código de Comercio.

Art. 7.^o Los Agentes han de dar á conocer al público el lugar en que se han de despachar los asuntos del ramo y las horas que han de consagrar diariamente á ese despacho, el cual no podrá interrumpirse sino los domingos y en los días de fiesta nacional.

Art. 8.^o Los Agentes no tendrán derecho á percibir más honorarios que los que fije el arancel respectivo, y consultarán con la Secretaría de Fomento acerca de cuál deba ser el monto de los correspondientes á los casos no previstos en dicho arancel.

Art. 9.^o Los Agentes remitirán á la Secretaría de Fomento en los primeros diez días de cada mes, una noticia

detallada de las solicitudes que hubiesen recibido durante el mes anterior, según el modelo que se les acompañe, y darán, además, todos los datos e informes que se les pidan por la misma Secretaría.

Art. 10. Los Agentes han de recibir de la Secretaría de Fomento copias de los planos de los deslindes y mediciones de terrenos baldíos, ejecutados por ingenieros del Gobierno ó por los de Empresas particulares, dentro de la circunscripción que se les haya asignado, y procurarán recabar cuantos datos y documentos pudieren existir, para los efectos del art. 25 de la ley y para poder dar noticias oportunas, y lo más exactas que fuere posible, sobre el ramo, cuando se les pidan por el Gobierno ó por los particulares.

Art. 11. Conforme al Reglamento especial, para la explotación de los terrenos y de los bosques nacionales, los Agentes se harán cargo de los que existan con ese carácter en la circunscripción que se les designe, procurando, desde luego, adquirir datos acerca de los bosques y sus productos, ruinas monumentales, salinas y otras substancias no concesibles por la ley minera, productos de caza y pesca y demás puntos sobre los que tengan que ejercer vigilancia de acuerdo con la ley y sus reglamentos.

Art. 12. También procurarán los Agentes adquirir datos sobre los terrenos nacionales que se encuentren en la jurisdicción de su cargo, y que conforme al art. 21 de la ley, se han de reservar temporalmente para conservación ó plantío de montes, reducción de indios ó colonización, á fin de que, en tiempo oportuno, indiquen cuáles son esos terrenos nacionales y cuál el destino que convendría darles.

Art. 13. Los Agentes serán responsables por las faltas ú omisiones que cometan en el desempeño de sus funciones. Las faltas se castigarán administrativamente por la Secretaría de Fomento, con las penas de suspensión, destitución y multas; mas si hubiere delito, se consignará al responsable al Juez de Distrito á quien corresponda.

Si resultare responsabilidad civil para con la Hacienda

pública, por daños ó perjuicios causados á la Nación ó al Erario Federal, será también exigida ante el Juez de Distrito correspondiente.

CAPÍTULO II.

De los trámites que se han de seguir en los denuncios de terrenos baldíos, demasías y excedencias.

Art. 14. Los denuncios de terrenos baldíos, demasías y excedencias se han de registrar en un libro especial sellado y autorizado por el Oficial Mayor de la Secretaría de Fomento. El registro se ha de hacer en el orden riguroso de fechas y de horas en que se fueron presentando los denuncios, sin dejar espacios en blanco en el libro. Ningún denuncia se ha de recibir fuera de las horas de oficina ni fuera del local de la Agencia.

Art. 15. Las solicitudes de denuncia de terrenos baldíos se han de presentar por duplicado al Agente respectivo de la Secretaría de Fomento.

El escrito de denuncia deberá contener:

I. El nombre, apellido y domicilio del denunciante.

II. La situación del terreno denunciado, expresando con claridad los nombres de la Municipalidad y del Partido, Distrito ó Cantón á que pertenezca; la extensión superficial aproximativa del mismo; los nombres de los terrenos colindantes y los de los dueños ó poseedores de ellos.

III. Si es ó no poseedor del terreno que denuncia; y en el primer caso, el carácter con que lo posee y clase de títulos que lo amparan.

IV. Los nombres de los poseedores, si los hubiere, cuando no sean ellos los denunciante del terreno, expresando, si posible fuere, el carácter con que lo poseen.

Art. 16. Si á juicio del Agente, no hubiese bastante claridad en el escrito de denuncia, tratará de conseguirla, interrogando al mismo solicitante, y consignando sus aclaraciones en la solicitud, en su duplicado y en el re-

gistro de la Agencia, en presencia del interesado, sin que la imposibilidad de éste para dar las explicaciones ó su negativa, sean motivo para suspender los demás trámites.

Art. 17. Luego que se presente al Agente de terrenos baldíos una solicitud de denuncia, procederá inmediatamente á registrarla en el libro respectivo, en presencia del denunciante, asentando el día y la hora de la presentación, así como el número de orden que ha de llevar el expediente que por separado debe formarse en la Agencia. Al mismo tiempo se asentará el día y la hora de la presentación al caso de la solicitud y en su duplicado, que se devolverá en seguida al denunciante, firmado todo por el Agente y sellado con el sello de la Oficina.

Art. 18. En el mismo acto del registro del denuncia el Agente notificará al denunciante que dentro de un plazo de quince días de la fecha del registro, tiene que comunicar á la Agencia quién es el perito titulado que ha de practicar la medición del terreno á fin de que el Agente apruebe ó no el nombramiento de dicho perito. Si el Agente no aprobare el nombramiento, lo consignará en el expediente con la razón de su negativa y podrá prorrogar el plazo por otros quince días y por una sola vez, con el fin de que el denunciante nombre nuevo perito. El denunciante quedará advertido desde el principio, de que si deja pasar éstos y los otros plazos señalados en el Reglamento, le parará en perjuicio.

Art. 19. El agente no podrá admitir ningún otro denuncia del mismo terreno, y siempre que éste se halle bien identificado, desechará los denuncios posteriores que respecto á él se le presenten, pero en todo caso deberá registrar esos denuncios, y los acuerdos que dictare desechándolos serán revisables por la Secretaría de Fomento, á petición de los denunciante.

En el caso de presentación simultánea de dos ó más denuncios para el mismo terreno, la suerte decidirá, en presencia de los denunciante, cuál ha de ser el que se admita.

Art. 20. Dentro de los quince días siguientes al de la presentación y registro del escrito de denuncia los Agentes investigarán si el terreno que se denuncia es nacional ó está reservado para bosque, colonia ó reducción de indios; ó si por algún otro motivo está en posesión de él la Hacienda Pública; ó si ha sido inscrito en el Gran Registro de la Propiedad de la República; pues hallándose en alguno de los casos anteriores, el denuncia será improcedente, y el Agente lo declarará así de plano, escribiendo su acuerdo y comunicándolo al denunciante, en el duplicado del escrito de denuncia.

Art. 21. Al terminar el plazo de quince días á que se refiere el artículo anterior, á más tardar, y no encontrándose la Hacienda Pública en posesión del terreno denunciado, ni siendo éste de los inscritos en el Gran Registro de la Propiedad de la República, el Agente admitirá el denuncia y aprobará ó no el nombramiento del perito titulado para que haga la medición y el deslinde del terreno.

Art. 22. —Admitido el denuncia y aprobado el nombramiento del perito, se presentará éste á la Agencia dentro de un plazo que no ha de exceder de ocho días, á fin de que reciba del Agente en toda forma la comisión para la medida y deslinde del terreno, preste la protesta de cumplir fiel y legalmente con su comisión, y exprese quedar entendido de la prevención contenida en el art. 66 de la ley, de todo lo cual se asentará la debida constancia en el expediente.

Art. 23. El Agente extenderá de oficio la constancia de la comisión que se confiere al perito y se la entregará á éste, autorizada con su firma y con el sello de la oficina, la cual constancia concluirá con la conminación de que quien resistirá los trabajos de campo que tenga que practicar dicho perito, se hará acreedor á las penas establecidas en el art. 904 del Código Penal del Distrito Federal, ó en las disposiciones concordantes de los Códigos de los Estados.

Art. 24. Al extender la constancia de que trata el ar-

ticulo anterior, el Agente fijará al perito un plazo improrrogable, de acuerdo con la extensión superficial del terreno, para que dentro de él cumpla con su cometido, de entera conformidad con las disposiciones de la ley y del presente Reglamento, entregando á la Agencia los ejemplares del plano del terreno, el informe sobre las operaciones de mensura y las manifestaciones de conformidad ó inconformidad de los colindantes. Cuando la extensión sea de diez mil hectáreas ó menos, el plazo será de tres meses. De diez á veinte mil el plazo será de cuatro meses. De veinte á cincuenta mil se concederán cinco meses, y de cincuenta mil hectáreas ó más, seis meses.

Art. 25. Dada la comisión al perito para la medición y deslinde del terreno, el Agente procederá á extender, por duplicado, un extracto que contendrá:

I. El de la solicitud de denuncia con especificación clara y precisa del nombre y domicilio del denunciante, de la situación y linderos del terreno y del número de orden del expediente respectivo.

II. El nombre y domicilio del perito comisionado para las operaciones de mensura y deslinde.

III. La advertencia de que se abre un plazo improrrogable, contado desde la fecha del extracto, para la substanciación del expediente en la Agencia.

Un tanto del extracto se fijará en la tabla de avisos que habrá en el exterior de todas las Agencias, exigiendo, al efecto, al denunciante que expense las estampillas necesarias para esta publicación.

El extracto permanecerá dos meses en la tabla de avisos, de lo que se asentará razón en el expediente.

El otro tanto del extracto se entregará al denunciante para que, á su costa y perjuicio, y dentro de los sesenta días siguientes á la fecha del extracto, se publique tres veces por lo menos en el periódico oficial del respectivo Estado, Territorio ó Distrito Federal.

El denunciante queda obligado á entregar á la Agencia los respectivos ejemplares por duplicado de los periódicos en que se hayan hecho las publicaciones.

Art. 26. La publicación del extracto en los términos del artículo anterior, surte efectos de citación para todos que se crean con derecho á oponerse al denuncia de que se trata.

Art. 27. Además de la citación á que se refiere el artículo anterior, antes de comenzar las operaciones de campo, el perito entregará al denunciante comunicaciones especiales para los dueños ó encargados de todas y cada una de las fincas que como colindantes se hayan fijado en el escrito de denuncia, á fin de que, bajo la responsabilidad y á costa del mismo denunciante, se envíen certificados por correo á los dueños ó encargados de aquellas fincas para que ocurran á las operaciones de medición y deslinde que se vayan á practicar en el terreno denunciado. Dichos dueños, sus apoderados ó encargados, podrán ocurrir ó no á presenciar las operaciones; pero en todo caso deberán manifestar expresamente, por escrito, su conformidad con dichas operaciones, ó hacer también por escrito, las observaciones que estimen necesarias para defender sus derechos. El perito, en el acto que reciba esas manifestaciones de los colindantes está obligado á entregar á cambio de ellas un recibo, en el que se especificarán las fojas que contengan.

Art. 28. En la ejecución de las medidas, los peritos han de observar las prescripciones contenidas en la ley vigente de la materia, de 2 de Agosto de 1863. Al efecto, las medidas longitudinales y las de superficie han de ser las del sistema métrico decimal, con exclusión de cualquier otro. Se han de ejecutar las operaciones de manera que, por los procedimientos científicos necesarios, se obtengan las longitudes horizontales de las líneas y la amplitud de los ángulos, así como la orientación astronómica y también la magnética de uno ó más lados, con la fecha en que se determine la declinación de la aguja.

Los peritos han de procurar referir algunos vértices del polígono que encierre el terreno denunciado á puntos fijos que se encuentren fuera ó dentro del mismo terreno, como cruces ó veletas de iglesias y habitaciones, ro-

cas ú otros objetos notables en las montañas, y se han de procurar igualmente el mayor número posible de verificaciones de sus trabajos.

Art. 29. En la práctica de las operaciones de campo, los peritos deberán tener presentes las disposiciones de la ley en sus arts. 14, 15, 16 y 17, con el fin de que se respeten las zonas que se reservan como dominio de la Federación, y en el caso de islas, esteros y salinas, se proceda conforme á lo que dichos artículos establecen. Deberán, igualmente, tener presentes la prevención del art. 28 de la ley, en cuanto á la figura del terreno y á sus límites con los inmediatos, y la del art. 36 sobre baldíos situados á lo largo de los cursos de agua; siendo de responsabilidad para ellos no llamar la atención sobre esas diversas circunstancias.

Art. 30. Los peritos están obligados á atender cuantas observaciones les hagan el denunciante y los que se hayan opuesto ó se propongan oponerse al denuncia; pero no expresarán juicio sobre esas observaciones sino en el informe escrito que rindan á la Agencia, cuya presentación, dentro del plazo improrrogable fijado, es de su responsabilidad personal, quedando á su cargo todos los daños y perjuicios que se originen por su falta de cumplimiento.

Art. 31. Terminados los trabajos de campo, el perito deberá presentar al Agente, dentro de plazo improrrogable que se le hubiere señalado, el plano del terreno por triplicado y un informe por duplicado, en el que han de constar una relación detallada de las operaciones que se ejecutaron para obtener la posición de todos los puntos del perímetro y la extensión superficial del terreno, consignándose, al efecto, todos los datos de campo y los resultados de los cálculos que se hicieron para obtener las longitudes de los lados y las amplitudes de los ángulos que forman entre sí, la orientación astronómica de uno de los lados y las coordenadas rectangulares de todos los vértices, referidas á la meridiana verdadera y su perpendicular. Los datos y resultados se han de consignar con

tal claridad, que sea posible verificar cualquiera de ellos sin necesidad de recurrir al mismo perito.

Los planos se han de dibujar con limpieza y corrección en papel fuerte para la conservación del documento, pudiendo sacarse los duplicados y triplicados en lienzo de calca. Las escalas serán siempre decimales y proporcionadas á la extensión superficial del terreno. Conforme lo requiere la ley sobre medidas de tierras, se han de consignar también en los planos, la longitud de los lados, la amplitud de los ángulos, la declinación magnética de la aguja, la superficie en hectaras y las colindancias del terreno.

Art. 32. El perito ha de acompañar á su informe los escritos ó manifestaciones originales que le hayan sido entregados, conforme á lo establecido en el art. 27 de este Reglamento, y en el caso de que alguno ó algunos de los colindantes no le hayan presentado manifestación, así lo hará constar en el informe, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trámites del denuncia en la Agencia.

Art. 33. Si el denunciante del terreno tuviere derecho á alguna de las rebajas que establece el art. 42 de la ley, deberá pedir, en tiempo oportuno, al Juzgado de Distrito respectivo que, con citación del Promotor fiscal, se levante la información que corresponda, á fin de comprobar debidamente el tiempo y forma de la posesión. La información judicial, original ó en copia certificada, deberá entregarse al Agente por el denunciante, para que se remita á la Secretaría de Fomento con la copia del expediente, antes de que expire el plazo total fijado en el extracto á que se refiere el art. 25 de este Reglamento.

Art. 34. Recibidos en la Agencia los planos é informe del perito, y obtenida la conformidad de los colindantes, sin que hubiere habido oposición, el Agente, bajo su más estricta responsabilidad y dentro de los quince días siguientes á los plazos que fija el art. 24, sacará copia del expediente y la remitirá con dos ejemplares del plano cootejados y firmados por él y uno del informe del perito, á

la Secretaría de Fomento para su revisión, por conducto del Gobernador del Estado, Distrito ó Territorio, quien informará lo que estime por conveniente, sobre la enajenación del terreno denunciado.

El Agente dará aviso directo á la misma Secretaría de la fecha en que hubiere hecho la remisión al Gobierno del Estado, Distrito ó Territorio.

Art. 35. Revisadas las copias del expediente y del plano por la Secretaría de Fomento, y encontrándose que se ha cumplido con todos los trámites requeridos por la ley y sus reglamentos, y que los trabajos periciales relativos al levantamiento del plano y al deslido se han ejecutado debidamente, se adjudicará el terreno al denunciante por la misma Secretaría y se le notificará que haga el pago del precio del terreno y el de las estampillas para el título, advirtiéndole que desde esa fecha comienza á correr el plazo de dos meses para que verifique el pago y quedando entendido de la pena en que, conforme al art. 31 de la ley, incurrirá si deja pasar dicho plazo.

La notificación se hará por conducto del Agente ante quien se hubiere hecho el denuncia, si el denunciante no residiere en esta capital, ni tuviere en ella persona autorizada para representarle, porque en este caso se le hará directamente la notificación y se comunicará al Agente respectivo, á la Secretaría de Hacienda y al Gobernador del Estado ó Territorio en que se encuentre el baldío.

Art. 36. Luego que se presenten á la Secretaría de Fomento los comprobantes de haberse verificado el pago del precio del terreno en las oficinas de Hacienda que corresponda, conforme á la tarifa vigente en la época en que se hizo el denuncia, y ministradas por el adjudicatario las estampillas para el título, se procederá á extender ese documento, el cual deberá contener una descripción breve del terreno, especificando su situación y linderos, con un extracto conciso de la tramitación; será firmado por el Presidente de la república y por el Secretario de Fomento y se registrará en un libro especial que se ha de llevar y conservar en la misma Secretaría.

Art. 37. Una vez requisitado el título, se entregará desde luego al adjudicatario, con un ejemplar del plano del terreno, sellado con el sello de la Secretaría de Fomento y autorizado con la firma del Oficial Mayor de la misma Secretaría, quien certificará que es uno de los ejemplares enviados por el Agente, y á éste se comunicará, así como al Gobernador del Estado ó Territorio respectivo, que se ha hecho la entrega de esos documentos al adjudicatario. Si éste no residiere en la capital de la República, ni tuviere en ella persona que lo represente, la entrega de ellos se hará por conducto del Agente que tramitó el expediente, á quien se remitirán en pliego certificado. La entrega de dichos documentos bastará en todos casos para la tradición del terreno, sin perjuicio de que el adjudicatario pida por su cuenta la posesión judicial del mismo, si así le conviniere.

Art. 38. Todo título expedido con los requisitos prescritos en la ley y en el presente Reglamento, podrá ser desde luego inscrito en el Gran Registro de la Propiedad de la República, siempre que constare la conformidad de todos los colindantes en la forma establecida en la fracción II del art. 39 de la ley, ó la circunstancia de haber sido vencidos en juicio los que se hubieren opuesto.

Art. 39. Si el expediente no fuere de aprobarse, se harán al Agente las observaciones que correspondan con el fin de que se subsanen las faltas advertidas, dentro del plazo que la Secretaría de Fomento señale, y siempre que esas faltas no puedan imputarse al denunciante ó al Agente, porque en esos casos se procederá á declarar la deserción del denunciante moroso ó á exigir la responsabilidad al Agente, con arreglo á lo que dispone el art. 37 de la ley. La declaración de deserción se ha de publicar en el *Diario Oficial del Gobierno Federal* y en la tabla de avisos de la Agencia respectiva, y en la misma declaración se ha de fijar la fecha desde la cual se ha de contar el año dentro del que no puede el moroso volver á denunciar el mismo terreno.

Art. 40. Toda oposición á un denuncia de terrenos

baldíos se ha de formular con precisión, expresando con claridad el opositor, en el ocurso que con tal objeto ha de dirigir al Agente respectivo, cuáles son los derechos que se han vulnerado con el denunció. Si el opositor se presentare durante la práctica de las operaciones de medición y deslinde, será obligación del perito que las ejecute hacer constar en el informe correspondiente esa circunstancia, así como que se le advirtió que debía formalizar su oposición ante el Agente; dejando en todo caso el opositor la manifestación por escrito que exige el art. 27 de este Reglamento.

Art. 41. Si durante la práctica de las operaciones de medición ó deslinde ó durante los plazos que fija el artículo 24 de este Reglamento, se presentare oposición al denunció, formulada de tal manera que no pueda precisarse extensión determinada de tierra, el agente suspenderá la tramitación del expediente, hará al denunciante notificación personal de esa oposición, señalando á él y al opositor, el día y la hora en que deberán concurrir á una junta de avenencia, que se ha de verificar ante el mismo agente. Si ésta no se verificase ó tuviese lugar sin llegar al avenimiento, suspenderá todo procedimiento y remitirá, con las seguridades debidas, el expediente en el estado en que se halle, al Juzgado Distrito del Estado ó Territorio respectivo, á fin de que se abra el juicio correspondiente, y dará aviso de esa remisión á la Secretaría de Fomento.

Art. 42. Si se lograra el avenimiento ó si la operación estuviere formulada por sólo una parte claramente especificada del terreno, continuarán los trámites administrativos del denunció, si así lo pidiere el denunciante, asentando en el primer caso, en el expediente el desistimiento del opositor ó su arreglo con el denunciante, y en el segundo, continuará la tramitación en todo lo que la oposición no comprenda, y sólo por lo que ésta afecte, se abrirá el juicio correspondiente ante el Juzgado de Distrito respectivo, remitiéndole copia de las constan-

cias que fueren necesarias y dándose en ambos casos aviso á la Secretaría de Fomento.

Art. 43. Si la oposición se fundare, exhibiendo el certificado en que aparezca inscrito el terreno denunciado, en el Gran Registro de la Propiedad de la República, se suspenderá inmediatamente el denunció, y el Agente no volverá, bajo su más estricta responsabilidad, á admitir nuevo denunció de ese mismo terreno.

Art. 44. Luego que los Agentes reciban las sentencias definitivas que se pronuncien por los tribunales en juicios de oposición, las agregarán á los expedientes administrativos correspondientes, asentando en ellos las fechas en que se reciban, y procederán de acuerdo con lo que dichas sentencias determinen. Si la sentencia fuere totalmente adversa al denunciante, el denunció se tendrá por no hecho, en lo que ataque los derechos del opositor; y si fuere totalmente adversa á éste, el denunció continuará sus trámites, como si no hubiere habido oposición. En uno y en otro caso el Agente dará conocimiento de todo á la Secretaría de Fomento.

Art. 45. La tramitación de solicitudes relativas á denunciós de excedencias y demasías, en el caso de que los poseedores no ocurran directamente á la Secretaría de Fomento, para celebrar con ellas las composiciones y arreglos á que se refiere el art. 38 de la ley, ó que pasado el término que los favorece y que fija el art. 43 de la misma ley, sean hechas ante los Agentes por terceros interesados, se sujetará en todo á los procedimientos señalados en este capítulo, para el denunció y tramitación de terrenos baldíos.

CAPÍTULO III

De los arreglos y composiciones de terrenos baldíos, demasías y excedencias celebradas directamente con la Secretaría de Fomento.

Art. 46. Conforme al art. 38 de la ley, los poseedores de excedencias y demasías, y los de terrenos baldíos, que

los tengan amparados con título translativo de dominio, y con posesión de más de veinte años, pueden ocurrir directamente á la Secretaría de Fomento en solicitud de los arreglos y composiciones que con ella deseen celebrar.

Art. 47. Las solicitudes para esos arreglos ó composiciones que se dirijan á la Secretaría de Fomento, deberán contener:

- I. El nombre, apellido y domicilio del solicitante.
- II. El nombre de la propiedad y el de la Municipalidad, Distrito, Partido ó Contón del Estado ó Territorio en que se encuentre situada.
- III. La extensión superficial, aun cuando no sea mas que aproximativa, nombres de las propiedades colindantes y de los dueños de ellas.
- IV. Indicación de los títulos primordiales ó translativos de dominio con que se poseen las tierras.
- V. Propuesta del perito titulado que se ha de encarar del levantamiento del plano de la propiedad.
- VI. Ofrecimiento de presentar, dentro del plazo que se fije por la Secretaría de Fomento, todos los documentos que exige el art. 39 de la ley, con los requisitos que el mismo artículo establece.

Art. 48. Si hubiere lugar á admitir la solicitud de arreglo ó composición, la Secretaría de Fomento concederá al solicitante un plazo improrrogable, de acuerdo con la extensión superficial del terreno, para que dentro de él llene los requisitos que establece el art. 39 de la ley, presentando los respectivos documentos en la forma y con las condiciones que en dicho artículo se fijan, y se dará aviso al Agente del Estado ó Territorio en que la finca se halle ubicada, remitiéndole copia de la solicitud presentada y ordenándole que desde la fecha del otorgamiento del plazo, no admita ningún denuncia de las tierras presentadas á composición ó arreglo, hasta nueva orden de la misma Secretaría.

Art. 49. Al contestar la solicitud á que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de Fomento expresará si acepta ó no la propuesta del perito hecha por el soli-

citante, y en caso de no aceptarla dará un plazo de quince días al mismo solicitante para que dentro de él proponga nuevo perito, siendo á perjuicio de aquél el dejar transcurrir ese plazo sin hacer nueva propuesta.

Art. 50. Si transcurriese el plazo que se hubiere señalado al solicitante, sin que presente todos los documentos necesarios para la composición, la Secretaría de Fomento lo declarará desistido y lo hará saber al Agente de tierras, y este aviso bastará para considerar caduca la concesión de composición otorgada, y para que puedan admitirse denuncias de las tierras solicitadas. Si el solicitante hiciera la exhibición y entrega dentro de aquel plazo, no se levantará la orden de suspensión de denuncias, la cual quedará en vigor por todo el tiempo que se emplee para el estudio y resolución definitiva de la Secretaría de Fomento.

Art. 51. Los solicitantes que por tener ya satisfechos varios ó todos los requisitos del art. 39 de la ley, no necesitan hacer uso del plazo que señala el art. 48 de este Reglamento, presentarán con su solicitud los documentos y planos, quedando siempre sujetos, en este caso, á que la Secretaría de Fomento apruebe la designación del perito que hubieren ocupado, pues si no fuere á satisfacción de dicha Secretaría, ésta lo comunicará al solicitante para que dentro de un plazo que no ha de exceder de quince días, presente nueva propuesta de perito.

Art. 52. En el caso del artículo anterior, y aunque el solicitante no necesite del plazo correspondiente para la presentación de planos y documentos, se ordenará á la Agencia, dentro de cuya circunscripción esté la finca, que no admita denuncia alguna de las tierras presentadas á composición ó arreglo, hasta que se acuerde la resolución definitiva del asunto.

Art. 53. Los peritos se sujetarán en la práctica de las operaciones científicas en el caso de arreglos y composiciones, á las disposiciones establecidas en este Reglamento, para el caso de denuncia de terrenos baldíos, y deberán entregar al solicitante el plano de la propiedad

por triplicado, y el informe sobre las operaciones científicas por duplicado, dentro del plazo improrrogable que se hubiere fijado, á fin de que aquél los presente en tiempo oportuno á la Secretaría de Fomento.

Art. 54. Presentados á la Secretaría de Fomento, dentro del plazo señalado al solicitante, todos los documentos y planos de que tratan los artículos anteriores, se procederá al estudio de unos y otros, examinando la naturaleza de los títulos presentados, la cabida que amparan legalmente, y comparando esa cabida con la extensión superficial obtenida por los trabajos periciales. Si esta última fuere igual ó menor que la justamente amparada, la Secretaría hará la declaración á que se refiere el art. 40 de la ley, de no existir baldíos, excedencias ni demasías, dentro de los linderos contenidos en el plano.

Si de la comparación entre la superficie amparada por el título y la encerrada entre los linderos de la propiedad planografiada resultaren demasías ó excedencias, la Secretaría comunicará el monto de ellas al interesado, así como la cantidad que deba enterar para pagar su precio, de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Art. 55. Verificado el pago de que trata el artículo anterior, se expedirá al solicitante el título correspondiente de propiedad, de las demasías ó excedencias que hubieren resultado, y se le devolverá un ejemplar del plano, autorizado y sellado, enviándose otro ejemplar á la Agencia de tierras que corresponda y reservándose el otro para el Archivo de la Secretaría de Fomento.

Si el solicitante deseara que se inscriba el nuevo título en el Gran Registro de la propiedad de la República, lo pedirá en tiempo oportuno, dejando cumplidos los requisitos que para el caso exigen la ley y el reglamento respectivo.

Art. 56. Los interesados en una composición ó arreglo sobre demasías, excedencias ó terrenos baldíos poseídos por veinte ó más años, deberán dejar copia certificada á su costa de los títulos primordiales ó translativos de dominio que hubiesen presentado, la cual ha de formar parte

del expediente que, con motivo de la composición ó arreglo, se ha de instruir en la Secretaría de Fomento.

Art. 57. Si se suscitare alguna oposición antes de que la Secretaría haya acordado una composición ó arreglo, se suspenderá la resolución hasta que se le presente copia de la sentencia que se hubiese pronunciado en el juicio de oposición y que hubiese causado ejecutoria.

Art. 58. Si la sentencia que se hubiese pronunciado en el juicio de oposición fuese totalmente favorable al solicitante, la Secretaría de Fomento celebrará el arreglo ó composición como si no hubiese habido oposición; si le fuese contraria y le privase de todas las tierras que deseaba componer con el carácter de demasías ó excedencias, la composición se declarará sin efecto, y si sólo le privase de ellas en parte, podrá ser admitida á composición por el resto, en los términos de la ley y del reglamento.

Art. 59. Las declaraciones que se soliciten sobre no haber baldíos, demasías ni excedencias, dentro de los límites de una propiedad rústica, se sujetarán á la misma tramitación que las solicitudes sobre composición ó arreglo de terrenos de la misma clase, y una vez hecha la declaración, podrán los interesados pedir la inscripción de la propiedad en el Gran Registro de la propiedad de la República, llenando al efecto los requisitos que establezcan la ley y el reglamento especial sobre la inscripción.

CAPÍTULO IV.

Disposiciones generales.

Art. 60. Los Agentes podrán recibir las solicitudes que se les presenten relativas á adquisiciones de terrenos nacionales, y las elevarán á la Secretaría de Fomento, acompañándolas del informe que en cada caso pueda producir.

Igualmente podrán ser conducto para elevar á la misma Secretaría las solicitudes sobre arreglos y composi-

ciones de terrenos baldíos, demasías y excedencias, y cualesquiera otras relativas al ramo.

Art. 61. Conforme al art. 37 de la ley, los Agentes no podrán suspender los trámites de un denuncia, sino por causa de oposición, ni ampliarán los plazos que en aquella y en el presente Reglamento se fijan, debiendo, á la conclusión de ellos, y en la sucesión en que ocurran, sacar copia del expediente, á fin de remitirla á la Secretaría de Fomento, para que se revise y se proceda conforme á lo que el mismo artículo prescribe. La falta de remisión de la copia al Gobierno del Estado ó Territorio, en el plazo que fija la ley, y cuando el expediente se haya instruido con regularidad, ó de remisión directa á la Secretaría de Fomento, cuando el expediente quede incompleto, traerá para los Agentes la responsabilidad consiguiente y que se les exigirá por la misma Secretaría.

Art. 62. Toda suspensión en los trámites de un denuncia, que provenga de culpa del denunciante, y que consista en no administrar las estampillas de ley; en dejar de hacer las publicaciones necesarias; en la falta de pago de honorarios del Agente; en la presentación de planos, informes y demás documentos que deben acompañar al expediente, dentro de los plazos prescritos, y en cualquiera otra cosa que impida la prosecución de dichos trámites, importará para el denunciante que se le declare moroso, conforme á lo que dispone el art. 37 de la ley, debiendo cuidar los Agentes, bajo su más estricta responsabilidad, de que se consignen con toda exactitud en el expediente las fechas de los diversos trámites y de que se cuenten con toda regularidad los términos de los plazos.

Art. 63. Los denunciantes de terrenos baldíos pueden desistirse de sus denuncias, sin que se les declare morosos, cuando hagan el desistimiento ante el Agente respectivo; por escrito ó en comparecencia, y antes de la conclusión de alguno de los plazos que se establecen en el presente Reglamento. El Agente admitirá el desistimiento, consignándolo en el expediente, publicándolo en

la tabla de avisos y dando cuenta de él á la Secretaría de Fomento.

Art. 64. Cuando los Ayuntamientos, Asambleas ó Corporaciones municipales ocurran á la Secretaría de Fomento, para solicitar las composiciones á que se refieren los arts. 68 y 69 de la ley, deberán hacerlo por conducto del Gobernador del Estado ó Territorio que corresponda, quien acompañará la solicitud con el informe que crea conveniente dar.

Art. 65. Los extranjeros que deseen adquirir terrenos baldíos ó nacionales, demasías ó excedencias, dentro de las zonas en que pueden adquirirse con permiso del Ejecutivo, podrán presentar los denuncias ó solicitudes ante el Agente respectivo ó ante la Secretaría de Fomento en su caso, y solicitar al mismo tiempo el permiso para la adquisición de las tierras, sin cuyo requisito no podrán obtener la adjudicación de ellas.

Art. 66. Las autoridades locales impedirán que los denunciantes de terrenos baldíos entren en posesión de los terrenos y los exploten, sin haber obtenido el título de propiedad correspondiente, conforme lo establece el artículo 73 de la ley, y prestarán auxilio á los Agentes de la Secretaría de Fomento, cada vez que sean requeridas por ellos, para evitar las explotaciones ú ocupaciones indebidas.

Art. 67. A la conclusión de cada semestre, la Secretaría de Fomento hará publicar en el *Diario Oficial* de la Federación una noticia de los títulos que se hubieren expedido por denuncias de terrenos baldíos, ó por composiciones de excedencias y demasías, y de las declaraciones que se hubiesen dado á los propietarios de fincas, de no haber en ellas terrenos baldíos, demasías y excedencias.

“Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á cinco de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.— Porfirio Diaz.— Al C. Manuel Fernández

Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución, México 5 de Junio de 1894.

Fernández Leal.—Al. . .

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.

ARANCEL para el pago de honorarios á los Agentes de la Secretaría de Fomento en el ramo de Terrenos Baldíos.

I. Por el registro y anotación de los escritos de denuncia y de sus duplicados, se cobrará de la manera siguiente:

Cuando en el escrito se denuncien diez mil hectaras ó menos, se cobrarán dos pesos; cuando la extensión sea de diez á veinte mil, tres pesos; de veinte á cincuenta, mil, cuatro pesos; y de cincuenta mil ó más, cinco pesos.

II. Por redactar y escribir los acuerdos, minutas, oficios, avisos, extractos, razones, citas, notificaciones, actas, informes y demás documentos que exija el despacho oficial de la Agencia, veinticinco centavos por cada diez renglones ó fracción de ellos, y además, diez centavos por la vista de cada una de las fojas que contengan los expedientes y otros documentos que deban extractar.

III. Por el escrito, cotejo y autorización de copias, certificados y otros documentos análogos, un peso por cada cien renglones ó fracción de ellos.

IV. Por el cortejo y autorización de los planos que han de acompañar á las copias de los expedientes que se remitan á la Secretaría de Fomento, se cobrará la misma cantidad y en la misma proporción establecida en la fracción I de este Arancel y por los dos ejemplares del pla-

no. Si hubiere que cotejar mayor número de ejemplares se cobrará por cada uno de ellos la mitad de las cuotas señaladas en la misma fracción.

V. Por la asistencia á juntas que no excedan de una hora, tres pesos, y por cada hora más ó fracción de ella, un peso. Si se levantara acta ú otro documento, se cobrará lo que á él corresponda, conforme á la fracción II.

VI. Por la busca de expedientes ó cualesquiera otros documentos en el archivo, un peso. Cuando el interesado no ministre datos suficientes y haya que buscar documentos correspondientes á más de un año, un peso por cada año que se busque.

VII. Por los permisos para cortes de árboles, cuando el número de éstos sea de cien ó menos, dos pesos; de cien á mil tres pesos, y de mil en adelante cinco pesos.

VIII. Por los permisos para corte de palo de tinte, extracción de chicle, hule, y cualesquiera gomas ó resinas, y corte de leña, dos por ciento sobre el valor que resulte para el número de toneladas ó fracción que se solicite, sin que sea menos de un peso.

IX. Por la expedición de un permiso para caza ó pesca, y por cada temporada que se fije en el permiso, un peso.

X. Los honorarios han de ser cubiertos por los interesados á medida que se vayan causando, importando la falta de pago para ellos, con el transcurso consiguiente de los plazos, que se les declare morosos, conforme al art. 62 del Reglamento de Procedimientos.

Libertad y Constitución, México 5 de Junio de 1894.
—Fernández Leal.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución, México 5 de Junio de 1894.

Fernández Leal.—Al. . .

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.

ARANCEL para el pago de honorarios á los Agentes de la Secretaría de Fomento en el ramo de Terrenos Baldíos.

I. Por el registro y anotación de los escritos de denuncia y de sus duplicados, se cobrará de la manera siguiente:

Cuando en el escrito se denuncien diez mil hectaras ó menos, se cobrarán dos pesos; cuando la extensión sea de diez á veinte mil, tres pesos; de veinte á cincuenta, mil, cuatro pesos; y de cincuenta mil ó más, cinco pesos.

II. Por redactar y escribir los acuerdos, minutas, oficios, avisos, extractos, razones, citas, notificaciones, actas, informes y demás documentos que exija el despacho oficial de la Agencia, veinticinco centavos por cada diez renglones ó fracción de ellos, y además, diez centavos por la vista de cada una de las fojas que contengan los expedientes y otros documentos que deban extractar.

III. Por el escrito, cotejo y autorización de copias, certificados y otros documentos análogos, un peso por cada cien renglones ó fracción de ellos.

IV. Por el cortejo y autorización de los planos que han de acompañar á las copias de los expedientes que se remitan á la Secretaría de Fomento, se cobrará la misma cantidad y en la misma proporción establecida en la fracción I de este Arancel y por los dos ejemplares del pla-

no. Si hubiere que cotejar mayor número de ejemplares se cobrará por cada uno de ellos la mitad de las cuotas señaladas en la misma fracción.

V. Por la asistencia á juntas que no excedan de una hora, tres pesos, y por cada hora más ó fracción de ella, un peso. Si se levantara acta ú otro documento, se cobrará lo que á él corresponda, conforme á la fracción II.

VI. Por la busca de expedientes ó cualesquiera otros documentos en el archivo, un peso. Cuando el interesado no ministre datos suficientes y haya que buscar documentos correspondientes á más de un año, un peso por cada año que se busque.

VII. Por los permisos para cortes de árboles, cuando el número de éstos sea de cien ó menos, dos pesos; de cien á mil tres pesos, y de mil en adelante cinco pesos.

VIII. Por los permisos para corte de palo de tinte, extracción de chicle, hule, y cualesquiera gomas ó resinas, y corte de leña, dos por ciento sobre el valor que resulte para el número de toneladas ó fracción que se solicite, sin que sea menos de un peso.

IX. Por la expedición de un permiso para caza ó pesca, y por cada temporada que se fije en el permiso, un peso.

X. Los honorarios han de ser cubiertos por los interesados á medida que se vayan causando, importando la falta de pago para ellos, con el transcurso consiguiente de los plazos, que se les declare morosos, conforme al art. 62 del Reglamento de Procedimientos.

Libertad y Constitución, México 5 de Junio de 1894.
—Fernández Leal.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

«PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

«Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 18 y 70 de la ley de 26 de Marzo del presente año, he tenido á bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.

CAPÍTULO I

De los Agentes encargados de vigilar la explotación.

Art. 1º La conservación, vigilancia y explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, quedan á cargo de los Agentes de terrenos baldíos que nombre la Secretaría de Fomento, en los Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios, y de los subinspectores y guardabosques cuyo número y sueldo será fijado por la misma Secretaría.

Art. 2º Los subinspectores serán nombrados por la Secretaría de Fomento, á propuesta de los Agentes, y éstos nombrarán á los guardabosques, prefiriendo en cuanto fuere posible, á los naturales de la región, que tengan la honradez, conocimiento del terreno y demás cualidades necesarias para el desempeño del empleo.

Art. 3º Las atribuciones de los Agentes, para el desempeño de las funciones que les compete el presente Reglamento, son las siguientes:

I. Hacerse cargo de los terrenos baldíos de que esté en posesión la Hacienda Federal y de los nacionales, procurando desde luego adquirir datos acerca de los bosques que haya en ellos y sus productos, ruinas monumentales, salinas y otras substancias que no son objeto de concesión por la ley minera.

II. Indagar cuáles son los bosques y terrenos de propiedad de la Nación que hubiere en el Estado, Distrito ó

Territorio, en el que ejercen sus funciones, y comunicarlo á la Secretaría de Fomento, á fin de que se dicten las disposiciones necesarias para que la Hacienda Pública entre en posesión de ellos.

III. Proponer á la Secretaría de Fomento cuáles de los terrenos baldíos ó nacionales se han de reservar temporalmente para conservación ó plantío de bosques, reducción de indios ó colonización.

IV. Expedir los permisos que se soliciten para el corte de árboles; explotación de gomas, resinas y otros productos de los bosques; explotación de substancias minerales que no son objeto de concesión, y caza y pesca de animales, previo el pago en la Oficina de Hacienda que corresponda, de los derechos que en cada caso se fijén.

V. Vigilar que los subinspectores y guardabosques cumplan exactamente con sus respectivas obligaciones, pudiendo imponerles penas correccionales como la suspensión en el empleo y sueldo, multas, y á los guardabosques hasta la de destitución; dando conocimiento de todo á la Secretaría de Fomento. En el caso de complicidad con los explotadores, para defraudar á la Hacienda Pública, ó en cualquiera otro caso en que aparezca delito, consignarán al responsable al Juez de Distrito respectivo.

VI. Imponer á los explotadores fraudulentos y á los que infrinjan las disposiciones de este Reglamento, las correcciones administrativas que se fijan en el Capítulo correspondiente.

VII. Negar á los colindantes que ocasionen disgustos á la vecindad de otros cortadores el refrendo de sus permisos, en los lugares donde perjudique su presencia.

VIII. Suspender el permiso al explotador que infrinja las prescripciones del presente Reglamento, imponiéndole la corrección administrativa que corresponda y consignándolo al Juez de Distrito respectivo, en el caso de que hubiere delito.

IX. Procurar que se terminen pacíficamente, por medio de conciliación, las cuestiones que se susciten entre los explotadores, y en caso de que no lo consigan, trans-

«PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

«Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 18 y 70 de la ley de 26 de Marzo del presente año, he tenido á bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.

CAPÍTULO I

De los Agentes encargados de vigilar la explotación.

Art. 1º La conservación, vigilancia y explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, quedan á cargo de los Agentes de terrenos baldíos que nombre la Secretaría de Fomento, en los Estados, en el Distrito Federal y en los Territorios, y de los subinspectores y guardabosques cuyo número y sueldo será fijado por la misma Secretaría.

Art. 2º Los subinspectores serán nombrados por la Secretaría de Fomento, á propuesta de los Agentes, y éstos nombrarán á los guardabosques, prefiriendo en cuanto fuere posible, á los naturales de la región, que tengan la honradez, conocimiento del terreno y demás cualidades necesarias para el desempeño del empleo.

Art. 3º Las atribuciones de los Agentes, para el desempeño de las funciones que les compete el presente Reglamento, son las siguientes:

I. Hacerse cargo de los terrenos baldíos de que esté en posesión la Hacienda Federal y de los nacionales, procurando desde luego adquirir datos acerca de los bosques que haya en ellos y sus productos, ruinas monumentales, salinas y otras substancias que no son objeto de concesión por la ley minera.

II. Indagar cuáles son los bosques y terrenos de propiedad de la Nación que hubiere en el Estado, Distrito ó

Territorio, en el que ejercen sus funciones, y comunicarlo á la Secretaría de Fomento, á fin de que se dicten las disposiciones necesarias para que la Hacienda Pública entre en posesión de ellos.

III. Proponer á la Secretaría de Fomento cuáles de los terrenos baldíos ó nacionales se han de reservar temporalmente para conservación ó plantío de bosques, reducción de indios ó colonización.

IV. Expedir los permisos que se soliciten para el corte de árboles; explotación de gomas, resinas y otros productos de los bosques; explotación de substancias minerales que no son objeto de concesión, y caza y pesca de animales, previo el pago en la Oficina de Hacienda que corresponda, de los derechos que en cada caso se fijén.

V. Vigilar que los subinspectores y guardabosques cumplan exactamente con sus respectivas obligaciones, pudiendo imponerles penas correccionales como la suspensión en el empleo y sueldo, multas, y á los guardabosques hasta la de destitución; dando conocimiento de todo á la Secretaría de Fomento. En el caso de complicidad con los explotadores, para defraudar á la Hacienda Pública, ó en cualquiera otro caso en que aparezca delito, consignarán al responsable al Juez de Distrito respectivo.

VI. Imponer á los explotadores fraudulentos y á los que infrinjan las disposiciones de este Reglamento, las correcciones administrativas que se fijan en el Capítulo correspondiente.

VII. Negar á los colindantes que ocasionen disgustos á la vecindad de otros cortadores el refrendo de sus permisos, en los lugares donde perjudique su presencia.

VIII. Suspender el permiso al explotador que infrinja las prescripciones del presente Reglamento, imponiéndole la corrección administrativa que corresponda y consignándolo al Juez de Distrito respectivo, en el caso de que hubiere delito.

IX. Procurar que se terminen pacíficamente, por medio de conciliación, las cuestiones que se susciten entre los explotadores, y en caso de que no lo consigan, trans-

mitir los datos que se hubieren reunido á la autoridad judicial, si á ella llevaren los litigantes sus cuestiones.

X. Designar á los inspectores y guardabosques la demarcación que cada uno ha de vigilar, sin perjuicio de movilizarlos, en todos los casos que así lo exija el mejor servicio.

XI. Proponer á la Secretaría de Fomento las especies de árboles que convenga introducir y cultivar en los terrenos encomendados á su cuidado, y comunicar las observaciones que la práctica y la experiencia les sugieran para mejorar la explotación.

XII. Proponer á la misma Secretaría, con los mejores datos, lo que deban pagar los explotadores de los bosques, en la circunscripción de su cargo, por cada árbol que corten, por la leña, por las gomas ó resinas, por la caza y por la pesca, y por cualesquiera productos de los terrenos nacionales, susceptibles de aprovechamiento y explotación.

XIII. Remitir á la Secretaría de Fomento, en los primeros diez días de cada mes, una noticia de los permisos concedidos en el anterior, y, al fin de cada año fiscal un informe detallado, sobre la explotación que se haya hecho en los terrenos confiados á su cuidado, productos de la misma explotación y medidas que á su juicio pudieran dictarse para mejorarla.

Art. 4º Son atribuciones y obligaciones de los subinspectores las siguientes:

I. Desempeñar todas las comisiones del servicio público que les ordene el Agente respectivo, á quien obedecerán en todo como inmediato superior.

II. Imponerse de los límites de la demarcación que se les señale, la cual deberán conocer por sí mismos en toda su extensión.

III. Dar posesión á los explotadores de los terrenos y bosques nacionales, de los lugares en que han de practicar las explotaciones, de acuerdo con los permisos expedidos por el agente y dentro del plazo que éste fijare.

IV. Vigilar por sí mismos y por los guardabosques que

se pongan á sus órdenes, que no se corten maderas, ni se hagan otras explotaciones, sin permiso escrito del Agente que corresponda, debiendo exigir la presentación del permitido á los encargados de las monterías, cada vez que lo consideren necesario.

V. Impedir los cortes de árboles y otras explotaciones de los terrenos nacionales, cuando se hagan sin el permiso correspondiente ó contraviniendo á las disposiciones del presente Reglamento, dando desde luego parte al Agente, para que oportunamente dicte las providencias que sean procedentes.

VI. Reunir empeñosamente los datos relativos á los ramos de riqueza pública que existan en los terrenos nacionales, dando cuenta de lo que observen al Agente, para que éste lo ponga en conocimiento de la Secretaría de Fomento.

VII. Aclarar el verdadero nombre de los lugares en donde se hagan explotaciones, para ministrar datos exactos en el caso de disputa entre los explotadores ó en el de explotaciones fraudulentas.

VIII. Dar nombre á los bosques y terrenos baldíos y nacionales que no lo tengan y aclarar la verdadera posición topográfica de los lugares, comparando las noticias que deben tener de los permisos expedidos por el Agente, con los que les presenten los explotadores, y examinando si se hace la explotación en el lugar correspondiente al permiso.

IX. Exigirá los explotadores, al darles la posesión, que hagan el señalamiento en el terreno de los límites de sus respectivos permisos.

X. Cuidar con el mayor empeño de que se conserven los bosques, impidiendo el corte de renuevos y árboles productores de semillas, la destrucción de los que produzcan frutas, gomas ó resinas, y la de aquellos que por descuido se pierden en la caída de los árboles que se corten.

XI. Informarse en los sitios en que se hagan las explotaciones, de las cuestiones que se susciten entre los

cortadores de árboles ú otros explotadores con permisos á fin de ponerlos en conocimiento del Agente para que éste procure terminarlas pacíficamente, y si no lo consiguieren, remitir los datos que se rennan á la autoridad judicial respectiva.

XII. Impedir que se hagan fogatas en los montes que pudieran causar el incendio de ellos, y en caso de que ocurriere algún incendio, sea por ésta ú otra causa, procurar extinguirlo á toda costa con el auxilio de las autoridades locales y de los explotadores, procurando también la aprehensión de los que lo hubieren causado, consignándolos inmediatamente al juez local respectivo, para que éste practique las primeras diligencias sobre el hecho, mientras el subinspector da cuenta al Agente y este hace la consignación de los culpables al Juez de Distrito que corresponda.

XIII. Prohibir que atraviesen ganados por los lugares de los bosques en que puedan causar perjuicios á los árboles.

XIV. Impedir que se hagan la caza y la pesca de animales en los terrenos baldíos y nacionales, sin el permiso escrito del Agente y fuera de las épocas en que se permitan.

XV. Cuidar de que los guardabosques cumplan exactamente con las obligaciones que les impone el presente Reglamento, y con las instrucciones que recibir de los mismos subinspectores y de los Agentes.

XVI. Procurar cuantas noticias y observaciones sean convenientes, con el fin de que las explotaciones en los terrenos baldíos y nacionales se hagan con toda regularidad y según los métodos que se prescriban para cada región y para las diversas especies de árboles y sus productos.

Art. 5º Son obligaciones de los guardabosques las siguientes:

I. Obedecer cumplidamente las órdenes é instrucciones que reciban de los Agentes, por conducto de los subinspectores, á quienes reconocerán como superiores in-

mediatos, obedeciendo también las que éstos les dieren, en desempeño de las atribuciones que les confiere el presente Reglamento.

II. Imponerse con toda atención de los límites de la demarcación que se encargue á su cuidado, y recorrerla además en todas direcciones, con el fin de conocerlas detalladamente.

III. Proporcionar cuantos datos y noticias se les pidan por los subinspectores, con objeto de aclarar el verdadero nombre y la situación de los lugares en que se hagan explotaciones.

IV. Exigir á los cortadores de árboles, á los explotadores de gomas ó resinas y á los cazadores y pescadores, la presentación del correspondiente permiso del Agente cada vez que lo estime necesario.

V. Cuidar de que los explotadores de los terrenos baldíos y nacionales señalen los límites del permiso, según la posesión que les dé el respectivo subinspector, y procurar que no salgan de ellos, dando parte en caso contrario, al subinspector.

VI. Vigilar que los cortes de madera, la extracción de goma ó resinas y cualesquiera otras explotaciones de los productos de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, se hagan de acuerdo con las reglas que se hayan adoptado y prescripto para la región en que desempeñan su empleo.

VII. Cuidar de que las monterías se establezcan convenientemente, sin destruir árboles útiles ó no comprendidos en los permisos, debiendo exigir que se tomen todas las precauciones necesarias para evitar los incendios.

VIII. Impedir que se hagan fogatas en los bosques, que se quemem los pastos, y que se haga lumbre sin las precauciones necesarias, procediendo contra los infractores en los términos prescriptos en el Capítulo V de este Reglamento.

IX. Impedir el paso de ganados que puedan perjudicar

á los árboles si no es por los caminos que, para el efecto designen los subinspectores.

X. Impedir la caza y la pesca, sin la presentación del permiso del respectivo Agente y sin los requisitos prescritos en este Reglamento.

XI. Dar parte somanario y por escrito al subinspector que corresponda, de todo lo que haya ocurrido en su demarcación, sin perjuicio de los partes extraordinarios que exijan los sucesos imprevistos.

XII. Llevar siempre consigo su nombramiento, original ó en copia autorizada por el Agente, y portar las armas y el distintivo que acuerde el mismo Agente.

Art. 6º Los subinspectores y guardabosques como empleados del Gobierno Federal, reclamarán de todas las autoridades el auxilio que puedan necesitar para el desempeño de las funciones de su empleo, á cuyo fin los Agentes cuidarán de dar conocimiento á las autoridades del Estado, Distrito ó Territorio, del nombre de esos empleados y de los lugares en donde ejercen su vigilancia.

Art. 7º A cada guardabosque se le señalará por el subinspector respectivo, y con aprobación del Agente, la extensión del terreno que se considere conveniente, según el número de monterías y otras explotaciones que en ella se establezcan para que lo recorra y vigile constantemente, cuidando de que los explotadores observen en todas las prescripciones de este Reglamento, procurando evitar toda causa de desorden y dando parte á las autoridades que correspondan en el caso de que no pudieran impedirlo.

Art. 8º Los subinspectores y guardabosques han de residir en el punto de la demarcación que se les señala por el Agente, y no podrán ausentarse de dicha demarcación, ni mudar de residencia, sin previo conocimiento y permiso del mismo Agente. Este podrá señalarles un lote de terreno, para que lo cultiven y establezcan en él sus habitaciones.

Art. 9º Los subinspectores no podrán dictar disposición alguna que afecte interés de tercero, sin conocimiento

del Agente; pero en casos urgentes podrán tomar alguna determinación que asegure los intereses de la Nación, bajo su responsabilidad y dando inmediatamente conocimiento de ella al mismo Agente.

CAPÍTULO II.

De los permisos y contratos para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.

Art. 10. Toda persona ó compañía que quiera dedicarse al corte de maderas, á la explotación de gomas ó resinas, ó de otros productos de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, deberá dirigir una solicitud de permiso al Agente de Fomento que corresponda, en la que ha de expresar con claridad la ubicación y el nombre del lugar en donde piensa hacer la explotación, los límites de ese lugar, con los nombres de los colindantes que tuviere, la dirección del camino por donde han de salir los productos, y el número de árboles ó de toneladas de madera, leña, gomas ó resinas que se proponga extraer.

Art. 11. El Agente anotará en la solicitud el día y la hora en que la reciba, y averiguará por todos los medios que estén á su alcance si el lugar de que se trata está en terrenos nacionales ó baldíos de que esté en posesión la Hacienda Pública, y si no hay otra solicitud ó concesión anterior para el mismo lugar; y no encontrando inconveniente para la concesión del permiso, lo comunicará, por oficio, al solicitante, señalándole un plazo, para que dentro de él pague en la Jefatura de Hacienda ó Administración de Rentas que corresponda, el valor fijado por la tarifa respectiva á los árboles, frutos ó productos que trate de explotar, y para que presente en la Agencia el comprobante de haberse verificado el entero. El Agente comunicará también por oficio, al Jefe de la oficina de Hacienda correspondiente, cuál es la suma que tiene que pagar el solicitante.

Si por algún motivo no pudiese concederse el permiso, lo comunicará igualmente de oficio el Agente al solicitante.

Art. 12. Una vez que el solicitante presente el comprobante de haber pagado el valor de los árboles ó substancias que va á explotar y satisfechos los honorarios del Agente, éste le extenderá el permiso en toda forma, sin perjuicio de tercero, y consignando en él con cuanta claridad sea posible, la ubicación del lugar en que se va á hacer la explotación, su nombre, límites, y el camino ó caminos por donde se han de extraer los productos; la especificación exacta de éstos, y la advertencia de que el solicitante se ha de sujetar en la explotación á las prescripciones del presente Reglamento, quedando también entendido de las penas en que incurre, por la falta de observancia de dichas prescripciones.

Art. 13. Concedido el permiso por el Agente, éste lo comunicará, por oficio, al subinspector que corresponda, quien deberá pasar al lugar designado por el explotador, acompañado del guardabosque respectivo, con el fin de reconocer é identificar el lugar para el que se hubiere concedido el permiso, y si no estuviere de acuerdo dará parte inmediatamente al Agente, para que se reforme ó anule el permiso. Si á su vez el solicitante no estuviere conforme con la designación que se le haga por el subinspector, ocurrirá al Agente, para que éste resuelva lo que correspondiera.

Art. 14. Reconocido el lugar por el subinspector y cerciorado de que es el mismo para el que se concedió el permiso, dará posesión al solicitante, de los árboles ó otros productos que vaya á explotar, y hará que se limite el lugar en que se encuentren aquéllos, por medio de una picadura ó senda, ó por algún otro medio que permita reconocer los límites de la concesión. Al mismo tiempo se han de marcar los árboles concedidos, y los que se reserven para reproductores de semillas; debiendo asistir á esos actos é imponerse detalladamente de todo, el guardabosque á quien corresponda vigilar la explotación.

Art. 15. Todo explotador de maderas ó de otros productos de los bosques y terrenos baldíos y nacionales, está obligado á dirigir sus operaciones de entera conformidad con las prescripciones de este Reglamento, debiendo, además, observar todas las reglas y disposiciones especiales que para la explotación diere la Secretaría de Fomento, con el fin de evitar la tala inmoderada de los árboles y la destrucción de los otros elementos de riqueza que contengan los terrenos de la Nación.

Art. 16. Ningún individuo que obtuviere permiso de la Agencia para cortar árboles ó explotar otros productos de los terrenos baldíos y nacionales, podrá venderlo, cederlo ó traspasarlo, ni en todo, ni en parte, á otra persona ó empresa, debiendo considerarse caduco el permiso desde el momento en que se haga la venta, cesión ó traspaso de él, y quedando, en todo caso, responsable de lo que pudiere ocurrir, el dueño primitivo del permiso.

Art. 17. Ninguna persona ó compañía que haya obtenido permiso de la Agencia para corte de árboles ó explotación de otros productos de los terrenos baldíos y nacionales, podrá alegar en ningún tiempo derecho alguno de propiedad, de posesión, de retención ó de cualquiera otra clase á los terrenos; permitiéndose únicamente la explotación y la extracción de la madera y de los otros productos, comprobándose que todo es correspondiente al permiso concedido, y que se han pagado los respectivos derechos.

Art. 18. Los permisos concedidos por las Agencias sólo serán útiles para cortar el número de árboles que designen ó explotar los otros productos á que se refieran, durante el transcurso del año natural á que corresponda la fecha en que hayan sido expedidos. Pasado este tiempo, serán nulos y de ningún valor.

Art. 19. Se entiende que los permisos sólo dan derecho á las explotaciones de maderas ó otros productos, dentro de los límites señalados en aquéllos, y en ningún caso, ni en tiempo alguno podrán los explotadores alegar derechos á los árboles ó productos inmediatos á los lugares en que

trabajen, si no es cuando hayan obtenido nuevo permiso, con los requisitos que exige el presente Reglamento.

Art. 20. Los cortadores de árboles en los montes nacionales y los explotadores de otros productos, podrán renovar anualmente sus permisos ante la Agencia, ya para seguir explotando el monte en el mismo lugar, ya para hacerlo en los montes colindantes, ocurriendo con oportunidad al Agente para que se tramite la solicitud correspondiente y se satisfagan los derechos respectivos, porque no se considerará autorizada ni legal la explotación, sin haberse cumplido antes con esos requisitos.

Art. 21. Conforme al art. 19 de la ley, todo permiso expedido para la explotación de los terrenos baldíos ó sus productos, se entenderá siempre otorgado con calidad de que cesará tan luego como el terreno fuere adjudicado conforme á la misma ley, sin más derecho, por parte de quien obtuvo el permiso, que el de pedir la devolución de lo que por él hubiere satisfecho, proporcionalmente al tiempo que faltare para su expiración.

Art. 22. Todos los cortadores de madera que no estén conformes con las determinaciones del Agente de Fomento, para zanjar sus dificultades, podrán llevarlas ante la autoridad judicial que corresponda, á fin de hacer valer ante ella sus derechos, pero sin que puedan alegar ninguno contra los intereses del Erario, por el corte de las maderas ó la explotación de otros productos, si no son los expresamente designados en sus permisos.

Art. 23. La Secretaría de Fomento podrá celebrar contratos libremente, con empresas que soliciten la explotación de los bosques nacionales, debiendo ajustarse los contratos á las bases generales siguientes:

I. Que se haya hecho declaración por la Secretaría de Fomento de que el terreno se reserva temporalmente para bosque.

II. Que se obliguen los empresarios, dentro del plazo que se les fije en el contrato, á acotar el terreno con zanja, cerca, seto vivo, ó sendas con mojoneras artificiales, y á levantar el plano de él.

III. Que se obliguen igualmente á explotar el bosque y los otros productos que se contraten, de manera que no se destruyan por completo, sino que, por el contrario, se asegure la repoblación de árboles, comprometiéndose á observar las reglas que para el caso prescriba la Secretaría de Fomento.

IV. Que se comprometan á conservar los árboles con semillas fértiles que sean necesarios para asegurar la reproducción de las especies de árboles que haya en el bosque, y á no derribarlos sino cuando esté asegurada su repoblación, comprometiéndose también á introducir en él nuevas especies de árboles que puedan prosperar, según las condiciones de la región en que se encuentre.

V. Que se comprometan á admitir la inspección de los empleados del Gobierno, en los términos que se fijen en el contrato.

VI. Que garanticen por medio de un depósito en títulos de la Deuda Nacional, el cumplimiento de las obligaciones que contraigan, sin perjuicio de responder al Gobierno por la buena explotación y la conservación del bosque.

VII. Que se estipule en términos claros y precisos lo que se ha de pagar como precio del arrendamiento, atendiendo á la calidad de los árboles y á la de sus productos, como gomas, resinas, frutos, consignándose también cualquiera otra explotación que se haga del terreno del bosque, con el precio correspondiente.

VIII. Que se consigne que los concesionarios sólo tienen derecho á la explotación de los árboles y de los otros productos que hayan contratado; pero que no adquieran ninguno al terreno en que se haga la explotación.

IX. Que se consigne igualmente que los empresarios han de observar todas las prescripciones de este Reglamento, excepto en aquello de que se les releva expresamente por la naturaleza del contrato.

X. Que se estipule la duración del contrato de manera que al término de él se encuentre repoblado el bosque, consignándose los casos de caducidad, penas y responsa-

bilidades por perjuicios causados por mala ó fraudulenta explotación.

XI. Que se estipule también que permitirán que visiten los montes, como practicantes, los alumnos de las escuelas de Agricultura.

Art. 24. Los contratos que se soliciten, con arreglo á los arts. 18 y 19 de la ley, podrán igualmente celebrarse por la Secretaría de Fomento, previos los informes de los Agentes, y con las condiciones que se estimen conducentes á garantizar la buena explotación de los terrenos baldíos no reservados y que sean objeto de los contratos, consignándose en éstos los derechos y condiciones que dichos artículos establecen.

CAPÍTULO III.

De la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.

Art. 25. La explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales se sujetará á las disposiciones generales de este Reglamento y á las especiales que dicte la Secretaría de Fomento, atendiendo al clima y á la naturaleza del suelo y demás condiciones de cada región en que se encuentren los bosques y terrenos; y cuando se trate del corte de árboles ó de la explotación de sus productos, á las diversas especies de los unos y de los otros. Los Agentes de la Secretaría de Fomento tienen la obligación de adquirir datos á este respecto y de comunicarlos oportunamente á la misma Secretaría.

Art. 26. Solamente se permitirá el corte de árboles que hayan llegado á su perfecto desarrollo. La edad en que se han de cortar los árboles en monte alto, debe ser cuando den semilla fecunda y abundante, y en monte bajo, cuando den abundantes y robustos brotes de cepa ó de raíz, entendiéndose que á éstos árboles únicamente se refieren los permisos de corte, quedando prohibido á los explotadores, bajo las penas de las leyes y de este Regla-

mento cortar ó derribar los brotes ó renuevos y los árboles tiernos, los cuales serán, por el contrario, objeto de cuidado de parte de los subinspectores y guardabosques y de los mismos explotadores, conservándose en pie para la repoblación del monte.

Art. 27. Una vez que se conozcan las especies de árboles que, según la región, constituyan los montes nacionales, y el estado en que éstos se encuentren, se prescribirán las reglas especiales para su explotación y para asegurar la reproducción de los árboles. Si éstos se han de reproducir por semillas naturalmente, deberán elegirse y reservarse en el monte los árboles que han de servir de reproductores, quedando á cargo de los subinspectores, y bajo su responsabilidad, la elección de aquellos árboles y su distribución conveniente en el monte de acuerdo con las instrucciones que reciban de los agentes. Cuando la reproducción se ha de hacer por brotes ó renuevos, se prescribirán las reglas que se han de observar para el corte de los árboles y la conservación de las cepas, debiendo sujetarse estrictamente á dichas reglas, tanto los explotadores, como los empleados encargados de la vigilancia.

Art. 28. Al dar los subinspectores de montes la posesión á los explotadores de los árboles comprendidos en los permisos, deberán marcar dichos árboles con el martillo que ha de proporcionarles el agente de quien dependan, la marca ha de ser doble, y para ponerla se ha de quitar la corteza del tronco hasta descubrir el liber ó la cara de separación de la corteza. La primera marca se imprimirá á la altura de un hombre y la segunda al pie del árbol, de tal manera que cuando ésta se corte quede en la parte restante del tronco la señal inferior. Cuando se reserven en el monte árboles que han de servir de reproductores, deberán ser también marcados por los subinspectores, de la misma manera, pero con señales diferentes, y en presencia de los exploradores y de los guardabosques que han de vigilar los cortes.

Art. 29. Todo cortador de árboles en los montes na-

cionales está obligado á dar á conocer al subinspector respectivo, y antes de comenzar la explotación; la marca que ha de poner por su parte á los árboles en pie comprendidos en el permiso, y á la madera antes de extraerla de la montería. La marca ha de ser la misma para los árboles y para la madera, y el señalamiento de los primeros con la marca se hará al mismo tiempo que se pone la del Gobierno, y no podrán cambiarla los explotadores por ningún motivo, mientras no concluya el término del permiso concedido.

Art. 30. No se considerará legalmente autorizado el corte de los árboles correspondiente á un permiso, ni se podrá, por lo mismo, dar principio á él, sino cuando estén marcados los árboles por el subinspector; pero podrá comenzarse el corte á medida que se vaya poniendo la marca y sin esperar á que todos los árboles comprendidos en el permiso hayan quedado señalados.

Art. 31. El establecimiento de la montería se ha de hacer de acuerdo con lo subinspectores, quienes procederán con los explotadores á elegir y señalar el sitio en que aquélla se ha de establecer, debiendo quedar bien enterado de todo, el guardabosque correspondiente. Al establecerse la montería no se permitirá que se derriben árboles cuyo valor no haya sido pagado, y que no hayan sido marcados por el subinspector. Los animales que tengan que emplearse para la extracción de los productos de la explotación, se colocarán en lugares donde no perjudiquen el monte, debiendo tomarse precauciones especiales para que los fuegos que enciendan los explotadores no puedan causar ningún incendio en el bosque.

Art. 32. Antes de que se derribe un árbol se le quitarán las ramas para que no perjudique en su caída á los árboles inmediatos, sobre todo si éstos no han quedado comprendidos en el permiso. Al derribar el tronco se tomarán también todas las precauciones necesarias, á fin de dirigir la caída de manera que no haga daño á los operarios ni á los árboles inmediatos; siendo de responsa-

bilidad de los cortadores todos los perjuicios que ocasionen por falta de observancia de esta prescripción.

Art. 33. Las maderas se han de labrar en los lugares que de común acuerdo se haya convenido entre los subinspectores ó los guardabosques y los explotadores, y no se extraerán del monte sino después de haber sido marcadas todas las piezas, y precisamente por los caminos fijados en los respectivos permisos, cuidando, en todo caso, de que no se causen perjuicios al monte con la extracción. Cuando el permiso se haya dado para corte de leña ó palo de tinte no se exigirá la marca en las piezas para la extracción.

Art. 34. Conforme á lo establecido en el capítulo anterior, los permisos solamente dan derecho al corte de los árboles ó á la explotación de los otros productos que expresamente se hubiesen consignado en ellos, y, por lo tanto, si durante el periodo de tiempo que dure la explotación tuvieren los explotadores necesidad de leña, de pastos ó quisieran sembrar y aprovechar los otros frutos ó productos forestales del monte, deberán solicitar con tiempo de la agencia el permiso correspondiente, y satisfacer los derechos asignados á los otros usos y productos, sin cuyos requisitos no les será permitida la explotación por los subinspectores y guardabosques, é incurrirán en las penas de las leyes y de este Reglamento.

Art. 35. Podrá permitirse la explotación de gomas, resinas, frutos y otros productos de los bosques, á condición de no destruir los árboles y de observar las prescripciones generales de este Reglamento y las especiales que fuere conveniente dar, para la conservación de esos productos. El explotador deberá precisar, al pedir el permiso á la agencia, la clase de productos que se propongan extraer y su cantidad, á fin de que todo se consigne en el permiso y se fije la cuota que corresponda.

Art. 36. En los montes de pinos no se permitirá que se corten de los árboles astillas ó rajas que sirvan para alumbrado, si no es que se pague todo el valor del árbol. La extracción de la trementina sólo se permitirá practi-

cando con cuidado y regularidad las entalladuras, de manera que pueda conservarse por mucho tiempo el árbol, y no se comenzará la explotación sino cuando el árbol haya llegado á la edad apropiada al objeto.

Art. 37. Para explotar los árboles de hule y los productores de chicle y de otras gomo-resinas análogas, se observarán las siguientes reglas:

I. La explotación se hará practicando incisiones verticales en los árboles en número de una á tres, siendo más conveniente hacerlas en la parte baja del tronco.

II. Se tendrá cuidado de que la incisión sólo se haga en la corteza sin penetrar en el tronco.

III. Una vez concluida la extracción del jugo, se cubrirán las incisiones con cera ó barro.

IV. No se permitirá la extracción del jugo de árboles tiernos, ni la explotación de éstos, sino cuando tengan la edad más apropiada para la explotación.

V. Los árboles productores de gomo-resinas se han de conservar en los montes, y no se concederán permisos para el corte de ellos, sino en casos especiales, previo el pago del valor de los árboles y con las condiciones que fijen los Agentes.

Art. 38. Las explotaciones de plantas parásitas, como la orchilla y otras, solamente se permitirán con la condición de no destruir los árboles ó arbustos que les sirvan de apoyo, y de dejar siempre en ellos algunas de esas parásitas para mantener y favorecer su reproducción.

Art. 39. Se concederán permisos para la explotación de frutos curtientes, alimenticios y otros que pudiere haber en los montes, con la condición expresa de no destruir ni maltratar los árboles, previo el pago de las cuotas que se fijaren y mediante las instrucciones que se prescriban por la Secretaría de Fomento y por los Agentes.

Art. 40. No se permitirá la explotación de las cortezas de ningunos árboles, arrancándolas de los que están en pie, sino es que se haya pagado el valor de ellos y obtenido el permiso correspondiente, con los demás requi-

sitos de entrega y marca de los árboles por un subinspector.

Art. 41. Se podrá permitir el pastoreo en los montes nacionales, previo el pago de las cuotas que se fijen por cada animal y con las condiciones generales siguientes:

I. El ganado no deberá entrar á pastear en ningún sitio en que los árboles no hayan adquirido altura suficiente para que sus ramas y brotes queden fuera del alcance del ganado.

II. No se admitirán ganados en los montes, sin vaqueros ó pastores responsables de su custodia.

III. Los animales que sirvan de guías deberán llevar encierro ó campanilla, á fin de que se sepa siempre donde se encuentra el ganado.

IV. No se permitirá apacentar de noche.

V. Los vaqueros ó pastores deberán guiar siempre el ganado en las laderas, de modo que vaya pastando á la subida ó cuesta arriba, y nunca cuesta abajo, pues en el descenso no debe detenerse á pastear.

VI. No se permitirá por ningún motivo, que se quemen los pastos, y las lumbres y fogatas que enciendan los pastores, sólo se permitirán en sitios donde no puedan causar ningún perjuicio.

VII. Los dueños de los ganados quedarán responsables por los daños y perjuicios que pudieren causar en los montes los mismos ganados y los vaqueros ó pastores.

Art. 42. Las salinas, canteras, depósitos de asfalto y de turba, criaderos de carbón de piedra, de petróleo y de cualesquiera otras substancias que no sean objeto de concesión por la ley minera y que se encuentren en los terrenos baldíos ó nacionales, se explotarán por autorización especial que dará en cada caso la Secretaría de Fomento; debiendo sujetarse los explotadores, además de lo que les concierna por el presente Reglamento, al especial de policía de las minas.

Art. 43. Los rios, arroyos, lagunas, esteros y cualesquiera otros depósitos de agua que se encuentren en los montes y terrenos baldíos y nacionales, serán objeto de

cuidado para los Agentes de terrenos baldíos, quienes harán que se observen en todas las corrientes y depósitos las disposiciones existentes ó las que en lo de adelante se dieren sobre policía y salubridad de las aguas.

ALERE FLAMMAM
VERITATIS

CAPÍTULO IV.

De los permisos de caza y pesca.

Art. 44. Cualquiera podrá ejercer el derecho de caza en los terrenos baldíos ó nacionales, mediante permiso escrito, expedido por el Agente de tierras correspondiente, y observando las prescripciones del presente Reglamento.

Art. 45. Los permisos se han de solicitar de los Agentes de tierras, por escrito ó memorial, expresando el lugar ó lugares en que se trata de hacer la caza. Los Agentes indicarán por oficio, á los solicitantes, la oficina en que han de pagar el derecho que fije la tarifa vigente, y una vez presentado el comprobante de pago, se extenderá el permiso, firmado por el Agente respectivo y marcado con el sello de la Agencia.

Art. 46. Los permisos de caza son enteramente personales, y no podrán venderse ni traspasarse á otra persona, quedando por el sólo hecho de la venta ó traspaso, nulos y de ningún valor ni efecto, sin perjuicio de la pena en que incurre el que ejerciere el derecho de caza con un permiso expedido á otra persona, y de la responsabilidad correspondiente al que haya facilitado el permiso.

Art. 47. Los permisos expresarán con claridad el lugar ó lugares en que se ha de ejercitar el derecho de caza, y solamente serán valederos por un año, contado desde la fecha en que se expida cada permiso. Pasado ese tiempo, serán nulos y de ningún valor, y habrá que renovarlos, previos los requisitos establecidos en el art. 45, si se pretende seguir ejercitando aquel derecho por más de un año.

Art. 48. En cada permiso se ha de consignar por los Agentes la advertencia de que, no obstante el período de tiempo por el que aquél es valedero, los cazadores están obligados á respetar las épocas de veda que se fijaren para las diversas especies de animales, incurriendo en las penas que establece el presente Reglamento para los que cazaren animales dentro de esas épocas.

Art. 49. Si en el Estado, Distrito Federal ó Territorio, estuviere reglamentada la portación de armas, están obligados los cazadores á cumplir con los requisitos que se exijan para esa portación; y en todo caso, para ejercer el derecho de caza en los montes y terrenos nacionales, deberán siempre llevar las armas á la vista.

Art. 50. Los permisos para caza en los montes y terrenos nacionales, dan derecho para hacer la caza á toda clase de animales que se encuentren en ellos; pero no podrán usarse para matar á los animales, mas que armas de fuego y cuchillos de monte, quedando prohibido el empleo de trampas, si no es en el caso de que se trate de coger animales dañinos ó feroces. El establecimiento de las trampas se hará precisamente con conocimiento del sub-inspector de la demarcación correspondiente, quien á su vez lo hará saber al guardabosque respectivo, sin cuyos requisitos no se establecerán las trampas.

Art. 51. Los animales feroces ó dañinos que existan en los montes y terrenos nacionales, podrán ser destruidos en cualquiera época del año. Para los demás animales de pelo y pluma, se han de observar en la caza de ellos, las siguientes prevenciones:

I. No se permitirá la caza durante los meses que correspondan á la reproducción de los animales, y, por regla general, se dará principio á la caza de animales de pelo el 1º de Septiembre y se terminará el 1º de Marzo.

II. No se permitirá la caza de animales jóvenes ó que no hayan llegado á su desarrollo normal, ni la de las hembras con cría en el vientre ó en pie.

III. Cuando se note disminución en alguna especie de animales, no se permitirá la caza de las hembras de la

especie, y si fuere preciso, se prohibirá también la de los machos, por el tiempo que se juzgue necesario.

IV. Las aves nocturnas y las demás que destruyan los insectos en los bosques, no podrán ser muertas, ni inquietadas por los cazadores.

V. Se considerará como absolutamente prohibida, en los montes nacionales, la destrucción de los nidos, huevos y crías de aves de cualesquiera especie.

VI. Se considerará igualmente prohibido, el ejercicio de la caza de toda especie de animales durante la noche, y el empleo de linternas ó luces de cualquiera clase para atraerlos.

VII. Tampoco se podrán aprovechar, para dar muerte á los animales, una nevada, una inundación, un incendio ó cualquiera otra circunstancia anormal que obligue á los animales á salir del monte ó á reunirse en otros sitios que los acostumbrados.

Art. 52. Cualquiera podrá ejercitar el derecho de pesca en los ríos, arroyos, lagunas, esteros y demás depósitos de agua que existan en los terronos baldíos ó nacionales, previo permiso que deberá solicitar del Agente de Tierras respectivo y después de satisfecha en la oficina de Hacienda que corresponda la cuota que como derecho lée la tarifa vigente.

Art. 53. Los permisos para el ejercicio del derecho de pesca, en las aguas existentes en los terronos baldíos ó nacionales, serán personales y no podrán transferirse, bajo pena de caducidad de permiso. Su duración será la de un año, contado desde la fecha de su expedición, quedando obligados los pescadores á respetar las épocas de veda y á observar todas las prescripciones que para el caso se establezcan en el reglamento especial de pesca.

CAPÍTULO V.

De las penas por infracciones á este reglamento.

Art. 54. Toda persona que corte uno ó más árboles de cualquiera especie, en los terrenos baldíos y nacionales,

sin el permiso extendido por el Agente de tierras respectivo y sin haber pagado el valor de ellos, incurrirá en una multa igual al doble de ese valor, según el precio que les fige la tarifa vigente, y quedará civil y criminalmente responsable por los daños y perjuicios causados á la propiedad nacional. La sentencia determinará, en cuanto á la responsabilidad civil, lo que deba pagarse, además del valor de los árboles, por reparación, indemnización y gastos del juicio.

Art. 55. Los que sin el permiso y pago respectivo arrancaren la corteza de los árboles en pie, los mutilaren ó los dañaren de manera que puedan perderse, pagarán el valor de ellos, según la tarifa vigente, y además una multa igual al doble de ese valor, y quedarán sujetos á la responsabilidad civil y criminal á que diere lugar el hecho. En iguales multas y responsabilidades incurrirán los que practiquen la extracción de jugos, gomas ó resinas de los árboles, sin sujetarse á las prescripciones de este Reglamento y causando la pérdida de los mismos árboles.

Art. 56. Los que cortaren leña ó frutos de los árboles; los que extrajerén jugos, gomas ó resinas, sin destruir los árboles, pero sin haber obtenido el permiso correspondiente, incurrirán en una multa igual al doble del valor de la leña, frutos ó substancias extraídas de los árboles, y pagarán, además, el valor de los productos extraídos, con arreglo á la tarifa que rija.

Art. 57. Los que encendieren lumbres en los montes nacionales, fuera de los lugares designados para ello en las monterías, ó sin obtener el permiso de un subinspector ó guardabosque, pagarán una multa de tres pesos. Si á causa de haberse encendido una lumbre se produjere incendio en los montes ó pastos, se procederá inmediatamente por los guardabosques á la aprehensión de los que lo hubieren causado, y se les pondrá á disposición de la autoridad más inmediata, dando parte de todo al Agente, para que consigne el hecho al Juez de Distrito que corresponda.

Art. 58. Los que tomaren césped, tierra, piedras ú otros

materiales de los terrenos baldíos ó nacionales, sin el permiso respectivo, pagarán una multa de tres pesos, además del valor de los materiales. En igual multa incurrirán los que introduzcan por un día ó menos de él en los terrenos baldíos y nacionales animales que estén á su cuidado, ó los hagan pasar por ellos sin haber obtenido el permiso correspondiente y sin seguir los caminos designados para el paso.

Art. 59. Los que llevaren á pastar ganados de cualquiera especie á los terrenos baldíos y nacionales, ó los que hicieron permanecer en ellos por más de un día, sin haber obtenido antes el permiso respectivo, pagarán como multa la suma de veinte centavos por cada cabeza de ganado, á reserva de que en el caso de este artículo y del anterior, si los pastores ó los animales causaren perjuicios en el monte, se proceda por la vía judicial á exigir la reparación ó indemnización correspondiente, consignándose á los responsables al Juez de Distrito respectivo.

Art. 60. Los que se introdujeron en los montes ó terrenos baldíos y nacionales, con el objeto de cazar animales de cualquiera especie, sin haber obtenido los correspondientes permisos, pagarán una multa de dos pesos y dejarán en el lugar los animales vivos ó muertos que hubieren cazado. En igual multa incurrirán los que ejerciten la pesca sin permisos, en las aguas que se encuentren en los terrenos baldíos ó nacionales.

Art. 61. El que haga uso de un permiso de caza ó pesca, expedido para otro, como si lo hubiera sido en su favor, se le recogerá desde luego el permiso por el subinspector ó guardabosque que se lo encuentre, y será puesto inmediatamente á disposición de la autoridad judicial más próxima, para la formación de las primeras diligencias y mientras se consigna el hecho al Juez de Distrito á quien corresponda por el Agente respectivo.

Art. 62. Los que habiendo obtenido permiso para ejercitar el derecho de caza y el de pesca en los terrenos baldíos y nacionales, lo hicieren en las épocas de veda ó contraviendo á las prevenciones del art. 51 de este Regla-

mento, pagarán una multa de tres pesos y se les retirarán los permisos. Si para hacer la pesca en las aguas del dominio nacional se emplearen explosivos ó sustancias que puedan causar por envenenamiento ó de otra manera la muerte de los peces, se consignará á los responsables al Juez de Distrito respectivo, para la imposición de la pena correspondiente.

Art. 63. En el caso de incendio en los montes ó terrenos baldíos ó nacionales, todos los particulares que se encuentren en ellos se considerarán obligados á prestar sus servicios para extinguirlo, incurriendo en multa de dos pesos al que se negare á prestar el servicio ó auxilio que se le pida, salvo el caso de imposibilidad ó perjuicio personal.

Art. 64. La falsificación de la marca que los subinspectores pongan á los árboles para entregarlos á los explotadores, ó el uso indebido de ella, constituyen delitos previstos y castigados por el Código Penal, y, en tal virtud cuando se descubra que alguno hace uso indebido de la marca de los subinspectores ó de alguna falsa, para cortar árboles sin permiso ó para cortar más de los que ampara el permiso, además del pago del valor de los árboles y de la multa correspondiente será aprehendido el que haya hecho aquellos usos de la marca y consignado á la autoridad judicial más próxima, para la formación de las primeras diligencias en auxilio del Juzgado de Distrito que haya de conocer del delito.

Art. 65. Las empresas ó compañías que exploten los montes ó terrenos baldíos y nacionales, son civilmente responsables, en los términos del Código Penal, por los daños y perjuicios que causen á la propiedad nacional sus sirvientes, operarios, agentes y demás personas que empleen en la explotación.

Art. 66. Conforme al art. 1,146 del Código Penal, se considerarán como faltas los hechos á que se refieren los artículos relativos de este capítulo, cuando no exceda de diez pesos el daño que se cause á la propiedad nacional, pues pasando de esa suma se considerarán como delitos

y se castigarán como tales; y conforme al art. 1,147 del mismo Código, las penas señaladas á las faltas se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil.

Art. 67. Ninguna multa impuesta por faltas determinadas en el presente Reglamento, podrá hacerse efectiva en cantidad que exceda de quinientos pesos; pero esta restricción se refiere á cada una de las infracciones, pues en el caso de que algún individuo sea responsable de varias á la vez, sufrirá la pena correspondiente á cada una de ellas.

Art. 68. La reincidencia, en las faltas á que se refiere este capítulo, se castigará con arreglo á lo dispuesto en los arts. 217 y 1,142 del Código Penal, considerándose que hay reincidencia cuando el culpable ha sido condenado otra vez por una falta de la misma clase, dentro de los seis meses anteriores á la última.

Art. 69. La imposición de las penas propiamente tales á que hace referencia este capítulo, por infracciones previstas y castigadas en el Código Penal, corresponde á los Jueces de Distrito, á quienes serán consignados los delinquentes para que se haga efectiva la responsabilidad civil y criminal inherente al hecho de que se trate.

Art. 70. Luego que se descubra una explotación fraudulenta en los montes ó terrenos baldíos y nacionales, ya por los subinspectores y guardabosques, directamente, ya por denuncia de otra persona, se procederá inmediatamente por los primeros al aseguramiento de la madera, leña ú otros productos, dando parte los subinspectores por escrito al Agente respectivo, con todos los detalles necesarios, á fin de que éste proceda á instruir el expediente administrativo, para la imposición de las multas, ó haga la consignación del hecho al Juzgado de Distrito que corresponda en el caso de tratarse de un delito. En este último caso, los subinspectores ó los guardabosques pondrán, sin pérdida de tiempo, á los responsables á disposición de la autoridad judicial más inmediata, para que ésta, en auxilio del Juez de Distrito, proceda á formar

las primeras diligencias para la averiguación del delito y la imposición de la pena.

Art. 71. Las multas por infracciones al presente Reglamento y en el caso de faltas, serán impuestas por los Agentes de tierras y se harán efectivas por los Jefes de Hacienda en los Estados ó por los Administradores de Rentas en los Territorios. Una vez comprobada la falta por la que se imponga la multa, el Agente comunicará por oficio el monto de ella al infractor y al Jefe de Hacienda respectivo, para que éste proceda á hacerla efectiva; debiendo dar cuenta de todo el mismo Agente á la Secretaría de Fomento, por medio de un informe al que acompañará copias de aquellos documentos que crea necesarios para justificar sus procedimientos.

Art. 72. Cuando el daño causado en la propiedad nacional no exceda de diez pesos, ni tampoco exceda de esa cantidad la multa correspondiente, dicha multa podrá ser impuesta y recaudada por un subinspector ó por un guardabosque, quienes entregarán en la oficina federal más inmediata todo el importe de la multa, que ha de quedar á disposición del Jefe de Hacienda, y recogerá el correspondiente recibo, dando parte de todo detalladamente al Agente de quien dependan, para que éste ratifique la imposición de la multa y lo comunique al mismo Jefe de Hacienda para la distribución del importe de ella.

Art. 73. — Si los responsables de las faltas, en el caso del artículo anterior, no pudieren pagar las multas que se les impongan, sufrirán un arresto de tres días, para lo que serán consignados, por los empleados encargados del cuidado de los montes nacionales, á la autoridad política más inmediata. A la misma autoridad serán también consignados los que resistieren el pago de las multas por faltas; pero podrá admitirse que los responsables devenguen el importe de la multa haciendo algún trabajo útil en los mismos montes nacionales.

Art. 74. Los animales muertos ó heridos que se recojan á los que ejerciten la caza ó la pesca sin el permiso respectivo, serán entregados á la prisión, hospital ú otro

establecimiento de corrección ó beneficencia más inmediato, y sólo en el caso de que por la distancia pudieran inutilizarse los animales, serán aprovechados por los guardabosques, quienes dejarán en libertad á los que estén sanos.

Art. 75. El importe total de cada multa se enterará en la Jefatura de Hacienda, y de ese importe se aplicará una mitad al Erario Federal y la otra mitad se distribuirá por tercios entre el denunciante, el aprehensor y el Agente que forme el expediente é imponga la multa. Si no hubiere denunciante su parte se aplicará al aprehensor ó aprehensores.

Art. 76. Los Agentes de la Secretaría de Fomento podrán negar la refrenda de sus permisos ó la concesión de otros nuevos á los explotadores que hubieren defraudado los intereses nacionales y se hubieren hecho acreedores á la imposición de penas, así como á los explotadores que ocasionen disgustos á la vecindad de otros cortadores ó que causen desórdenes en las monterías.

Art. 77. En el caso de que no hubiere subinspector ni guardabosque, en algún terreno baldío ó nacional, y llegare á conocimiento del Agente respectivo, por denuncia ó de otra manera, que se hace en dicho terreno la explotación fraudulenta de sus productos ó la destrucción de ellos, ocurrirá á las autoridades locales, en demanda de auxilio, para la aprehensión de los defraudadores en su caso ó para la imposición de las multas, haciéndose la distribución de éstas en los términos establecidos en el artículo 75.

DIRECCIÓN GENERAL

CAPÍTULO VI. Disposición final.

Art. 78. El presente Reglamento comenzará á regir en toda la República el 1º de Noviembre del corriente año, y desde esa fecha quedarán derogados el Reglamento de 19 de Septiembre de 1881, así como las circulares y de-

más disposiciones que se han dictado, sobre corte de maderas y explotación de los montes y terrenos baldíos y nacionales.

“Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á primero de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 1º de Octubre de 1894.
—*Fernández Leal*.—Al

CIRCULAR de 28 de Abril de 1894.—Se recomienda á los Jueces de Distrito el cumplimiento de las prevenciones contenidas en los arts. 75 y 76 de la ley sobre terrenos Baldíos.

Secretaría de Fomento. Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.—Circular.—La ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, expedida el 26 de Marzo del presente año, y de la que oportunamente se ha remitido un ejemplar á ese Juzgado de su digno cargo, contiene en sus arts. 75 y 76; disposiciones encaminadas á facilitar la transición de la ley vigente en la actualidad á la nueva, y que además de tener ese carácter, están destinadas á prestar una base sólida á los Agentes de tierras, para el acierto en las tramitaciones en que deben intervenir, puesto que la lista á que se refiere el art. 75, les dará un exacto conocimiento del estado que guarden los denuncios de terrenos, y por consiguiente de los derechos adquiridos, que deben respetar; y la declaración de morosidad á que se contrae el 76 producirá como consecuencia la movilización de asuntos de baldíos con beneficio real de los intereses de la Nación y de los particulares.

establecimiento de corrección ó beneficencia más inmediato, y sólo en el caso de que por la distancia pudieran inutilizarse los animales, serán aprovechados por los guardabosques, quienes dejarán en libertad á los que estén sanos.

Art. 75. El importe total de cada multa se enterará en la Jefatura de Hacienda, y de ese importe se aplicará una mitad al Erario Federal y la otra mitad se distribuirá por tercios entre el denunciante, el aprehensor y el Agente que forme el expediente é imponga la multa. Si no hubiere denunciante su parte se aplicará al aprehensor ó aprehensores.

Art. 76. Los Agentes de la Secretaría de Fomento podrán negar la refrenda de sus permisos ó la concesión de otros nuevos á los explotadores que hubieren defraudado los intereses nacionales y se hubieren hecho acreedores á la imposición de penas, así como á los explotadores que ocasionen disgustos á la vecindad de otros cortadores ó que causen desórdenes en las monterías.

Art. 77. En el caso de que no hubiere subinspector ni guardabosque, en algún terreno baldío ó nacional, y llegare á conocimiento del Agente respectivo, por denuncia ó de otra manera, que se hace en dicho terreno la explotación fraudulenta de sus productos ó la destrucción de ellos, ocurrirá á las autoridades locales, en demanda de auxilio, para la aprehensión de los defraudadores en su caso ó para la imposición de las multas, haciéndose la distribución de éstas en los términos establecidos en el artículo 75.

DIRECCIÓN GENERAL

CAPÍTULO VI. Disposición final.

Art. 78. El presente Reglamento comenzará á regir en toda la República el 1º de Noviembre del corriente año, y desde esa fecha quedarán derogados el Reglamento de 19 de Septiembre de 1881, así como las circulares y de-

más disposiciones que se han dictado, sobre corte de maderas y explotación de los montes y terrenos baldíos y nacionales.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á primero de Octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 1º de Octubre de 1894.—*Fernández Leal*.—Al

CIRCULAR de 28 de Abril de 1894.—Se recomienda á los Jueces de Distrito el cumplimiento de las prevenciones contenidas en los arts. 75 y 76 de la ley sobre terrenos Baldíos.

Secretaría de Fomento. Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.—Circular.—La ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, expedida el 26 de Marzo del presente año, y de la que oportunamente se ha remitido un ejemplar á ese Juzgado de su digno cargo, contiene en sus arts. 75 y 76; disposiciones encaminadas á facilitar la transición de la ley vigente en la actualidad á la nueva, y que además de tener ese carácter, están destinadas á prestar una base sólida á los Agentes de tierras, para el acierto en las tramitaciones en que deben intervenir, puesto que la lista á que se refiere el art. 75, les dará un exacto conocimiento del estado que guarden los denuncios de terrenos, y por consiguiente de los derechos adquiridos, que deben respetar; y la declaración de morosidad á que se contrae el 76 producirá como consecuencia la movilización de asuntos de baldíos con beneficio real de los intereses de la Nación y de los particulares.

La reconocida ilustración de Ud. le permitirá estimar el empeño que tiene esta Secretaría en que se cumplan debidamente las prescripciones de los citados artículos, para cuyo cumplimiento, el Presidente de la República ha dispuesto, que se recomende á Ud. muy especialmente, se sirva expedir la noticia del estado de los expedientes relativos á terrenos baldíos, á fin de que obre en tiempo oportuno en poder de los Agentes; procediendo desde luego ese Juzgado á haber efectivas las declaraciones de morosidad que correspondan.

Libertad y Constitución. México, Abril 28 de 1894.—
Fernández Leal.—Al.....

CIRCULAR de 13 de Junio de 1894.—Se encarece á los Jefe de Hacienda remitan á los Agentes de Tierras noticia de los permisos vigentes para la explotación de bosques nacionales y terrenos baldíos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 4^a.—Circular.—Debiendo quedar los bosques nacionales á cargo de las Agencias de terrenos baldíos, en cumplimiento de las prescripciones de la ley de 26 de Marzo del presente año, recomiendo á Ud. por acuerdo del Presidente de la República, se sirva enviar al Agente de tierras propietario nombrado para ese Estado, una noticia detallada de los permisos que se hayan expellido para cortes de maderas durante el presente año y que se encuentren vigentes, á fin de que tenga conocimiento de de los derechos que han adquirido los dueños de esos permisos.

Asimismo recomiendo á Ud. se sirva remitir á dicho Agente, otra noticia relativa al personal de los Subinspectores y guardabosques que dependan de esa Jefatura, con expresión de sus nombres, sueldo de que disfrutan y demarcación que tienen designada; permitiéndome encarecer á Ud. la prontitud en la formación y envío de

uno y otro documento, por la necesidad que hay de que obren en tiempo oportuno en poder de la Agencia de tierras.

Parece conveniente además, advertir á Ud. que los expedientes que esa Jefatura esté tramitando sobre imposición de multas por cortes fraudulentos de madera, deberán quedar radicados en ella hasta su conclusión, lo mismo que los que ya se encuentren terminados.

Libertad y Constitución. México, Junio 12 de 1894.—
Fernández Leal.—Al Jefe de Hacienda del Estado de...

CIRCULAR de 15 de Junio de 1894.—Se remiten á los Agentes de la Secretaría de Fomento un libro para registro de denuncias, excedencias y demasías, y otro para índice de Archivo.

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.—Circular.—Remito á Ud. por correo dos libros, debidamente autorizados por esta Secretaría, y destinados á la Agencia de su cargo.

El de mayor número de fojas está dedicado al registro de los denuncias de terrenos baldíos, de las excedencias y de las demasías. En él se han rayado las primeras hojas á fin de que se sirva Ud. seguir ese modelo, para el rayado de las sucesivas y para el extracto del registro de los negocios de que se trata.

El libro menos voluminoso compuesto de cuarenta y cuatro fojas (44), se servirá en esa Agencia para "Índice de su Archivo" y, á este respecto, desde ahora recomiendo á Ud. que forme y conserve el correspondiente á esa Oficina con el mayor cuidado, siguiendo una clasificación ó arreglo de documentos análogo al explicado en el siguiente cuadro:

Partido ó Cantón ó Distrito ó Departamento, etc.

Denuncias	{ A B C etc.
Composiciones	{ A B C etc.
Inscripciones en el Gran Registro.....	{ A B C etc.
Nacionales	{ A B C etc.
Diversos	{ A B C etc.

Es decir, que tomando por base la división política, abrirá Ud. una carpeta á cada partido ó Distrito ó Cantón ó Departamento, y dentro de ésta, otras á las municipalidades que comprenda, y en el grupo que por la naturaleza del asunto (Denuncio, Composición, Inscripción, el Gran Registro, etc.), le corresponda, los diversos asuntos tramitados en el orden alfabético de los nombres de los interesados. Así se conseguirá una gran rapidez y un buen arreglo y despacho en esa Agencia.

Sírvase Ud. acusar recibo de la presente circular y de los libros.

Libertad y Constitución. México, 15 de Junio de 1894.
—Fernández Leal.—Al Agente de la Secretaría de Fomento en.

CIRCULAR de 20 de Junio de 1894.—Se transcribe á los Agentes de tierras la circular del día 12, dirigida á los Jefes de Hacienda.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sec-

ción 1^a.—Circular.—Con fecha 12 del mes actual se ha dirigido á los Jefes de Hacienda y á otros empleados que desempeñan el cargo de Agentes de Fomento en materia de explotación de bosques, la circular siguiente:

“Debiendo quedar los bosques nacionales á cargo de los Agentes de terrenos baldíos, en cumplimiento de las prescripciones de la ley de 26 de Marzo del presente año, recomiendo á Ud. por acuerdo del Presidente de la República, se sirva enviar al Agente de tierras, propietario nombrado para ese Estado, una noticia detallada de los permisos que se hayan expedido para cortes de madera durante el presente año y que se encuentren vigentes, á fin de que tenga conocimiento de los derechos que han adquirido los dueños de esos permisos.—Asimismo recomiendo á Ud. se sirva remitir á dicho Agente, otra noticia relativa al personal de los Subinspectores y Guardabosques que dependan de esa Jefatura, con expresión de sus nombres, sueldos de que disfrutaban y demarcación que tienen designada; permitiéndome encarecer á Ud. la prontitud en la formación y envío de uno y otro documento, por la necesidad que hay de que obren en tiempo oportuno en poder de la Agencia de tierras.—Parece conveniente además, advertir á Ud. que los expedientes que esa Jefatura esté tramitando sobre imposición de multas por cortes fraudulentos de maderas, deberán quedar radicados en ella hasta su conclusión, lo mismo que los que ya se encuentren terminados.”

Lo que transcribo á Ud. para su conocimiento y fines á que hubiere lugar.

Libertad y Constitución. México, Junio 20 de 1894.—
Fernández Leal.—Al Agente de tierras propietario en el Estado de.

CIRCULAR de 2 de Junio de 1894.—Se transcribe á los Agentes de tierras la circular de 28 de Abril, dirigida á los Jueces de Distrito.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sec-

ción 1^a.—Circular.—Con fecha 28 de Abril último dirigió esta Secretaría á los Jueces de Distrito la circular siguiente:

"La ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, expedida en 26 de Marzo del presente año, y de la que oportunamente se ha remitido un ejemplar á ese Juzgado de su digno cargo, contiene en sus arts. 75 y 76, disposiciones encaminadas á facilitar la transición de la ley vigente en la actualidad á la nueva, y que además de tener ese carácter, están destinadas á prestar una base sólida á los Agentes de tierras, para el acierto en las tramitaciones en que deben intervenir, puesto que la lista á que se refiere el art. 75, les dará un exacto conocimiento del estado que guarden los denuncios de terrenos, y por consiguiente de los derechos adquiridos, que deben respetar; y la declaración de morosidad á que se contrae el 76 producirá como consecuencia la movilización de asuntos de baldíos con beneficio real de los intereses de la Nación y de los particulares.—La reconocida ilustración de Ud. le permitirá esfimar el empeño que tiene esta Secretaría en que se cumplan debidamente las prescripciones de los citados artículos, para cuyo cumplimiento, el Presidente de la República ha dispuesto, que se recomiende á Ud. muy especialmente, se sirva expedir la noticia del estado de los expedientes relativos á terrenos baldíos, á fin de que obra en tiempo oportuno en poder de los Agentes; procediendo desde luego ese Juzgado á hacer efectivas las declaraciones de morosidad que correspondan."

Lo que transcribo á Ud. para su conocimiento y los finos á que hubiera lugar.

Libertad y Constitución. México, Junio 21 de 1894.—*Fernández Leal*.—Al agente de tierras propietario en el Estado de.....

CIRCULAR de 2 de Julio de 1894.—Se declaran libres de pago la correspondencia y los telegramas de los Agentes de Tierra.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.—Circular.—Con fecha 29 del mes próximo pasado dice á esta Secretaría la de Comunicaciones y Obras Públicas, lo siguiente:

"De conformidad con la consulta que hace Ud. en su atento oficio núm. 7,052, Sección 1^a, fecha de ayer, hoy se libra orden á la Administración General de Correos y á la Dirección de Telégrafos Federales, á fin de que prevengan respectivamente á las oficinas correspondientes, que admitan, unas, franco de porte la correspondencia, y las otras, transmitan libres de pago los telegramas de los agentes que esa Secretaría se ha servido nombrar con motivo de la promulgación de la nueva ley de tierras."

Lo que transcribo á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Julio 2 de 1894.—*Fernández Leal*.—Al Agente de tierras propietario en el Estado de.....

CIRCULAR de 19 de Diciembre de 1894.—Termino dentro del cual deben protestar los peritos nombrados para practicar la mensura y deslinde de los terrenos baldíos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.—Circular.—Son frecuentes las exposiciones que los denunciantes de terrenos baldíos hacen ante las Agencias de tierras, con motivo de los gastos que edican los origina y de las dificultades que ofrece el cumplimiento del requisito relativo á la presentación ante ellas, dentro del plazo de ocho días que fija el art. 22 del Reglamento de 5 de Junio del presente año, del Perito aceptado que ha

de prestar la protesta de ley, para poder proceder á la mensura y deslinde del terreno que se denuncia; por lo cual y en virtud de que muchas veces los peritos designados residen lejos del lugar de ubicación de la Agencia han estado solicitando dichos denunciantes, que se dicte una resolución que les facilite la manera de cumplir con ese requisito, sin los inconvenientes que ahora presenta su observancia.

Habiendo esta Secretaría dado cuenta al C. Presidente de la República con esas exposiciones, dicho Primer Magistrado se ha servido tomarlas en consideración, y en tal virtud, ha tenido á bien acordar que se amplie la prescripción del art. 22 del Reglamento de 5 de Junio del presente año, en el sentido de que los peritos designados podrán hacer su protesta ante el Administrador de Correos de la localidad donde residan, quien la remitirá desde luego á la Agencia respectiva, para que ésta, en su vista, y por el mismo conducto, envíe al Perito la constancia de que trata el art. 23 del mismo Reglamento.

Lo que comunico á Ud. para su inteligencia y demás fines.

Libertad y Constitución. México, Diciembre 19 de 1894.
—Fernández Leal.—Al.....

Secretaría de Estado y del despacho de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo del año próximo pasado, he tenido á bien decretar la siguiente:

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil ochocientos noventa y cinco á mil ochocientos noventa y seis, la enajenación de los terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 25
” Campeche.....	1 80
” Coahuila.....	1 00
” Colima.....	2 25
” Chiapas.....	2 00
” Chihuahua.....	1 00
” Durango.....	1 00
” Guanajuato.....	3 35
” Guerrero.....	1 10
” Hidalgo.....	2 25
” Jalisco.....	2 25
” México.....	3 35
” Michoacán.....	2 25
” Morelos.....	4 50
” Nuevo León.....	1 00
” Oaxaca.....	1 10
” Puebla.....	3 35
” Querétaro.....	3 35
” San Luis Potosí.....	2 25
” Sinaloa.....	1 10
” Sonora.....	1 00
” Tabasco.....	2 50
” Tamaulipas.....	1 00
” Tlaxcala.....	2 25
” Veracruz.....	2 75
” Yucatán.....	1 80
” Zacatecas.....	2 25
Distrito Federal.....	5 60
Territorio de Tepic.....	2 00
Territorio de la Baja California.....	0 65

“Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á quince de Enero de mil ochocientos noventa y cinco.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 15 de 1895.—*Fernández Leal*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.— Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“**PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:**

“Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien decretar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de 1896 á 1897, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascaliente.....	\$ 2 25
” Campeche.....	1 50
” Coahuila.....	1 00
” Colima.....	2 00
” Chiapas.....	2 00
” Chihuahua.....	1 00

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Durango.....	1 00
” Guanajuato.....	3 35
” Guerrero.....	1 10
” Hidalgo.....	2 25
” Jalisco.....	2 25
” México.....	3 35
” Michoacán.....	2 25
” Morelos.....	4 50
” Nuevo León.....	1 00
” Oaxaca.....	1 10
” Puebla.....	3 35
” Querétaro.....	3 35
” San Luis Potosí.....	2 25
” Sinaloa.....	1 00
” Sonora.....	1 00
” Tabasco.....	2 50
” Tamaulipas.....	1 00
” Tlaxcala.....	2 25
” Veracruz.....	2 50
” Yucatán.....	1 80
” Zacatecas.....	2 25
En el Distrito Federal.....	5 60
” Territorio de Tepic.....	2 25
” Territorio de la Baja California.....	0 50

“Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á once de Enero de mil ochocientos noventa y seis.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 11 de 1896.—*Fernández Leal*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente:

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil ochocientos noventa y siete á mil ochocientos noventa y ocho, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 25
” Campeche.....	1 50
” Coahuila.....	1 00
” Colima.....	2 00
” Chiapas.....	2 00
” Chihuahua.....	1 00
” Durango.....	1 00
” Guanajuato.....	3 35
” Guerrero.....	1 10
” Hidalgo.....	2 25
” Jalisco.....	2 25
” Méjico.....	3 35
” Michoacán.....	2 25
” Morelos.....	4 50
” Nuevo León.....	1 00
” Oaxaca.....	1 10
” Puebla.....	3 35
” Querétaro.....	3 35

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de San Luis Potosí.....	2 25
” Sinaloa.....	1 00
” Sonora.....	1 00
” Tabasco.....	2 50
” Tamaulipas.....	1 00
” Tlaxcala.....	2 25
” Veracruz.....	2 50
” Yucatán.....	1 80
” Zacatecas.....	2 25
Distrito Federal.....	5 60
Territorio de Tepic.....	2 25
Territorio de la Baja California.....	0 50

“Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á veinte de Enero de mil ochocientos noventa y siete.—*Porfirio Díaz*—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 20 de 1897.—*Fernández Leal*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil ochocientos noventa y ocho á mil ochocientos noventa y nueve, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicados en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 00
" Campeche.....	1 75
" Chiapas.....	2 50
" Chihuahua.....	1 00
" Coahuila.....	1 00
" Colima.....	1 00
" Durango.....	1 00
" Guanajuato.....	2 00
" Guerrero.....	1 10
" Hidalgo.....	2 25
" Jalisco.....	2 00
" México.....	2 50
" Michoacán.....	2 75
" Morelos.....	4 00
" Nuevo León.....	1 00
" Oaxaca.....	1 10
" Puebla.....	3 00
" Querétaro.....	2 00
" San Luis Potosí.....	2 25
" Sinaloa.....	1 00
" Sonora.....	1 00
" Tabasco.....	3 00
" Tamaulipas.....	1 00
" Tlaxcala.....	2 00
" Veracruz.....	2 50
" Yucatán.....	2 00
" Zacatecas.....	2 00
En el Distrito Federal.....	5 60
En el Territorio de Tepic.....	2 25
En el Territorio de la Baja California.....	0 50

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á seis de Enero de mil ochocientos noventa y ocho.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 6 de 1898.—*Fernández Leal*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"**PORFIRIO DÍAZ**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, hetenido á bien aprobar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS, á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil ochocientos noventa y nueve á mil novecientos, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicados en los Estados, Distrito Federal, y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 00
" Campeche.....	1 75
" Chiapas.....	2 50
" Chihuahua.....	1 00
" Coahuila.....	1 00
" Colima.....	1 00

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Durango.....	1 00
" Guanajuato.....	2 00
" Guerrero.....	1 10
" Hidalgo.....	2 25
" Jalisco.....	2 00
" México.....	2 50
" Michoacán.....	2 75
" Morelos.....	4 00
" Nuevo León.....	1 00
" Oaxaca.....	1 10
" Puebla.....	3 00
" Querétaro.....	2 00
" San Luis Potosí.....	2 25
" Sinaloa.....	1 00
" Sonora.....	1 00
" Tabasco.....	3 00
" Tamaulipas.....	1 00
" Tlaxcala.....	2 00
" Veracruz.....	2 50
" Yucatán.....	2 00
" Zacatecas.....	2 00
En el Distrito Federal.....	5 60
En el Territorio de Tepic.....	2 25
En el Territorio de la Baja California.....	0 50

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á quince de Enero de mil ochocientos noventa y nueve.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines convenientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 15 de 1899.—*Fernández Leal*.—Al....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil novecientos á mil novecientos uno, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicados en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 00
" Campeche.....	1 75
" Chiapas.....	2 50
" Chihuahua.....	1 00
" Coahuila.....	1 00
" Colima.....	1 00
" Durango.....	1 00
" Guanajuato.....	2 00
" Guerrero.....	1 10
" Hidalgo.....	2 25
" Jalisco.....	2 00
" México.....	2 50
" Michoacán.....	2 75
" Morelos.....	4 00
" Nuevo León.....	1 00
" Oaxaca.....	1 10
" Puebla.....	3 00
" Querétaro.....	2 00
" San Luis Potosí.....	2 25

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Sinaloa	1 00
" Sonora	1 00
" Tabasco	3 00
" Tamaulipas	1 00
" Tlaxcala	2 00
" Veracruz	2 50
" Yucatán	2 00
" Zacatecas	2 00
En el Distrito Federal	5 60
En el Territorio de Tepic	2 25
En el Territorio de la Baja California	0 50

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á primero de Enero de mil novecientos.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 1º de 1900.—*Fernández Leal*.—Al

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil novecientos uno á mil novecientos dos, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascalientes	\$ 2 20
" Campeche	1 95
" Chiapas	3 00
" Chihuahua	1 10
" Coahuila	1 10
" Colima	1 10
" Durango	1 10
" Guanajuato	2 20
" Guerrero	1 20
" Hidalgo	2 50
" Jalisco	2 20
" México	2 75
" Michoacán	3 00
" Morelos	4 40
" Nuevo León	1 10
" Oaxaca	1 20
" Puebla	3 30
" Querétaro	2 20
" San Luis Potosí	2 50
" Sinaloa	1 20
" Sonora	1 10
" Tabasco	3 60
" Tamaulipas	1 20
" Tlaxcala	2 20
" Veracruz	2 75
" Yucatán	2 20
" Zacatecas	2 20
En el Distrito Federal	6 10
En el Territorio de Tepic	2 50
En el Territorio de la Baja California	0 55

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á diez y ocho de Enero de mil novecientos uno.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Leandro Fernández, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 18 de 1901.—*Fernández*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"**PORFIRIO DÍAZ**, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien decretar la siguiente

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil novecientos dos á mil novecientos tres, la enajenación de terrenos baldíos, yemasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascaliente.....	\$ 2 20
" Campeche.....	1 95
" Chiapas.....	3 00
" Chihuahua.....	1 10
" Coahuila.....	1 10
" Colima.....	1 10
" Durango.....	1 10

Precio de cada hectárea.

En el Estado de Guanajuato.....	2 20
" Guerrero.....	1 20
" Hidalgo.....	2 50
" Jalisco.....	2 20
" México.....	2 75
" Michoacán.....	3 00
" Morelos.....	4 40
" Nuevo León.....	1 10
" Oaxaca.....	1 20
" Puebla.....	3 30
" Querétaro.....	2 20
" San Luis Potosí.....	2 50
" Sinaloa.....	1 20
" Sonora.....	1 10
" Tabasco.....	3 60
" Tamaulipas.....	1 20
" Tlaxcala.....	2 20
" Veracruz.....	2 75
" Yucatán.....	2 20
" Zacatecas.....	2 20
En el Distrito Federal.....	6 10
" Territorio de Tepic.....	2 50
" Territorio de la Baja California.....	0 55

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á primero de Enero de mil novecientos dos.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Leandro Fernández, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 1^o de 1902.—*Fernández*.—Al.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que en cumplimiento de lo que establece el artículo 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente:

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil novecientos tres á mil novecientos cuatro, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicadas en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California.

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 20
” Campeche.....	1 95
” Chiapas.....	3 00
” Chihuahua.....	1 10
” Coahuila.....	1 10
” Colima.....	1 10
” Durango.....	1 10
” Guanajuato.....	2 20
” Guerrero.....	1 20
” Hidalgo.....	2 50
” Jalisco.....	2 20
” México.....	2 75
” Michoacán.....	3 00
” Morelos.....	4 40
” Nuevo León.....	1 10
” Oaxaca.....	1 20
” Puebla.....	3 30
” Querétaro.....	2 20
” San Luis Potosí.....	2 50

	Precio de cada hectárea.
En el Estado de Sinaloa.....	1 20
” Sonora.....	1 10
” Tabasco.....	3 60
” Tamaulipas.....	1 20
” Tlaxcala.....	2 20
” Veracruz.....	2 75
” Yucatán.....	2 20
” Zacatecas.....	2 20
En el Distrito Federal.....	6 10
En el Territorio de Tepic.....	2 50
En el Territorio de la Baja California.....	0 55

“Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

“Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á veinte de Enero de mil novecientos tres.—*Porfirio Díaz*.—Al C. General Manuel González Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.”

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Enero 20 de 1897.—*G. Cosío*.—A.....

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que en cumplimiento de lo que establece el art. 12 de la ley de 26 de Marzo de 1894, he tenido á bien aprobar la siguiente:

TARIFA DE PRECIOS á que deberá sujetarse en el próximo año fiscal de mil novecientos cuatro á mil novecientos cinco, la enajenación de terrenos baldíos, demasías y excedencias ubicados en los Estados, Distrito Federal y Territorios de Tepic, Baja California y Quintana Roo.

	Precio de cada hectárea
En el Estado de Aguascalientes.....	\$ 2 20
" Campeche.....	2 25
" Chiapas.....	3 00
" Chihuahua.....	1 20
" Coahuila.....	1 10
" Colima.....	1 10
" Durango.....	1 20
" Guanajuato.....	2 20
" Guerrero.....	1 20
" Hidalgo.....	2 50
" Jalisco.....	2 20
" México.....	2 75
" Michoacán.....	3 00
" Morelos.....	4 40
" Nuevo León.....	1 10
" Oaxaca.....	1 20
" Puebla.....	3 30
" Querétaro.....	2 20
" San Luis Potosí.....	2 50
" Sinaloa.....	1 20
" Sonora.....	1 30
" Tabasco.....	3 60
" Tamaulipas.....	1 20
" Tlaxcala.....	2 20
" Veracruz.....	2 75
" Yucatán.....	2 20
" Zacatecas.....	2 20
En el Distrito Federal.....	6 10
En el Territorio de Tepic.....	2 50
En el Territorio de la Baja California.....	0 70
En el Territorio de Quintana Roo.....	0 50

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á veintiocho de Enero de mil novecientos cuatro.—*Porfirio Diaz*.—Al C. General Manuel Gonzalez Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á usted para su conocimiento y fines consiguientes.—*G. Cosío*.—Al....

DECRETO de 28 de Noviembre de 1896.—*Autorización al Ejecutivo para ceder gratuitamente á los labradores pobres los terrenos baldíos y nacionales que están poseyendo.*

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1^a.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Art. 1^o Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para que por conducto de la Secretaría de Fomento haga cesión gratuita de terrenos baldíos ó nacionales, á los labradores pobres que los estén poseyendo, mediante los trámites que fije el Reglamento de la presente ley.

Art. 2^o Se le faculta igualmente para hacer también cesión gratuita de terrenos baldíos ó nacionales, á las nuevas poblaciones que sean erigidas conforme á las leyes respectivas, en los Estados, Territorios, tanto para el fando legal, cuanto para los servicios públicos, en la ex-

tensión estrictamente necesaria.—*Justino Fernández*, diputado presidente.—*V. de Castañeta y Nájera*, senador presidente.—*Juan Brihiesca*, diputado secretario.—*Mariano Barceña*, senador secretario."

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule-se y e la de el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis.—*Porfirio Díaz*.—Rúbrica.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Noviembre 28 de 1896.—*Fernández Leal*.—Al C. *...*

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1.^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con lo que establece el art. 1.^o de la ley de 27 de Noviembre de 1896, he tenido á bien expedir el siguiente

REGLAMENTO de la ley sobre cesión gratuita de terrenos baldíos y nacionales.

CAPITULO I.

De la adjudicación de terrenos baldíos y nacionales á los labradores pobres.

Art. 1.^o Para los efectos de la ley serán considerados como labradores pobres aquellos que estén poseyendo

terrenos baldíos y nacionales, en los Estados, Distrito Federal y Territorios, y cuyo valor fijado por las respectivas oficinas de contribuciones, en el último año fiscal, no exceda de doscientos pesos.

Art. 2.^o No son objeto de la ley los terrenos poseídos por los pueblos ó por comunidades, á título de ejidos ó de común repartimiento, los cuales seguirán fraccionándose y adjudicándose con arreglo á las leyes federales y locales vigentes en la materia.

Art. 3.^o Tampoco se podrá solicitar la adjudicación de terrenos baldíos ó nacionales que, á la fecha de la expedición de la ley, hubieren sido ya objeto de algún convenio, en el que se hubiese pactado su enajenación.

Art. 4.^o Para gozar de los beneficios de la ley, los poseedores tienen que comprobar ante la Secretaría de Fomento que han estado en posesión continua y pacífica del terreno, diez años por lo menos, ó que lo han poseído por más de un año y un día, anteriores á la fecha de la ley, con título translativo de dominio.

Art. 5.^o La comprobación se hará por medio de información judicial, levantada ante el juez local dentro de cuya jurisdicción se encuentre el terreno poseído, debiendo llenar la información los requisitos que para el caso exija el Código de Procedimientos Civiles del Estado ó Territorio respectivo.

Art. 6.^o En la información se hará constar de qué manera se ha estado poseyendo el terreno baldío ó nacional cuya adquisición se solicite, expresando en aquella con toda claridad si el terreno se ha poseído por un individuo ó por una comunidad, si se ha cultivado constantemente ó por temporadas, si hay en él habitaciones, si está acotado con zanja, cerca ó meloneras artificiales y si hay ó no pendiente algún litigio, sobre la posesión del mismo terreno.

Art. 7.^o El solicitante de concesión gratuita, de un terreno baldío ó nacional, está obligado á deslindarlo y medirlo por su cuenta, á fin de que se conozca la superficie que se le enajena y se consigne en el título respec-

tensión estrictamente necesaria.—*Justino Fernández*, diputado presidente.—*V. de Castañeta y Nájera*, senador presidente.—*Juan Brihiesca*, diputado secretario.—*Mariano Barceña*, senador secretario."

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule-se y e la de el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a veintisiete de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis.—*Porfirio Díaz*.—Rúbrica.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Noviembre 28 de 1896.—*Fernández Leal*.—Al C. *...*

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 1.^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformidad con lo que establece el art. 1.^o de la ley de 27 de Noviembre de 1896, he tenido á bien expedir el siguiente

REGLAMENTO de la ley sobre cesión gratuita de terrenos baldíos y nacionales.

CAPITULO I.

De la adjudicación de terrenos baldíos y nacionales á los labradores pobres.

Art. 1.^o Para los efectos de la ley serán considerados como labradores pobres aquellos que estén poseyendo

terrenos baldíos y nacionales, en los Estados, Distrito Federal y Territorios, y cuyo valor fijado por las respectivas oficinas de contribuciones, en el último año fiscal, no exceda de doscientos pesos.

Art. 2.^o No son objeto de la ley los terrenos poseídos por los pueblos ó por comunidades, á título de ejidos ó de común repartimiento, los cuales seguirán fraccionándose y adjudicándose con arreglo á las leyes federales y locales vigentes en la materia.

Art. 3.^o Tampoco se podrá solicitar la adjudicación de terrenos baldíos ó nacionales que, á la fecha de la expedición de la ley, hubieren sido ya objeto de algún convenio, en el que se hubiese pactado su enajenación.

Art. 4.^o Para gozar de los beneficios de la ley, los poseedores tienen que comprobar ante la Secretaría de Fomento que han estado en posesión continua y pacífica del terreno, diez años por lo menos, ó que lo han poseído por más de un año y un día, anteriores á la fecha de la ley, con título translativo de dominio.

Art. 5.^o La comprobación se hará por medio de información judicial, levantada ante el juez local dentro de cuya jurisdicción se encuentre el terreno poseído, debiendo llenar la información los requisitos que para el caso exija el Código de Procedimientos Civiles del Estado ó Territorio respectivo.

Art. 6.^o En la información se hará constar de qué manera se ha estado poseyendo el terreno baldío ó nacional cuya adquisición se solicite, expresando en aquella con toda claridad si el terreno se ha poseído por un individuo ó por una comunidad, si se ha cultivado constantemente ó por temporadas, si hay en él habitaciones, si está acotado con zanja, cerca ó meloneras artificiales y si hay ó no pendiente algún litigio, sobre la posesión del mismo terreno.

Art. 7.^o El solicitante de concesión gratuita, de un terreno baldío ó nacional, está obligado á deslindarlo y medirlo por su cuenta, á fin de que se conozca la superficie que se le enajena y se consigne en el título respec-

tivo de propiedad; encargando el mismo solicitante dichas operaciones al perito, ó practico, en su defecto, que merezca su confianza.

Art. 8º En la práctica de las operaciones de medición y deslinde del terreno que se solicite, el perito se ha de sujetar á las prescripciones de la ley vigente de 2 de Agosto de 1863, sobre medidas de tierras, formando el plano del terreno y acompañando sus datos y resultados de entera conformidad con las prescripciones de la misma ley.

Art. 9º La conformidad de los colindantes del terreno solicitado se hará constar por medio de las manifestaciones que por escrito deberán dirigir los mismos colindantes al perito que practique la medición del terreno, de acuerdo con lo que establece el art. 27 del Reglamento de la ley de 26 de Marzo de 1894, sobre enajenación de baldíos, ó bien obteniéndola el solicitante del mismo terreno, por medio de escritura pública otorgada ante notario ó juez autorizado para otorgar instrumentos públicos, ó por comparecencia ante un Juez de 1ª Instancia ó ante el Agente de Tierras del Estado, de acuerdo con lo que establece el art. 39 de la misma ley de 26 de Marzo de 1894.

Art. 10. Si durante las operaciones de medición y deslinde se presentare alguna oposición y no pudiese el perito lograr el avenimiento entre el solicitante, y el opositor u opositores, suspenderá las operaciones y entregará lo actuado al solicitante, quien deberá ocurrir al Juzgado de Distrito, dentro de cuya jurisdicción se encuentre el terreno, á fin de que se abra el juicio correspondiente, en el que se tendrá por parte al representante de la Hacienda Federal.

Art. 11. Terminado el juicio de oposición, se dará por el Juzgado de Distrito al solicitante, copia de la sentencia que hubiere recaído en el juicio; á fin de que en el caso de que dicha sentencia le fuere favorable, se continúe el procedimiento iniciado hasta obtener la concesión del terreno. La copia de la sentencia se agregará por el soli-

citante al expediente que tiene que remitir á la Secretaría de Fomento.

Art. 12. Una vez concluidos el deslinde y medición del terreno y obtenida la conformidad de los colindantes, el perito extenderá un informe sobre la práctica y el resultado de sus operaciones y lo entregará al solicitante con el plano del terreno y una copia del mismo plano, autorizado con su firma y conteniendo los datos y resultados que exige la ley de 2 de Agosto de 1863, como la longitud de los lados, la amplitud de los ángulos que formen las líneas que limitan el terreno, la superficie del mismo y la declinación de la aguja magnética, con la fecha en que se hizo la observación.

Art. 13. Para obtener el título gratuito de propiedad de un terreno baldío ó nacional, poseído por diez años ó más, ó por un año y un día con títulos translativos de dominio, el interesado deberá elevar un ocurso á la Secretaría de Fomento, por conducto del Gobernador del Estado ó Territorio respectivo, solicitando la adjudicación y acompañando al ocurso los documentos siguientes:

I. Copia certificada del último recibo de pago de la contribución inpuesta sobre el terreno, á fin de hacer constar que su valor no pase de doscientos pesos.

II. Diligencias originales ó en copia certificada para comprobar que el terreno se ha poseído diez años por lo menos, ó por un año y un día, y copia del título translativo de dominio.

III. Conformidad de los colindantes del terreno solicitado, expresada de alguna de las maneras que fija el artículo 9º de este Reglamento.

IV. Plano del terreno y su copia, acompañados del informe del perito que practicó las operaciones de medición del mismo terreno.

V. Copia de la sentencia recaída en el juicio de oposición, si hubo lugar á ese juicio.

Art. 14. Examinados el expediente y el plano por la Secretaría de Fomento, y encontrándose que se han formado de conformidad con lo que prescribe el presente

Reglamento, se comunicará así al solicitante, expresándose que se aprueba lo actuado y se procede á extender el título que le asegure la propiedad del terreno.

Art. 15. Los títulos de concesión gratuita de terrenos baldíos y nacionales se extenderán en la misma forma que los que se expiden por enajenaciones de dichos terrenos, sin más costo para los interesados que la estampilla que exige la ley del timbre, y se entregarán á los mismos interesados ó á quien ellos comisionen para recibirlos, con un ejemplar del plano del terreno, autorizado con el sello de la Secretaría y la firma del Oficial Mayor de ella.

La expedición del título se comunicará al Gobernador del Estado ó Territorio en donde se encuentre el terreno y al Agente de Tierras respectivo.

Art. 16. Cuando el terreno baldío ó nacional cuya adjudicación se solicite, esté poseído por una agrupación de labradores pobres, al hacerse la medición y deslinde del terreno se procederá al fraccionamiento del mismo en el número de lotes que correspondía al número de familias que compongan la agrupación, á fin de que la adjudicación se haga individualmente y no en común.

Art. 17. No se llevará á cabo el fraccionamiento en lotes del terreno baldío ó nacional solicitado, cuando la agrupación de labradores forme una sociedad civil ó comercial, legalmente constituida, antes de la expedición del presente Reglamento, y en cuya escritura social se haya estipulado que el terreno se ha de poseer en común

DIRECCIÓN GENERAL DE

CAPÍTULO II.

De la adjudicación gratuita de terrenos baldíos y nacionales, para la fundación de nuevas poblaciones.

Art. 18. Para la cesión gratuita de terrenos baldíos ó nacionales, con destino á la fundación de nuevas poblaciones, el Gobierno del Estado ó Territorio que pretenda

erigir la nueva población, se dirigirá á la Secretaría de Fomento, exponiendo la posibilidad y la conveniencia del establecimiento de la nueva población é indicando la extensión de terreno baldío ó nacional que á su juicio se necesitará para objeto.

Art. 19. Si la solicitud la hiciere una agrupación que residiera ya en el terreno baldío ó nacional, no podrá tomarse en consideración sin que el Gobierno del Estado ó Territorio informe favorablemente sobre la posibilidad y la conveniencia del establecimiento de la nueva población.

Art. 20. Subsistiendo la prohibición legal para que las corporaciones adquieran bienes raíces, y conforme á lo prescripto en el art. 2º de la ley, no se concederá más terreno que el que fuere necesario para el fundo legal de la nueva población y para servicios públicos, como paseos, rastro, panteones.

Art. 21. Una vez acordada por el Gobierno Federal la concesión del terreno, se procederá al levantamiento del plano correspondiente, por el perito que nombra el Gobierno del Estado ó Territorio, debiendo acompañar el mismo perito á su informe, sobre las operaciones científicas que hubiere ejecutado, la conformidad de los colindantes actuales del terreno, si los hubiere.

Art. 22. El plano del terreno deberá contener los datos y resultados que exige la ley vigente sobre medidas de tierras de 2 de Agosto de 1863, y el informe del perito deberá llenar las condiciones que requiere el art. 31 del reglamento de la ley de 26 de Marzo de 1894, sobre enajenación y ocupación de baldíos.

Art. 23. Terminadas las operaciones de medición y deslinde, el Gobierno del Estado ó Territorio remitirá á la Secretaría de Fomento, el expediente respectivo, que se formará con el informe del perito sobre aquellas operaciones, el plano del terreno por duplicado y la conformidad de los colindantes, si los hubiere.

Art. 24. Examinadas las operaciones de medición y deslinde por la Secretaría de Fomento, y encontrándose

arregladas á las leyes y disposiciones que prescribe el presente reglamento, se dará la aprobación de ellas y se procederá á extender el título correspondiente de propiedad, en la misma forma y con los requisitos con que se extienden esos documentos, haciéndose constar en él la cesión gratuita del terreno y el objeto de la cesión.

Art. 25. Queda á cargo del Gobierno del Estado ó Territorio el promover, en el momento que lo juzgue oportuno, la expedición de la ley que autorice el establecimiento de la nueva población.

Art. 26. Si por algún motivo no llegare á fundarse la nueva población, no podrá darse por el Gobierno del Estado ó Territorio otro destino al terreno, el cual volverá á ser del dominio de la Federación, devolviéndose el título á la Secretaría de Fomento, para que se cancele y archive.

"Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á seis de Septiembre de mil ochocientos noventa y siete. — *Porfirio Díaz*. — Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e Industria."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, 6 de Septiembre de 1897. — *Fernández Leal*. — Al C.

CIRCULAR de 31 de Julio de 1902. — Estampillas con que deben legalizarse los títulos de propiedad de terrenos baldíos.

Dirección General de la Renta del Timbre. — México. — Sección 3ª. — Circular núm. 368.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden de 17 del pasado, me dice:

"Las resoluciones de esta Secretaría, comunicadas á la Administración General del Timbre en 25 de Junio de 1895 y 10 de Enero de 1900, y circuladas por ésta en 28

de Junio de 1895 y 27 de Enero de 1900, respectivamente, dispusieron: la primera, que pudieran legalizarse con estampillas procedentes de cualquiera de las Administraciones de la Renta, los títulos de propiedad minera; y la segunda, que esa autorización se hiciera extensiva á los títulos de terrenos baldíos. — Estas concesiones, y la circunstancia de que las Administraciones del Timbre disfruten honorarios cuyo monto se fija en razón inversa del de las ventas que realizan, ha dado lugar, según noticias que tiene esta Secretaría, á que algunos dueños de terrenos baldíos ó de fundos mineros, ó sus Agentes, obtengan indebidamente de ciertas oficinas del Timbre la venta de estampillas con descuento de su valor. — Y como las prevenciones contenidas en dichas circulares, sólo tuvieron por objeto facilitar en provecho de los interesados la expedición de los títulos respectivos, pero de ninguna manera autorizar un lucro indebido, que además de estar en pugna con lo dispuesto por el art. 3º de la Ley del Timbre, establece un desequilibrio en los honorarios que deben corresponder á las Oficinas del Ramo, y perjudica los intereses del Erario, el Presidente de la República ha tenido á bien acordar: que desde esta fecha se tengan por derogadas las circulares referidas, y que en lo sucesivo los títulos de propiedad minera y de terrenos baldíos se legalicen precisamente con estampillas comunes que lleven el resello de la Dirección General de la Renta, ó de las principales en cuya demarcación estuvieren ubicados los terrenos baldíos ó los fundos mineros; en la inteligencia de que los títulos que tengan estampillas de distinta demarcación, quedarán sujetos á la reposición de aquéllas, en los términos de la circular núm. 171 de 11 de Septiembre de 1894."

Lo transcribo á Ud. para su conocimiento y efectos, sirviéndose acusarme recibo de la presente.

México, 31 de Julio de 1902. — El Director, *R. Oyarri*. — Al Administrador Principal del Timbre en. . . .

LEY de 1.º de Febrero de 1856.—Se establecen las condiciones bajo las cuales pueden adquirir bienes raíces los extranjeros.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 2.ª.

El Excelentísimo Señor Presidente sustituto de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El C. Ignacio Comonfort, Presidente sustituto de la República, etc.

Art. 1.º Los extranjeros avocados y residentes en la República, pueden adquirir y poseer propiedades rústicas y urbanas, incluidas las minas de toda clase de metales y de carbón de Piedra, ya sea por compra, adjudicación, donación ó cualquiera otro título de dominio establecido por las leyes comunes ó por la Ordenanza de Minería.

Art. 2.º Ningún extranjero podrá, sin previo permiso del Supremo Gobierno, adquirir bienes raíces en los Estados ó Territorios fronterizos, sino á veinte leguas (83 kilómetros 800 metros) de la línea de la frontera.

Art. 3.º Los extranjeros que deseen obtener el permiso de que habla el artículo anterior, deberán dirigir su solicitud al Ministerio de Fomento, para que en vista de ella y del informe del Estado ó Territorio respectivo, se resuelva lo conveniente.

Art. 4.º En las adquisiciones que por consecuencia de esta ley quieran hacer los extranjeros, de fincas rústicas, urbanas ó de terrenos para construir las, inmediatos á las poblaciones, gozarán los inquilinos ó arrendatarios actuales el derecho del tanto, en igualdad de circunstancias y condiciones.

Art. 5.º Los extranjeros que en virtud de esta ley adquieran propiedades raíces, quedan sujetos en todo lo relativo á ellas á las disposiciones que se hayan dictado ó se dictaren en lo sucesivo sobre translación, uso y conservación de las mismas propiedades en la República, así como de toda clase de impuestos, sin poder alegar en ningún tiempo, respecto de estos puntos, el derecho de extranjería.

Art. 6.º Por consiguiente, todas las cuestiones que acerca de tales propiedades puedan suscitarse, serán ventiladas en los tribunales de la República y conforme á sus leyes, con exclusión de toda intervención extraña, cualquiera que sea.

Art. 7.º Los extranjeros que adquieran propiedades rústicas, urbanas ó de minas, conforme á esta ley, estarán obligados á prestar el servicio de armas cuando se trate de la seguridad, de la propiedad y de la conservación del orden de la misma población en que estén radicados. Fuera de estos casos, no se les podrá exigir tal servicio.

Art. 8.º Para que los extranjeros que hayan adquirido propiedades en la República puedan ser ciudadanos de ella, bastará que hagan constar esta circunstancia ante la autoridad política del lugar de su residencia. Presentada esta constancia en el Ministerio de Relaciones, con la solicitud respectiva, se les expedirá su carta de ciudadanía.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, á 1.º de Febrero de 1856.—Ignacio Comonfort.—Al C. Manuel Silico.

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Dios y Libertad.—México, 1.º de Febrero de 1856.—Silico.

Aguas nacionales.

DECRETO de 2 de Agosto de 1863.—Medidas para tierras y aguas.

Ministerio de Justicia, Fomento é Instrucción Pública.

El C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"BENITO JUÁREZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

Que en uso de las amplias facultades de que me hallo investido, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1.^o Las medidas de terrenos y las de aguas, sean para riegos ó potencia, serán estimadas por los ingenieros y agrimensores según el sistema métrico-decimal, dando al mismo tiempo, y durante diez años, su reducción á las unidades de mensura que hasta hoy han estado en uso.

Art. 2.^o Los valores de los terrenos y las aguas se derivarán de los actuales, y se reducirán á las nuevas unidades de medida; los precios de éstas serán los que se expresan en todas las partidas de avalúo.

Art. 3.^o Cuando hubiere contienda sobre las aguas porque se alegue derecho á una cantidad cuyos títulos ó documentos anteriores á la sanción de la ley, den la medida en surcos, no se empleará la relación que adelante se fija para determinar la cantidad controvertida, sino cuando no haya ninguna otra prueba material sobre cuál haya sido aquella cantidad; mas si esto puede justificarse por cualquier otro medio que importe prueba plena, se decidirá conforme á ella.

Disposiciones sobre medidas de tierras.

Art. 4.^o Las medidas longitudinales itinerarias y de superficie, serán en adelante las fijadas por las tablas sancionadas por el Ministerio de Justicia, Fomento é Instrucción Pública, en 10 de Noviembre de 1852, relativas al sistema métrico-decimal establecido por la ley de 15 de Marzo de 1857.

Art. 5.^o Al formar el avalúo, los ingenieros ó agrimensores deberán cumplir las prevenciones siguientes:

I. Indicar la calidad agrícola de los terrenos.

II. Presentar un plano, si así se pactare, ó si no hubiere tal convenio, el croquis de los terrenos que se ha-

yan vendido, en que constará la longitud de las líneas y la amplitud de los ángulos, cuyo valor podrán asentar en cuenta, además del honorario del avalúo.

III. En todo plano ó croquis se marcará su orientación astronómica y además la magnética, anotándose la declinación que se hubiere observado, y la fecha en que se hace la observación.

IV. Los planos ó croquis serán formados según la proyección horizontal de los terrenos, conforme á los principios de la topografía.

V. En los reconocimientos de las distancias, y en las medidas que acaso sea necesario practicar en los actos posesorios de deslinde, ó cualesquiera otros judiciales, los ingenieros ó agrimensores indicarán la reducción que las medidas materiales deban tener, cuando por no ser horizontales hayan de corregirse, en razón de la inclinación que presenten.

Disposiciones sobre medidas de aguas.

Art. 6.^o El litro, esto es, la capacidad de un decímetro cúbico, será en adelante la única medida para las aguas rústicas y urbanas. En el cómputo de las primeras se tomará por unidad de tiempo el *segundo*, y en el de las urbanas el *minuto*.

Art. 7.^o Un surco se considerará igual á *seis litros y medio por segundo*, en las medidas rústicas, y en las urbanas se considerará la *paja* igual á *cuarenta y cinco centésimos de litro por minuto*.

Art. 8.^o Los ingenieros, agrimensores é hidromensores, arreglarán en cada caso las *datos* rústicas y urbanas que correspondan á los elementos de inclinación, distancia de las tomas ó presión, que deban tenerse en cuenta, presentando en cada caso las fórmulas que emplearen, y las razones de sus procedimientos.

Art. 9.^o La medida para las potencias mecánicas será el *kilográmetro*, esto es, un kilogramo por segundo, con

la altura de un metro, formando setenta y cinco kilogramos el caballo de vapor.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Gobierno Federal, en San Luis Potosí, á 2 de Agosto de 1863. — Benito Juárez. — Al C. Jesús Terán, Ministro de Justicia, Fomento é Instrucción Pública."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios y Libertad. San Luis Potosí, Agosto 2 de 1863. — Terán.

RESOLUCION de 20 de Febrero de 1890. — *Se declara que la zona marítima es de propiedad pública.*

Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. — México. — Departamento de Marina. — Sección de buques mercantes. — Mesa segunda. — Número 29,451.

Di cuenta al Presidente de la República con las comunicaciones de la Secretaría del digno cargo de Ud., giradas por la Sección 1.^a, núms. 15,902 y 15,931, de fechas respectivamente 15 y 16 de Enero último, en las cuales se sirve transcribir las comunicaciones en que el Jefe de Hacienda en Guaymas y el Administrador de la Aduana Marítima en Tuxpan manifiestan que habiendo notificado á las personas que ocupan terrenos pertenecientes á la zona marítima en dicha ciudad y en la de Guaymas la obligación en que estaban de pagar al Erario, por arrendamiento, la cuota que señala la circular de 5 de Diciembre último, los interesados se han opuesto á este procedimiento administrativo, como es de verse en las representaciones que suscriptas por ellos se acompañan, alegando que dicha suprema disposición no les corresponde en razón de que son dueños de los terrenos de que se trata, por haberlos adquirido de los Ayuntamientos de esas localidades, según consta por los títulos que justifican su propiedad. El Administrador de la Aduana de Tuxpan pide, además, se le remita copia de las disposi-

ciones vigentes sobre zona marítima para que por ellas pueda normar sus procedimientos.

Las riberas de la mar forman parte del dominio público. En el Derecho Romano aparece ya consagrado este principio: "Litora in qua populus romanus imperium habet, populi Romani, esse arbitror." Se ha creído con razón que el interés de la defensa contra los enemigos del exterior y las medidas que debían tomarse contra la invasión de las aguas por una parte, y por otra la conveniencia de no estorbar el uso de esas riberas para la navegación, así como la participación de ciertas ventajas secundarias, como el aprovechamiento de la pesca, de la cosecha de las algas y el establecimiento de salinas, etc., exigían libertad de acción administrativa de las trabas que suscita la propiedad privada en todas partes donde ella se establece, y que, para llegar á este resultado, el único medio eficaz era declarar en principio que los particulares no pueden adquirir ningún derecho de propiedad sobre las riberas de la mar.

Por estas consideraciones de orden público se han colocado las riberas de la mar entre las cosas que pertenecen á la Nación, cuya guardia y conservación constituyen uno de los atributos de la soberanía, sin que esto quiera decir que ellas sean una verdadera propiedad entre las manos del Soberano, pues más bien importan el depósito que se le ha confiado de una cosa común ó pública para que la conserve, la proteja y la haga útil á todos los ciudadanos. Las consecuencias principales que de esta idea general se desprenden son: que el acceso de las riberas del mar es libre para todos, y los particulares nada pueden hacer que estorbe ese libre acceso, y que no se puede levantar ninguna construcción sobre esas riberas. (V. á Plocque "De la mer et de la navigation.")

Veamos ahora si estos mismos principios se encuentran consignados en nuestra legislación patria.

Por Suprema disposición de 15 de Noviembre de 1850 y con motivo de una consulta que hizo á esta Secretaría

el Capitán de puerto de Acapulco para que se aclarara hasta dónde se extendían los límites de las playas de los puertos, se resolvió que además de lo prevenido en los arts. 8º y 17, del tratado 5º, título 7º de las Ordenanzas de la Armada, se hallaban vigentes las Reales órdenes siguientes:

En la Ordenanza de poblaciones del Rey D. Felipe II, la de 92, que forma la ley 6ª, tit. 7º, lib. 4º de la Recopilación de Indias, dice á la letra: "Territorio y término para nueva población, no se puede conceder ni tomar por asiento en puertos de mar ni en parte que en algún tiempo pueda redundar en perjuicio de nuestra corona real ni de la República, porque nuestra voluntad es que queden reservados para Nos."

La real Orden de 10 de Septiembre de 1815, que declaró en favor de los matriculados la libre venta de pescados en los muelles, costas y playas, mandó que para evitar en lo sucesivo toda clase de dudas, debían entenderse por playas "todo aquel espacio que baña el agua del mar en su flujo y reflujo diario y veinte varas comunes más arriba de la pleamar."

Con posterioridad en 5 de Mayo de 1851 y con motivo de haberse quejado un vecino del puerto de Mazatlán, de que la Comandancia Militar de ese puerto atacaba su derecho de propiedad impidiéndole fabricar su casa de habitación en un terreno de la playa del mismo puerto, que decía pertenecerle legalmente, se resolvió que la adjudicación hecha por la Comandancia de Marina, único título de propiedad que alegaba el reclamante al terreno en cuestión, no le daba á la verdad ningún derecho sobre él por no haber tenido la Comandancia la facultad necesaria para hacer semejante repartimiento de playas que prohibía la Ordenanza de población y la ley citada de la Recopilación de Indias; y de consiguiente, faltando la base de adquisición legal, faltaba también el fundamento de la queja. Esta resolución termina diciendo, que como pudiera haber alguna otra persona que alegando mejores títulos de propiedad intentara fabricar en los terre-

nos de la playa con notorio perjuicio de los intereses del Erario, favoreciendo el contrabando, ó del servicio público obstruyendo las vías de comunicación, el Presidente recomendaba se impidieran estas fabricaciones siempre que se proyectaran dentro de la pleamar, pues así no podrían estorbarse la vigilancia del resguardo de la Aduana ni el establecimiento de las fortificaciones, depósitos de pólvora, artillería, etc., de que trata el art. 8º, del Tratado 5º, título 7º, de la Ordenanza General de la Armada.

El año de 1861, el capitán de puerto de Mazatlán manifestó que el Ayuntamiento de esa localidad estaba adjudicando solares sin respetar las zonas marítimas, y que habiéndose quejado de este procedimiento á la autoridad política, nada se había hecho para remediar el mal, continuando en el mismo estado lo dispuesto por el Ayuntamiento. El Presidente de la República se sirvió resolver en 30 de Septiembre del año citado, se impidiera esa concesión de terrenos, hecha por el Ayuntamiento de dicho puerto, así como la fabricación de casas, siempre que se proyectaran dentro de la línea de playa que demarcaba la Real Orden vigente de 10 de Septiembre de 1815, que era de veinte varas más arriba de donde llega la pleamar, pues así no podría estorbarse la vigilancia del resguardo de la Aduana ni el establecimiento de fortificaciones, etc., y que si el expresado Ayuntamiento había cedido algunos solares comprendidos en el espacio de terreno de que se trata, quedaran sin efecto esas concesiones, porque el Supremo Gobierno era el único que podía hacerlas.

Estos preceptos no sólo han sido repetidas veces recordados por esta Secretaría de mi cargo; se encuentran también consignados en varias resoluciones de la de Fomento. En 13 de Noviembre de 1868 se dijo por ella al Gobernador del Estado de Sinaloa, que la concesión de terrenos hecha por el Supremo Gobierno á la ciudad de Mazatlán, estaba sujeta entre otras condiciones á la siguiente: "La concesión no se extiende al terreno ocupado actualmente por las aguas del mar, ni tampoco al que se halle comprendido en una zona de playa de vein-

ta metros, contada desde la orilla del agua en la pleamar." En 17 de Abril de 1883, la misma Secretaría resolvió que los esteros, radas, bocanas y lagos disfrutan de zona marítima fijada por la Real Orden de 10 de Septiembre de 1815 y disposiciones correlativas. Finalmente, la ley de 12 de Septiembre de 1857 (art. 2º, frac. 633, declaró que las islas y playas, puertos, radas, ensenadas, bahías, vados, ríos, lagunas, etc., eran de la propiedad de la Nación, sin perjuicio de observarse las leyes vigentes respecto al uso que á los particulares les estuviere permitido hacer de esos bienes.

En vista de tan explícitas y reiteradas disposiciones, no parece que pueda sostenerse la validez de concesiones de terrenos pertenecientes á la zona marítima que se hubieren hecho por los Ayuntamientos de los puertos; mas como es seguro que los poseedores de esos terrenos se opondrán al procedimiento administrativo que contra ellos se inicie, alegando los títulos de propiedad que creen tener, como ha sucedido ya en Guaymas y en Tuxpam, según consta por las comunicaciones citadas al principio, tal oposición convierte el asunto en contencioso y por lo mismo su resolución es de la competencia de los Tribunales federales.

En este concepto, ya se pasan los expedientes respectivos al Procurador general de la Nación, á fin de que este alto funcionario se sirva proponer lo que deba hacerse en estos negocios que tan directamente afectan los intereses públicos.

Hoy se manda publicar el presente oficio en el *Diario Oficial* para conocimiento de los empleados federales que necesitan tener á la vista las disposiciones vigentes sobre la materia, y por acuerdo del Presidente de la República tengo la honra de comunicarlo á Ud. en respuesta á sus referidas notas.

Libertad y Constitución. México, Febrero 20 de 1890.
—P. a. d. S.—I. M^o Escudero.—Rúbrica.

LEY de 14 de Mayo de 1901.—Prohibición de que las corporaciones religiosas y las civiles colocadas bajo la dirección de ministros de algún culto, adquieran ó administren bienes raíces.

Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación.
—México.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DIAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

Que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido á bien decretar lo siguiente:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el art. 127 de la Constitución Federal, y previa la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los Estados, declara reformada la última parte del art. 27 de la misma Constitución, en estos términos:

Art. 27.....

Las corporaciones é instituciones religiosas, cualesquiera que sea su carácter, denominación, duración ú objeto, y las civiles cuando estén bajo el patronato, dirección ó administración de aquellas ó de ministros de algún culto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar más bienes raíces que los edificios que se destinen inmediata y directamente al servicio ú objeto de dichas corporaciones ó instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir ó administrar capitales impuestos sobre bienes raíces.

Las corporaciones é instituciones civiles que no se encuentren en el caso expresado, podrán adquirir y administrar, además de los referidos edificios, los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requieren para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción á los requisitos y limitaciones que establezca la ley federal que al efecto expida el Congreso de la Unión,

México, á 24 de Abril de 1901.—*José López Portillo y Rojas*, Diputado por el Estado de Nuevo León, Presidente.—*J. de Teresa Miranda*, Senador por el Estado de Yucatán, Presidente.—*M. Leri*, Diputado por el Estado de Veracruz-Llave, Vice-Presidente.—*José Ramos*, Senador por el Estado de San Luis Potosí, Vice-Presidente.—Siguen las firmas de los demás señores Diputados y Senadores.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, á 14 de Mayo de 1901.—*Porfirio Díaz*.—Al C. General Manuel González Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presidente."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Mayo 14 de 1901.—*González Cosío*.—Al.....

EJIDOS DE LOS PUEBLOS

FUNDO LEGAL.

El fundo legal nació de la Ordenanza de 26 de Mayo de 1567, dictada por el Marqués de Falces, Conde de Santisteban, Virrey de Nueva España, concediéndoles á los pueblos de indios, 500 varas de terreno por los cuatro vientos, conforme á las leyes 12 y 18, Título 12, Libro 4º de la Recopilación de Indias. Después se aumentó el número de varas á 600 (502 metros 8 decímetros), contadas desde los últimos linderos ó casas del lugar; pero en 1695, Fernando VI, por su cédula de 12 de Julio y con motivo de un litigio, declaró que se debía contar el número de varas desde el atrio de la iglesia principal.

Estas y las otras disposiciones, posteriormente acordadas para el fundo de los pueblos, son el fundamento legal de la existencia y aplicación de esas porciones de terreno que viene á constituir el ámbito de cada pueblo, y que, por consiguiente, bajo el punto de vista territorial, es el mismo pueblo, difiriendo, por tanto, esencialmente de las porciones de tierras que se nombran ejidos. Fácilmente se comprende, atentas todas estas indicaciones, que ninguna ley antigua ni moderna ha querido autorizar el fraccionamiento y venta del fundo legal, porque esto sería absurdo.

México, á 24 de Abril de 1901.—*José López Portillo y Rojas*, Diputado por el Estado de Nuevo León, Presidente.—*J. de Teresa Miranda*, Senador por el Estado de Yucatán, Presidente.—*M. Leri*, Diputado por el Estado de Veracruz-Llave, Vice-Presidente.—*José Ramos*, Senador por el Estado de San Luis Potosí, Vice-Presidente.—Siguen las firmas de los demás señores Diputados y Senadores.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de México, á 14 de Mayo de 1901.—*Porfirio Díaz*.—Al C. General Manuel González Cosío, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.—Presidente."

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Mayo 14 de 1901.—*González Cosío*.—Al.....

EJIDOS DE LOS PUEBLOS

FUNDO LEGAL.

El fundo legal nació de la Ordenanza de 26 de Mayo de 1567, dictada por el Marqués de Falces, Conde de Santisteban, Virrey de Nueva España, concediéndoles á los pueblos de indios, 500 varas de terreno por los cuatro vientos, conforme á las leyes 12 y 18, Título 12, Libro 4º de la Recopilación de Indias. Después se aumentó el número de varas á 600 (502 metros 8 decímetros), contadas desde los últimos linderos ó casas del lugar; pero en 1695, Fernando VI, por su cédula de 12 de Julio y con motivo de un litigio, declaró que se debía contar el número de varas desde el atrio de la iglesia principal.

Estas y las otras disposiciones, posteriormente acordadas para el fundo de los pueblos, son el fundamento legal de la existencia y aplicación de esas porciones de terreno que viene á constituir el ámbito de cada pueblo, y que, por consiguiente, bajo el punto de vista territorial, es el mismo pueblo, difiriendo, por tanto, esencialmente de las porciones de tierras que se nombran ejidos. Fácilmente se comprende, atentas todas estas indicaciones, que ninguna ley antigua ni moderna ha querido autorizar el fraccionamiento y venta del fundo legal, porque esto sería absurdo.

EJIDOS.

Una real cédula de 1.^o de Diciembre de 1573, dispuso que los sitios destinados á la erección de pueblos ó reducciones de indios, tuvierañ aguas, tierras y montes y un ejido de una legua (4,190 metros) de largo donde pudieran tener sus ganados, cuya disposición fué reproducida el 15 de Octubre de 1713.

Como se ve, la diferencia de los ejidos, respecto del fundo legal, consiste principalmente, en que éste es el mismo pueblo, y aquéllos son para los usos comunes del pueblo.

Ahora bien: los ejidos, aunque fueron exceptuados de la desamortización por el art. 8.^o de la ley de 25 de Junio de 1856, ratificada por la ley de 28 del propio mes, como quiera que en el segundo párrafo del art. 27 de la Constitución federal, promulgada el 5 de Febrero de 1857 y que comenzó á regir el 16 de Septiembre del mismo año, se prohibió la adquisición ó administración de bienes raíces á las corporaciones civiles ó eclesiásticas, sin más excepción que los edificios destinados inmediata y directamente al servicio ú objeto de la institución, quedó abrogada la indicada salvedad del art. 8.^o, y de ahí la necesidad de que para dar cumplimiento á este precepto constitucional, se haya tenido que proceder á que los ejidos dejen de existir.

Mas para llevar esto á efecto de un modo justo y legal, hubo de discurrirse sobre la adopción de medidas adecuadas á tal proposito.

Tuvo sin duda el Gobierno Federal, para estimar de su competencia el proveer en el asunto, varias consideraciones.

Los ejidos, como se ha visto, fueron excluidos por las leyes de desamortización; pero atento el aludido precepto constitucional, lógico era deducir que los ejidos pasaban al poder del Erario federal como subrogatorio de

bienes de corporaciones, y con tanta más razón, cuanto que recordando la procedencia de los ejidos, una vez que su subsistencia fué imposible, nada más natural y consecuente que el que esos terrenos volviesen al dominio del que los concedió para el uso común de los vecinos de las poblaciones.

Mas esto no obstante, como ya se indicó, el Gobierno Federal deseando conciliar el acatamiento de la suprema ley con el interés de esos pueblos, proveyó á la solución del punto, dictando disposiciones encaminadas á ese fin y al de evitar denuncias improcedentes, pues aunque se establece de un modo claro en el art. 1.^o de la ley de 22 de Julio de 1863, que no son baldíos los terrenos que hayan sido destinados á un uso público, en cuyo caso se encuentran los ejidos, no han dejado de suscitarse cuestiones á este respecto. Así pues, se resolvió que se practicasen las operaciones de señalamiento y mensura del fundo y ejidos de cada población, de acuerdo con las leyes que se hubiesen dado sobre ese punto en el respectivo Estado antes de promulgarse la Constitución federal y si no las hubiese, conforme á las disposiciones antiguas que no han sido derogadas (como por ejemplo la real Ordenanza de 26 de Mayo de 1567, real cédula de 4 de Junio de 1687, real cédula de 12 de Julio de 1695, y real instrucción de 15 de Octubre de 1751), asignándose en este caso para el fundo legal de cada pueblo, las dimensiones designadas de 1,200 varas de antigua medida ó 1,005 metros, 6 decímetros del sistema legal por lado del cuadrado que se había de formar y cuyo centro sería el mismo de la población, si esto era posible: que respecto de los ejidos en donde hubiese baldíos bastantes para el objeto, tendrían la extensión á lo más de una legua cuadrada ó 1,755 hectaras 61 aras, quedando comprendido dentro de dicha legua el fundo legal, respetándose, al hacer el señalamiento, las propiedades legalmente adquiridas; y que para dar el debido cumplimiento al precepto constitucional que niega á las corporaciones capacidad legal para adquirir y administrar bienes raíces,

una vez que se hiciese el señalamiento del fundo legal, y separada que fuese la porción destinada á panteones y demás usos públicos, el resto sería fraccionado y repartido entre los padres y cabezas de familia.

Así se ha verificado, extendiéndose gratis por la Secretaría de Fomento, títulos firmados por el Presidente de la República á favor de esos vecinos de los pueblos, todo lo cual viene probando que el Gobierno Federal, y no los Ayuntamientos ni otra autoridad, es el que, como competente en la materia, concede graciosamente la parte disponible de los antiguos ejidos.

Disposiciones sobre ejidos.

RESOLUCIÓN de 20 de Agosto de 1867.—Se manda adjudicar terrenos á los pueblos de Navajón y de Tesia.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1^a.—Habiendo dado cuenta al C. Presidente con la comunicación de Ud., fecha 6 de Febrero del presente año, y con el expediente que la acompaña, relativo á las diligencias y práctica de medida del terreno situado en el punto de "Choaroa" y adjudicado como baldío al C. Manuel Moreno, é impuesto de todo el Supremo Magistrado, y tomando en consideración el informe de esa Jefatura, se ha servido acordar que, con el objeto de asegurar la paz en el Distrito de Alamos, y de que la clase indígena dedicada á la agricultura deponga su carácter y costumbres, quedando asignados su bienestar y subsistencia, se adjudique al pueblo de Navajón cuatro leguas cuadradas de terreno, cuya extensión se dividirá entre sus habitantes, procurando que la división se haga lo más equitativamente que sea posible, atendiendo al número de personas que componen cada familia, y dando al terreno una figura regular, sujetándose, hasta donde lo permita su estado actual, á la concesión primitiva.

Igual concesión se hace al pueblo de Tesia, siempre que haya sido público y notorio que sus habitantes han disfrutado de la misma extensión de terreno, pues de lo contrario se dividirá entre ellos aquel que hubiesen poseído, sin exceder de las cuatro leguas cuadradas.

En consecuencia, se procederá desde luego al deslinde y medida del terreno, debiendo practicar estas operaciones persona apta, y con arreglo á lo prevenido por la ley relativa á las medidas de tierras y aguas de 2 de Agosto de 1863.

Concluidas dichas diligencias, remitirá esa Jefatura al Ministerio copia de ellas y del plano respectivo.

Del terreno que resultase baldío después de haber deslindado el de los pueblos citados, se adjudicarán los cuatro sitios al C. Antonio Rincón, á quien se ha considerado con mejor derecho, según lo comunicará á los interesados el C. Gobernador del Estado, quedando entendido el C. Rincón de que se deberá volver á medir el terreno que se le adjudica, por haber sido defectuosa la medida que se practicó al entregarlo al C. Manuel Moreno; siguiéndose en todo, lo que previenen las leyes sobre la enajenación de baldíos y medidas de tierras y aguas de 20 de Julio de 1863 y 2 de Agosto del mismo año.

Lo que comunico á Ud. para su inteligencia y cumplimiento.—Libertad y Constitución. México, 28 de Agosto de 1867.—*Balcárcel*.—C. Jefe Político del Distrito de Alamos en Sonora.—Alamos.

RESOLUCIÓN de 13 de Octubre de 1869.—Manera de medir el fundo legal y el ejido cuando no haya terreno suficiente por alguno de los puntos cardinales.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1^a.—El C. Ministro de Gobernación trascribió á esta Secretaría la comunicación que le dirigió Ud. con fecha 10 de Julio último acompañando los documentos presentados por el Ayuntamiento de la

una vez que se hiciese el señalamiento del fundo legal, y separada que fuese la porción destinada á panteones y demás usos públicos, el resto sería fraccionado y repartido entre los padres y cabezas de familia.

Así se ha verificado, extendiéndose gratis por la Secretaría de Fomento, títulos firmados por el Presidente de la República á favor de esos vecinos de los pueblos, todo lo cual viene probando que el Gobierno Federal, y no los Ayuntamientos ni otra autoridad, es el que, como competente en la materia, concede graciosamente la parte disponible de los antiguos ejidos.

Disposiciones sobre ejidos.

RESOLUCIÓN de 20 de Agosto de 1867.—Se manda adjudicar terrenos á los pueblos de Navajón y de Tesia.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1^a.—Habiendo dado cuenta al C. Presidente con la comunicación de Ud., fecha 6 de Febrero del presente año, y con el expediente que la acompaña, relativo á las diligencias y práctica de medida del terreno situado en el punto de "Choaroa" y adjudicado como baldío al C. Manuel Moreno, é impuesto de todo el Supremo Magistrado, y tomando en consideración el informe de esa Jefatura, se ha servido acordar que, con el objeto de asegurar la paz en el Distrito de Alamos, y de que la clase indígena dedicada á la agricultura deponga su carácter y costumbres, quedando asignados su bienestar y subsistencia, se adjudique al pueblo de Navajón cuatro leguas cuadradas de terreno, cuya extensión se dividirá entre sus habitantes, procurando que la división se haga lo más equitativamente que sea posible, atendiendo al número de personas que componen cada familia, y dando al terreno una figura regular, sujetándose, hasta donde lo permita su estado actual, á la concesión primitiva.

Igual concesión se hace al pueblo de Tesia, siempre que haya sido público y notorio que sus habitantes han disfrutado de la misma extensión de terreno, pues de lo contrario se dividirá entre ellos aquel que hubiesen poseído, sin exceder de las cuatro leguas cuadradas.

En consecuencia, se procederá desde luego al deslinde y medida del terreno, debiendo practicar estas operaciones persona apta, y con arreglo á lo prevenido por la ley relativa á las medidas de tierras y aguas de 2 de Agosto de 1863.

Concluidas dichas diligencias, remitirá esa Jefatura al Ministerio copia de ellas y del plano respectivo.

Del terreno que resultase baldío después de haber deslindado el de los pueblos citados, se adjudicarán los cuatro sitios al C. Antonio Rincón, á quien se ha considerado con mejor derecho, según lo comunicará á los interesados el C. Gobernador del Estado, quedando entendido el C. Rincón de que se deberá volver á medir el terreno que se le adjudica, por haber sido defectuosa la medida que se practicó al entregarlo al C. Manuel Moreno; siguiéndose en todo, lo que previenen las leyes sobre la enajenación de baldíos y medidas de tierras y aguas de 20 de Julio de 1863 y 2 de Agosto del mismo año.

Lo que comunico á Ud. para su inteligencia y cumplimiento.—Libertad y Constitución. México, 28 de Agosto de 1867.—*Balcárcel*.—C. Jefe Político del Distrito de Alamos en Sonora.—Alamos.

RESOLUCIÓN de 13 de Octubre de 1869.—Manera de medir el fundo legal y el ejido cuando no haya terreno suficiente por alguno de los puntos cardinales.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1^a.—El C. Ministro de Gobernación trascribió á esta Secretaría la comunicación que le dirigió Ud. con fecha 10 de Julio último acompañando los documentos presentados por el Ayuntamiento de la

Paz con motivo del denunció hecho por los CC. Manuel G. Mancilla y Modesto Arriola de un terreno comprendido en los ejidos de aquella población, manifestando usted, en dicha comunicación, que en su concepto no es admisible el denunció, porque el terreno fué destinado para ejidos de la población por el Gobierno de ese Territorio, de la manera más solemne y eficaz que estuvo á su alcance, y exponiendo que se originarian graves males á esa población, lo mismo que á las demás del Territorio que se hallan en igual caso, si se llevara á cabo la adjudicación; por lo que pide Ud. al Supremo Gobierno que dicte una resolución general que evite los perjuicios que de otro modo se seguirían á aquellas poblaciones.

Y habiendo dado cuenta al C. Presidente de la República de la comunicación citada, así como de los documentos que vinieron adjuntos; impuestos de ellos, ha tenido á bien acordar se diga á Ud., que el Gobierno no puede aprobar la designación de terrenos para fundo legal y ejidos hecha por la Junta formada en esa ciudad el 2 de Octubre de 1861, porque dicha Junta carecía de facultades legales para hacer esa designación; pero que atendiendo á los inconvenientes que habría para las poblaciones de ese Territorio y á los perjuicios que les resultarían de no tener los terrenos necesarios para el fundo legal y ejidos, dispone que con sujeción á lo que previenen las leyes vigentes, se haga la designación de fundo legal y ejidos en cada una de las poblaciones de la Península, para lo cual se medirá del centro de cada población y en la dirección de cada uno de los puntos cardinales, la extensión de seiscientas varas mexicanas ó quinientos dos metros, ocho decímetros, y que en el caso de que por la situación del pueblo ó por la falta de terrenos no sea posible medir dicha extensión del modo expresado, se formará una figura que tenga una superficie igual á la de un cuadrado de mil doscientas varas, ó mil cinco metros seis decímetros por lado, cuya extensión se tomará de los terrenos baldíos y formará el fundo legal del pueblo. Y que para los ejidos se hará la medición de ellos del

mismo modo, siendo la extensión de las líneas por cada rumbo de media legua mexicana, ó dos kilómetros y noventa y cinco metros contados desde el centro de la población, formándose, en el caso de que no hubiere terrenos baldíos suficientes para dar la figura indicada, otra equivalente en superficie á la de un cuadrado que tenga una legua ó cuatro kilómetros y ciento noventa metros por lado. Dispone asimismo el C. Presidente se diga á usted que en las poblaciones que se hallen á la orilla del mar, deberá tener presente la disposición relativa, que previene se deje libre una zona de playa de veinte varas cuadradas desde la orilla del agua en la pleamar. Por último, el C. Presidente ha creído también conveniente que se recuerde á los Ayuntamientos de ese Territorio, que los terrenos que concedan las leyes para ejidos de las poblaciones, se hallan destinados exclusivamente para el servicio público de ellas, sin que se entienda que puedan aplicarse á otros objetos si no es á aquellos de utilidad pública.

Independencia y Libertad. México, 13 de Octubre de 1869.—*Balcárcel*.—Al Jefe Político del Territorio de Baja California.—La Paz.

RESOLUCIÓN de 10 de Diciembre de 1870.—Se previene que en el Estado de Yucatán se dividan los ejidos en lotes y se adjudiquen á los padres de familias.

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1ª.—Manifiesta Ud. á esta Secretaría en su nota fecha 13 de Julio último, las razones que hay para sujetarse, al señalar las dimensiones de los ejidos de las poblaciones de ese Estado, á lo que sobre ese punto dispone la ley particular del mismo, de 8 de Octubre de 1844, la cual ordena que dichos ejidos se extiendan á cinco mil varas castellanas por cada viento cardinal, medidas desde el atrio de la iglesia principal de cada pueblo, respetando los terrenos

de propiedad particular que en ellos se encuentren. Con este objeto expone Ud., que la expresada ley fué expedida por la Asamblea Legislativa de ese Estado, cuando residían en ella facultades necesarias para legislar sobre terrenos baldíos, una vez que no estaba vigente aún la Constitución de 1857, la cual dispuso que este asunto fuera del resorte de los Poderes federales; que además de esto, el Gobierno de la Unión ha reconocido la subsistencia de la mencionada ley, pues en distintas ocasiones, y hallándose investido de facultades extraordinarias, ha dictado resoluciones, mandando por el señalamiento de ejidos en las poblaciones de ese Estado se hiciera de acuerdo con las prevenciones contenidas en aquella, y que por último, en varios pueblos se ha procedido ya en los términos de la referida ley, dando á los ejidos las dimensiones que ésta indica habiéndose practicado con anterioridad la mensura y deslinde correspondientes.

En vista de estas razones, el C. Presidente de la República ha tenido á bien acordar se diga á Ud., que seguirá vigente en ese Estado su ley particular de 8 de Octubre de 1844; pero que negando el art. 27 de la Constitución la facultad legal á toda corporación civil para adquirir y administrar bienes raíces, los pueblos de ese Estado no pueden poseer ni explotar en común las cuatro leguas cuadradas que para ejidos señala la ley de que se ha hecho mención.

Para conciliar, pues, las prevenciones de ésta con las de la Constitución general de la República, el C. Presidente ha tenido á bien disponer, que dentro de las cuatro leguas cuadradas correspondientes á los ejidos de cada población, se señale el fundo legal de ésta en la forma de un cuadro de mil doscientas varas por lado, y cuyo centro sea el mismo de la población. Separado el fundo y los terrenos que, no siendo cultivables, se destinen al establecimiento de panteones, hospitales, rastros y cualquiera otro objeto de uso público en cada población, el resto hasta completar las cuatro leguas cuadradas de que se trata, se dividirán en lotes que se adjudicarán en pro-

riedad á los padres ó cabezas de familias, remitiendo á este Ministerio un croquis de los terrenos divididos y la lista nominal de las personas entre quienes se distribuyan, con el objeto de que por esta Secretaría se expidan los títulos de propiedad correspondientes.

Independencia y Libertad. México, Diciembre 10 de 1870.—*Balcárcel*.—Al Gobernador del Estado de Yucatán.—Mérida.

RESOLUCIÓN de 26 de Marzo de 1878.—Se manda que en el Estado de Chiapas se fraccionen los ejidos en lotes para adjudicarlos á los padres ó cabezas de familia.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—Sección de Terrenos Baldíos.—Dada cuenta al Presidente de la República con el informe del Oficial encargado de la Sección de baldíos de esta Secretaría, relativo á siete expedientes del Estado de Chiapas, que existían, la mayor parte, en el archivo de dicha Sección desde antes de encargarse de ella el nuevo personal que la desempeña, cuyos expedientes, aunque sobre diversos negocios, contienen todos substancialmente la misma consulta del Gobierno y autoridades del referido Estado, sobre las graves dificultades que en el mismo á cada paso se ofrecen referentes á terrenos baldíos ó poseídos con buena fe por individuos pobres de la raza indígena, ó por los llamados ladinos, cuyos terrenos pueden ser denunciados contra justicia y conveniencia pública, conforme á la ley general vigente de 22 de Julio de 1863, por no estar titulados y dificultarse su titulación; así como los inconvenientes y perjuicios de otra especie que trae para las poblaciones la cuestión no definida y referente á los terrenos señalados ó por señalar, con el carácter de ejidos de las citadas poblaciones, conforme á las leyes particulares y vigentes en ese Estado, con anterioridad á la general de 22 de Julio de 1863, que suspendió el efecto de aquellas y dejó indeciso su derecho á tales terrenos, los que también pueden, contra la conveniencia pública,

ser denunciados por particulares sin derecho alguno; y concretando estas cuestiones á los cinco puntos de consulta que abrazan la solución de todas las propuestas dificultades y que fueron dirigidas á esta Secretaría por el Gobierno de Chiapas, según consta de los predichos expedientes, el Presidente de la República, en virtud de todo esto, se ha servido acordar, que:

I. Por disposición suprema se resuelve que, en el Estado de Chiapas, todos los terrenos asignados á sus pueblos por las leyes particulares de dicho Estado, anteriores á la general de 22 de Julio de 1863, con el carácter de ejidos, ó al menos que con tal carácter les hayan sido mensurados, deben ser divididos en lotes, ó iguales ó equivalentes á las distintas suertes de terreno que hayan sido trabajadas y cultivadas (según las circunstancias de cada caso particular), entre los indígenas y ladinos pobres, padres ó cabezas de familias de los respectivos pueblos, conforme á las prescripciones y bases que más abajo se prescribirán.

II. En los restantes pueblos que, conforme á las precitadas leyes del propio Estado, no tengan aún designados ó siquiera mensurados sus respectivos ejidos, se les podrá mensurar y designar conforme á las referidas leyes, fraccionándolos inmediatamente con arreglo á lo anteriormente prevenido.

III. Todo terreno que, conforme á las fracciones anteriores, se adjudique en lote á un padre ó cabeza de familia, no podrá ser enajenado por éste en el término de ocho años, á contar desde la fecha en que se le expida por esta Secretaría su título de adjudicación.

IV. El fraccionamiento de que hablan las fracciones I y II de esta suprema disposición, se practicará por un agrimensor ó perito, designado al efecto por el Gobierno del Estado y con asistencia del síndico ó comisionado designado por el Ayuntamiento á que pertenezca el pueblo cuyo ejido se fracciona; cuyo perito ó agrimensor levantará mapa del fraccionamiento en lotes, determinando en el número de cada lote el nombre del indivi-

duo á quien se adjudica y la colindancia general de todo el ejido adjudicado, así como el número de hectáreas general y de la superficie de cada lote; citando para la operación á los colindantes é interesados en ella, y mandando una copia del dicho mapa por conducto del Gobierno del Estado y con su informe á esta Secretaría, para que, siendo de su aprobación, se expida el título de cada lote; quedando otra copia del mismo plano en el archivo del Gobierno del Estado; y pudiendo darse copia también al Ayuntamiento respectivo y á los interesados, si lo pidieren y pagaren.

Mas como la ley del timbre de 28 de Marzo de 1876 previene no se expida título sin los timbres respectivos cancelados, y para que esta Secretaría los pueda poner y cancelar en los que expida por lotes de fraccionamiento, el Gobernador del Estado cuidará porque cada padre de familia interesado pague el importe del título que se le ha de expedir como lo dispone la tarifa de la dicha ley, palabra «Título de tierras,» ó «Escritura pública,» donde se previene que, considerando el valor del terreno, por cada cien pesos y por la fracción menor de cien pesos, se ponga una estampilla de diez centavos, además de la de cincuenta que debe llevar la hoja del título. Siendo de advertir que para valuar ó apreciar el valor de cada lote, se atenderá al precio de la tarifa vigente al tiempo de hacerse el fraccionamiento.

En la actualidad lo es la de 1^o de Enero de 1872, que asigna á cada hectárea de baldíos de ese Estado el valor de veinticinco centavos.

V. Se declara otra vez vigente, en sólo el Estado de Chiapas, por el solo término de un año (á contar desde la fecha en que esta Secretaría reciba contestación de enterado de esta suprema disposición), la circular de 30 de Septiembre de 1867, teniéndose en cuenta la prevención de la circular de 20 de Mayo de 1869, á fin de que cada trimestre se remita de ese Estado, á la Sección de Baldíos de esta Secretaría, la noticia á que se refiere dicha circular.

Todo lo que, de orden suprema, digo á Ud. para los efectos correspondientes, como resultado de las consultas que el Gobierno de su digno cargo ha dirigido sobre la materia á esta Secretaría de Fomento.

Libertad y Constitución. México, Marzo 26 de 1878.—
Riva Palacio.—Al Gobernador del Estado de Chiapas.
 San Cristóbal las Casas.

RESOLUCIÓN de 16 de Noviembre de 1880.—Se ordena el señalamiento de fundo legal para los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo, en el Estado de Sonora, el repartimiento de los baldíos que estuvieren ocupando los indios.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1.^a—Núm. 904.

En comunicaciones que el Prefecto del Distrito de Alamos dirigió á esta Secretaría en 3 de Junio y 20 de Septiembre últimos, expuso la conveniencia de que se continuase la mensura de los terrenos poseídos por los indígenas de Navajoa y Tesia, haciéndoseles el repartimiento consiguiente, y proponiendo, á la vez, que esta disposición se hiciera extensiva al pueblo de Cuirimpó y á los demás de los ríos Yaqui y Mayo; y el Presidente de la República, á quien se dió cuenta de este asunto, ha tenido á bien acordar, que por conducto de ese Gobierno, del digno cargo de Ud. se diga al referido Prefecto, que en vista de las razones que ha expuesto en sus citadas comunicaciones y de lo que se dispuso en la resolución suprema de 28 de Agosto de 1867, de la cual remito á Ud. copia; atendiendo por otra parte á que no han sido derogadas las disposiciones de las leyes antiguas sobre extensión de terrenos para fundación de poblaciones, y á que en diversas épocas se han dado circulares para que se expidan á los indios, gratuitamente, los títulos de propiedad de los terrenos baldíos que estuvieren ocupando, se continúen las medidas de los terrenos concedidos á los pueblos de Navajoa y Tesia, conforme á lo que dispuso

la resolución citada de 28 de Agosto de 1867; y por lo que respecta á los demás pueblos de indios de los ríos Yaqui y Mayo, se proceda en todos ellos al señalamiento del fundo legal, que lo formará un cuadrado de mil doscientas varas, ó mil ciento cinco metros seis decímetros por lado, dentro de cuya figura se darán solares para la construcción de casas, procurándose la regularidad para la formación del pueblo.

Que el resto de los terrenos baldíos que ocuparen los indios, se les distribuirá en lotes, de la manera que se juzgue más equitativa y sin que exceda la extensión total de cada pueblo, de cuatro leguas cuadradas.

Y en cumplimiento del acuerdo citado, tengo el honor de comunicarlo á Ud. para los efectos que se expresan.

Libertad y Constitución. México, Noviembre 16 de 1880.—
M. Fernández, Oficial Mayor.—Al Gobernador del Estado de Sonora.—Hermosillo.

RESOLUCIÓN de 7 de Enero de 1882.—Se hace extensiva al pueblo de Batacora la Resolución de 16 de Noviembre de 1880.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—Sección 1.^a—Núm. 1,644.

En comunicación de esta fecha se dice por esta Secretaría al C. Bernardo Oviedo, Diputado por el Distrito de Alamos, de ese Estado, lo siguiente:

«El Presidente de la República, á quien di cuenta con el ocurso que con autorización del Gobernador de Sonora presentó Ud. á esta Secretaría con fecha 31 del próximo pasado Diciembre, como Diputado representante de dicho Estado, pidiendo se haga extensiva al pueblo de Batacora la resolución dictada en 16 de Noviembre de 1880 sobre señalamiento de fundo legal á los pueblos de indios de los ríos Yaqui y Mayo, ha tenido á bien acordar, que en atención á que dicho pueblo de Batacora se encuentra en las mismas circunstancias que los pueblos de los expresados ríos, y á que no han sido derogadas las dis-

posiciones de las leyes antiguas sobre extensión de terrenos para fundación de poblaciones, dándose también en diversas épocas, circulares para que se expidan á los indios, gratuitamente, los títulos de propiedad de los terrenos baldíos que estuvieren ocupando, se acceda á la mencionada solicitud, pudiéndose, en consecuencia, proceder al señalamiento del fundo legal del referido pueblo de Batacora, que lo formará un cuadrado de 1,200 varas ó 1,105 metros 6 decímetros por lado, dentro de cuya figura se darán solares para la construcción de casas, procurando la regularidad en la construcción del pueblo, y que el resto de los terrenos baldíos que ocuparen los indios, se les distribuya en lotes, de la manera que se juzgue más equitativa, y sin que exceda la extensión total de cuatro leguas cuadradas.

Lo que comunico á Ud. como resultado de su instancia ya citada, advirtiéndole que con esta misma fecha se da conocimiento de esta resolución al Gobernador del Estado de Sonora, para los efectos consiguientes.

Y tengo la honra de transcribirlo á Ud. para su conocimiento y efectos consiguientes: recomendándole se sirva comunicar á esta Secretaría el resultado del asunto.

Libertad y Constitución. México, Enero 7 de 1882.—
P. o. d. S., M. Fernández, Oficial Mayor.—Al Gobernador del Estado de Sonora.—Hermosillo.

RESOLUCIÓN de 17 de Noviembre de 1885.—Se declara que tanto los indios yaquis como los demás que se presenten deben participar en sus respectivos pueblos, del fraccionamiento de los ejidos y de los baldíos.

Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—México.—Sección 1ª—Departamento de Terrenos Baldíos.—Núm. 3,276.

Impuesto el Presidente de la República de la comunicación de Ud., de fecha 30 de Septiembre último, en la que se sirve transcribir la que en 26 del mismo le dirigió el General en Jefe de la 1ª Zona Militar, insertando

la orden del Secretario de Guerra y Marina, relativa á que se den á los indios yaquis, que se han presentado con sus familias, los terrenos necesarios; el mismo Primer Magistrado ha tenido á bien acordar se diga á Ud.: que las disposiciones antiguas y las que últimamente acordó el Gobierno en 7 de Enero de 1882 para favorecer á los indígenas y vecinos de los pueblos de ese Estado, proveen perfectamente al objeto de asignarles terrenos á los indios yaquis y á los de los demás pueblos, y que, por consiguiente, los presentados pueden ser enviados al pueblo á que pertenecen, para que participen del fraccionamiento de los respectivos ejidos.

Libertad y Constitución. México, Noviembre 17 de 1885.—
Pachecho.—Al Gobernador del Estado de Sonora.—Hermosillo.

RESOLUCIÓN de 30 de Agosto de 1883.—Se previene que á las operaciones de fraccionamiento de sobrante de ejidos asista el Juez de Distrito ó la autoridad en quien delegue sus facultades.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1ª—Departamento de Terrenos Baldíos.—Circular.

El Presidente de la República se ha servido acordar que, cuando se practiquen operaciones de fraccionamiento del sobrante de los ejidos, con el objeto de repartir ese sobrante entre los vecinos de los pueblos en lotes proporcionales, y según las disposiciones dadas al efecto, la autoridad política local y el Ayuntamiento del respectivo pueblo avisen al Juez de Distrito del Estado á que pertenezca el propio pueblo, para que dicho Juez pueda encargarse á la autoridad judicial residente en el lugar en que se van á verificar las indicadas operaciones, ó á falta de ésta, á la que se encuentre más inmediata, concurra á ellas para darles la debida solemnidad y conocer desde luego de las primeras diligencias, á la vez que ha-

ya oposición ú otro incidente atendible y de su competencia.

Lo que comunico á Ud. por disposición del C. Presidente, para su conocimiento, y á fin de que se sirva hacer las prevenciones conducentes á la aplicación del presente acuerdo.

Libertad y Constitución, México, Agosto 30 de 1888.
—Pacheco.—Al Gobernador del Estado de.....

CIRCULAR de 28 de Octubre de 1889.—Se ordena que el fraccionamiento de ejidos, asignación de lotes resultantes y entrega de títulos sean presididos por la autoridad política local.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1.^a.—Departamento de Terrenos baldíos.—Circular.—Al ponerse en práctica la prohibición que contiene el segundo párrafo del art. 27 de la Constitución Federal, relativamente á que las corporaciones civiles no adquieran ó administren por sí bienes raíces, se ha cuidado de que los pueblos no sufran perjuicio alguno á consecuencia de la supresión de la existencia de los ejidos, sino que antes bien, por el contrario, esa supresión ceda en beneficio de sus vecinos, fraccionando y distribuyendo entre los padres ó cabezas de familia los terrenos resultantes de los mismos ejidos, después de separado el fondo legal y la porción destinada á panteones, paseos y demás usos públicos.

Así pues, las providencias dictadas con tal propósito, á la vez que se han dirigido á que tenga el debido cumplimiento el precepto constitucional y á que no se desconozcan los derechos consignados por leyes anteriores en materia de ejidos, han dispuesto que éstos se conviertan en un medio por el que los habitantes pobres de las poblaciones adquieran gratuitamente una propiedad raíz, con que puedan subsistir á su subsistencia y procurarse un próspero porvenir.

Estos importantes y provechosos fines se verán en mucha parte frustrados, si como se le ha manifestado á esta Secretaría, tanto en el fraccionamiento como en la asignación de lotes, y muy especialmente en la entrega de los títulos que expide el Gobierno, no hay la necesaria imparcialidad y pureza, sino que dando cabida á las preferencias arbitrarias y hasta á una injustificable especulación, se han venido introduciendo abusos de tal tamaño, que no pocas veces dejan sin participio en el reparto de los terrenos ó sin la porción que les corresponde, á los que tienen acción á ser considerados.

Para precaver estos punibles procedimientos, el Presidente de la República á tenido á bien acordar llame sobre ellos la atención de Ud., con el objeto de que, como es de esperarse de su reconocida protección hacia los pueblos de ese Estado, se sirva dar sus disposiciones, para que en los actos de repartimiento y entrega de títulos de que se ha hecho mención, haya una eficaz vigilancia, concorra á ellos la autoridad política de la jurisdicción á que corresponda el pueblo de que se trate, de modo que presida en todos esos actos la debida justicia, y produzcan prácticamente los benéficos resultados que quedan indicados.

Libertad y Constitución, México, Octubre 28 de 1889.
—Pacheco.—Al Gobernador del Estado de.....

CIRCULAR de 28 de Octubre de 1889.—Se dispone que en la entrega de títulos relativos á fraccionamientos de sobrante de ejidos interengan los Jueces de Distrito á las autoridades judiciales en quienes deleguen sus funciones.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1.^a.—Departamento de Terrenos Baldíos.—Circular.—Por circular de 30 de Agosto del año próximo pasado, se comunicó á los Gobernadores de los Estados, la disposición acordada por el Presidente de la República, en que se previno que

cuando se practicasen las operaciones de fraccionamiento del sobrante de los ejidos, la autoridad política local y el Ayuntamiento del respectivo pueblo, avisasen al Juez de Distrito del Estado, para que dicho Juez pudiera encargarse á la autoridad judicial residente en el lugar en que se fuesen á verificar las indicadas operaciones, ó á falta de ésta á la que se encontrase más inmediata, concurriese á ellas para darles la debida solemnidad y conocer desde luego de las primeras diligencias, á la vez que hubiese oposición ú otro incidente.

Y como esta providencia, si bien provee á que los procedimientos de deslinde, mensura y designación de lotes, sean expeditos y se ajusten á los términos legales, el acto de entrega de los títulos que expida el Presidente de la República por conducto de esta Secretaría á los vecinos de los pueblos que resultan agraciados á virtud del relacionado fraccionamiento, demanda también una especial solemnidad, y sobre todo, una eficaz vigilancia para que realmente reciba cada uno de esos agraciados su correspondiente título; el mismo Primer Magistrado ha tenido á bien acordar que ese Juzgado tenga intervención en la expresada entrega, concurriendo á ella de la misma manera que para el referido fraccionamiento, esto es, encargando el desempeño de esas funciones á la autoridad judicial que hubiere en el pueblo de que se trató, ó de no haberla, á la que se encuentre más próxima.

Lo que comunico á Ud., esperando de su acreditado celo para el buen servicio público, pondrá de su parte todos los medios oportunos á que en este asunto se obre con entera justificación.

Libertad y Constitución. México, Octubre 28 de 1882.
—Pacheco.—Al Juez de Distrito del Estado de...

CIRCULAR de 28 de Octubre de 1880.—Se excita á los Jefes de Hacienda á que promuevan el fraccionamiento, tanto de los ejidos como de los terrenos de repartimiento y á que concurren por sí ó por delegado al fraccionamiento de los mismos y entrega de los títulos correspondientes.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1.^a Departamento de Terrenos Baldíos.—Circular.—El Presidente de la República en vista de que, si bien es cierto que á virtud de las disposiciones que se han dado para que tengan el debido cumplimiento el precepto que contiene el segundo párrafo del art. 27 de la Constitución federal, los vecinos de varias poblaciones han obtenido ya el beneficio de hacerse propietarios de las porciones de terrenos en que se ha subdividido lo que es repartible de los ejidos, y por las cuales se les han expedido gratuitamente los respectivos títulos, aún quedan algunos pueblos en que no se ha practicado ese reparto de ejidos; y en vista también de que aún subsisten en indiviso otros terrenos llamados de repartimiento procedentes de antiguas concesiones, que no están sujetos á las leyes de desamortización ni á las de baldíos, sino que siendo una verdadera propiedad poseída por los indígenas desde tiempo inmemorial, debe distribuirse entre los que tengan legítimo derecho á ello, para que la disfruten y mejoraren bajo su acción de interés individual; ha tenido á bien acordar el mismo Primer Magistrado, que Ud., con el doble carácter de Jefe de Hacienda de la Federación y de Agente de Fomento, que le dió la suprema resolución de 10 de Enero de 1862, promueva ante las respectivas autoridades locales, ó que se proceda al repartimiento, tanto de los ejidos conforme á las disposiciones dictadas al efecto, como al de los otros relacionados terrenos que estén amparados con justo título, tomando en las operaciones de fraccionamiento, un oportuno y eficaz participio personal, ó por delegación en el empleado, ya sea del ramo de hacienda ó de cualquier otro de la Administración pú-

blica federal, residente ó más cerca al lugar en que se practiquen aquéllas, á fin de evitar se ocupen indevidamente ó se distribuyan terrenos baldíos ó de propiedad nacional; debiendo vigilar llegada su vez, el que la designación de lotes sea proporcional y equitativa entre los que legalmente tengan acción á ella, así como el que la entrega de los correspondientes títulos se haga efectivamente á los agraciados y sin excluir á ninguno de éstos; en la inteligencia de que, para darle la conveniente solemnidad á este importante acto de la entrega de los títulos, ya se dan las disposiciones necesarias para que también lo presencien, tanto la autoridad política como la judicial de la jurisdicción á que corresponda el pueblo de que se trate; debiéndose levantar una acta firmada por el respectivo presidente y secretario del Ayuntamiento y por las autoridades y empleados que tienen que autorizar la repetida entrega de títulos.

Y para que los individuos á cuyo favor se hayan extendido esos títulos tengan anticipado conocimiento de que han sido agraciados con un lote, y no por ignorancia ó engaño, dejan de presentarse á recibir los referidos documentos que los acredita propietarios de los terrenos repartidos, esa Jefatura de Hacienda mandará fijar en cuatro puntos de los más públicos del respectivo pueblo y en la cabecera que corresponda, las listas impresas que esta Secretaría le enviará, del personal á que pertenecían los títulos, y en el caso de que falte alguno ó algunos á la mencionada recepción, promoverá la misma Jefatura de Hacienda, que por medio del Ayuntamiento sean citados fijándoles un plazo prudente para que lo verifiquen, vencido el cual, si no se presentasen, serán devueltos á esta Secretaría los títulos sobrantes, para que se disponga de los terrenos según convenga.

Libertad y Constitución. México, Octubre 28 de 1889.
—Pacheco.—Al Jefe de Hacienda del Estado de.....

INSTRUCCIONES

A LOS JEFEZ DE HACIENDA Y AGENTES DE FOMENTO EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PARA QUE EJERZAN LA CONVENIENTE INQUISICIÓN SOBRE SI HAN RECIBIDO SUS TÍTULOS LOS AGRACIADOS EN EL REPARTO DE LOS EXCEDENTES DE LOS EJIDOS DE LOS PUEBLOS.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1.^a—Departamento de Terrenos Baldíos.—Circular.—Teniendo conocimiento el Gobierno de que en algunos casos no han recibido los terrenos procedentes de ejidos, las personas á cuyo favor se han expedido los títulos, el Presidente de la República dispone proceda Ud., á hacer la averiguación respectiva relativamente á los individuos que constan en la lista nominal que se acompaña, á fin de poner en claro si se han cometido algunos abusos, debiendo al efecto investigar si realmente han tenido lugar y quiénes sean los responsables de ellos, inquiriendo, en caso contrario, cuáles son los poseedores de títulos y terrenos con buen derecho, y si los han transmitido á otras personas quienes son éstas.

Después de los medios prudentes que haya Ud. empleado para lograr el esclarecimiento de los hechos indicados, hará publicar las listas impresas de los agraciados tanto en la cabecera del Distrito de la Municipalidad del pueblo á que corresponda el fraccionamiento, como en los puntos más concurridos del respectivo pueblo, con el objeto de obtener la mayor suma de datos que pongan de manifiesto y sirvan de comprobación de los procedimientos observados en el referido reparto de terrenos, y pueda la superioridad, en vista de ellos, dictar las medidas que sean procedentes y den por resultado que los terrenos que han sido destinados á determinadas personas, vayan á su poder, si ha habido alguna sustracción ú omisión.

El Presidente espera del celo de Ud. que con toda eficacia y empeño procederá en este asunto, pudiendo, en algunas circunstancias en que sea necesario, consultar el gasto indispensable para llenar el expresado fin; mandando si fuere preciso, comisionados especiales para la investigación de los hechos de que se trata, en el mismo lugar en que se han verificado.—Libertad y Constitución. México, Octubre 28 de 1889.—*Pacheco*.—Al Jefe de Hacienda del Estado de.....

CIRCULAR de 12 de Mayo de 1890.—Excitativa á los Gobernadores de los Estados para que reduzcan á propiedad particular los ejidos y terrenos de común repartimiento de los pueblos, declarándose que esta materia es del régimen interior de los Estados.

Prescribe el art. 27 de nuestra Carta Fundamental, que ninguna corporación civil ó eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación ú objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces."

En virtud de precepto tan terminante, es evidente que ni los ejidos, ni los terrenos conocidos con el nombre de "terrenos de común repartimiento," pueden subsistir con las condiciones de dominio en que los más de ellos se encuentran actualmente, y que es un deber de las autoridades respectivas proceder á la conversión de dichos ejidos y terrenos en propiedad privada, librando de toda traba su enajenación.

Mas como ni unos ni otros han perdido su carácter de propiedad de los pueblos y municipios, éstos, al hacerse la conversión, no deben ser despojados de los terrenos, sino que, como se ha practicado en algunas entidades federativas, á quienes este asunto corresponde en sus respectivos territorios, por ser propio de su régimen interior debe acordarse la repartición equitativa de ellos entre los vecinos de los pueblos á que pertenezcan, ó

enajenarse y aplicar sus productos á las arcas municipales ó á algún objeto de utilidad general.

Es inconcuso el deber en que están los altos funcionarios públicos de acatar con toda diligencia y eficacia nuestras leyes fundamentales, y así es de esperarse que, cuanto antes, se proceda en todo el territorio de la República, por los Poderes competentes, según se trate del Gobierno de la Unión ó de los Estados, al cambio de forma de la propiedad mencionada, en términos que no pugnen con el principio constitucional arriba citado.

Por su parte, la Secretaría de Fomento, cuyo celo y actividad en el deslinde y mensura de los terrenos nacionales y su división en propiedad particular son notorios, nunca ha vacilado en favorecer los intereses de los pueblos y municipios, concediéndoles el terreno necesario para su fundo legal y servicios públicos, sin descuidar por esto la división de los terrenos que no tienen el mismo carácter.

En virtud de todo lo expuesto, el Presidente de la República, animado del más patriótico empeño por el fiel cumplimiento de nuestra Constitución política en todas sus prescripciones, é inspirándose en los levantados sentimientos que en favor de la sufrida y laboriosa clase indígena motivaron las circulares de 9, 17 de Octubre de 1856, y 7 de Septiembre de 1859, se ha servido acordar dirija á Ud. la presente, como tengo la honra de hacerlo, llamando su atención sobre tan importante asunto, y recomendándole se sirva tomar las providencias que su reconocida ilustración y respeto á nuestra ley fundamental le dicten, para realizar uno de sus más importantes preceptos en beneficio de los pueblos.

Libertad y Constitución. México, Mayo 12 de 1890.—*Romero Rubio*.—Al Gobernador del Estado de....

CIRCULAR de 9 de Octubre de 1856.—Se declaran exentas de alcabala y de todo derecho las adjudicaciones de terrenos de común repartimiento, cuyo valor no exceda de 200 pesos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—Sección 2.^a—Excmo. señor:

El Excmo. Sr. Presidente ha tenido necesidad de tomar en consideración, que se está abusando de la ignorancia de los labradores pobres, y en especial de los indígenas, para hacerles ver como opuesta á sus intereses la ley de desamortización, cuyo principal objeto fué, por el contrario, el de favorecer á las clases más desvalidas; á lo cual se agrega que gran parte de los arrendatarios de terrenos no han podido adjudicárselos, ó bien por falta de recursos para los gastos necesarios, ó bien por las trabas que les ha puesto la codicia de algunos especuladores, con la mira bien conocida de despojarlos del derecho que los concedió la ley, subrogándose en su lugar luego que pase el tiempo designado en la misma para las adjudicaciones, y del que no les han dejado gozar libremente.

La ley quedaría nulificada en uno de sus principales fines, que es el de la subdivisión de la propiedad rústica, si no se impidiese la consumación de hechos tan reprobados; y con tal fin, así como con el de facilitar á los necesitados la adquisición del dominio directo, dispone el Excmo. Sr. Presidente que todo terreno cuyo valor no pase de 200 pesos, conforme á la base de la ley de 25 de Junio, se adjudique á los respectivos arrendatarios, ya sea que lo tengan como de repartimiento, ya pertenezca á los Ayuntamientos, ó esté de cualquier otro modo sujeto á la desamortización, sin que se les cobre alcabala ni se les obligue á pagar derecho alguno, y sin necesidad tampoco del otorgamiento de la escritura de adjudicación, pues para constituirlos dueños y propietarios en toda forma, de lo que se les venda, bastará el título que les dará la autoridad política, en papel marca-

do con el sello de su oficina, protocolizándose en el archivo de la misma los documentos que se expidan.

Esta disposición sería ineficaz, en caso de que se diese por transcurrido el término de los tres meses fijados para las adjudicaciones, término que no ha pasado para los indígenas y demás labradores menesterosos, á quienes el Supremo Gobierno se propone amparar, puesto que por los motivos ya expresados se han encontrado en una positiva imposibilidad de dar cumplimiento á la ley. Es por lo mismo tan justo como conveniente resolver, y así lo hace el Excmo. Sr. Presidente, que no se verifique ninguna adjudicación ni remate, respecto de los terrenos cuyo valor se ha fijado ya, sino en el caso de que los arrendatarios renuncien expresamente su derecho; previniéndose para evitar todo fraude, que esa renuncia se haga constar precisamente en la escritura que se otorgue á favor de otra persona, y que comprenda el punto de que el que la hace, ha sido previamente impuesto de la ley, del reglamento y de las demás disposiciones dadas en beneficio suyo.

En el cumplimiento de estas supremas disposiciones, están simultáneamente interesadas la paz pública, el bienestar de las clases más menesterosas, y la realización y desarrollo de las reglas dictadas para movilizar la propiedad. La consecución de fines tan importantes exige que se reparta con profusión esta circular, y que se cuide escrupulosamente de que no sea infringida por ningún particular ni autoridad, á quienes se comunicará con hacer efectiva la responsabilidad que contraigan; y sobre ambos puntos espera el Excmo. Sr. Presidente encontrar en V. E. la cooperación que nunca ha echado de menos en los asuntos concernientes al servicio público. Dios y Libertad. México, Octubre 9 de 1856.—*Ierdo de Tejada.*—Excmo. Sr. Gobernador del Estado de . . .

CIRCULAR de 2 de Febrero de 1894.—Se eximen del impuesto del Timbre las actuaciones administrativas y los títulos referentes á reparto de terrenos comunales en el Estado de Oaxaca.

Administración General de la Renta del Timbre. Circular núm. 120.—El Secretario de Hacienda y Crédito Público, en orden fecha 25 del pasado, me dice:

"Con esta fecha digo al Gobernador del Estado de Oaxaca, lo siguiente:

"He sometido á la resolución del Presidente de la República, la nota de Ud., fecha 13 de Octubre último, en la cual se sirve pedir que se declare vigente la concesión otorgada á ese Estado en el año de 1890, y por virtud de la cual, las actuaciones administrativas en los expedientes sobre reparto de terrenos comunales, así como los títulos respectivos, por valor que no exceda de 200 pesos han estado exentos del impuesto del timbre y se legalizan con solo el sello de la respectiva oficina.

El Señor Presidente, en virtud de las razones aducidas por ese Gobierno, así como de lo dispuesto en la circular de 9 de Octubre de 1856, que previno que la adjudicación de terrenos de repartimiento, por valor que no pasara de 200 pesos, no causaba alcabala ni otro derecho alguno, se ha servido declarar vigente la expresada resolución.

Lo digo á Ud. para sus efectos.

Lo traslado á Ud. para su conocimiento y fines á que haya lugar, refiriéndome á su informe núm. 1,917 de 23 de Octubre último."

La transcribo á Ud. para su conocimiento y demás fines.

México, Febrero 2 de 1894.—El Administrador General, José Verástegui.—Al Administrador Principal del Timbre en.

RESOLUCIÓN de 10 de Abril de 1899.—Se declaran exentos del impuesto del Timbre las diligencias y los títulos relativos á adjudicación de terrenos propios de los Ayuntamientos cuando su valor no exceda de 200 pesos.

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público.—México.—Sección 3ª—Mesa 3ª—Número 10,922.

Alento lo dispuesto por la Suprema Circular de 9 de Octubre de 1856 sobre que las adjudicaciones de terrenos cuyo valor no exceda de doscientos pesos, ya sean de común repartimiento ó propios de los Ayuntamientos, no deben causar alcabala ni ningún otro derecho, el Presidente de la República se ha servido declarar que la exención del impuesto del Timbre, otorgada por la Circular núm. 120 de 2 de Febrero de 1894 para las actuaciones administrativas que se practiquen y los títulos que se expidan con objeto de reducir á propiedad particular los terrenos de común repartimiento, es aplicable á las diligencias también administrativas y títulos referentes á adjudicación de terrenos propios de los Ayuntamientos, siempre que su valor no exceda de doscientos pesos.

Tengo el honor de decirlo á Ud. en respuesta á la consulta del Jefe Político de Zacatlán, inserta en el atento oficio de Ud. núm. 1,087, fechado el 24 de Marzo anterior.

México, Abril 10 de 1899.—P. O. D. S., el Oficial Mayor 1º R. Núñez.

Al Gobernador del Estado de Puebla.

Un informe sobre erección de nuevas poblaciones.

CIUDADANO SECRETARIO:

El Síndico del H. Ayuntamiento del Partido Norte de la Baja California manifiesta en su relativa comunicación, que varias familias e individuos ocurren solicitando se les dé un solar en los terrenos de la Ensenada, nueva cabecera del expresado Partido, cuyas peticiones no han podido atenderse por no estar concedidos aún los ejidos á dicha población: que dos personas se creen dueñas de los terrenos de la Ensenada, y ambas se disputan el derecho de venderlos, siendo el actual poseedor de hecho el Sr. Pedro Gastelum, quien con fundamento de una copia simple del expediente en que se asegura ser el legítimo propietario, enajena dichos terrenos; que esto motiva dificultades al Ayuntamiento que desea dar impulso al puerto, y que para expedir el aumento de aquella población suplica se dicte una resolución autorizada al Municipio para la expropiación de los terrenos mencionados, á fin de disponer libremente de ellos repartiéndolos á las familias que los pretendan, á reserva de indemnizar á su legítimo dueño cuando así sea declarado.

Es de derecho de gentes formar poblaciones sin necesidad de permiso de la autoridad; sin embargo, desde el siglo XIII, en las Siete Partidas del Rey D. Alfonso el Sabio, se prohibió la formación de poblaciones sin la licencia del rey, por considerarse como una regalía sobre cosas adquiridas en justa guerra. Yaunque esta regalía puede considerarse abrogada por la Constitución de la monarquía española sancionada en 1812, al consignarse en ella que la nación desde entonces no era ni podía ser patrimonio de ninguna persona ni familia, esto no obstante, als poblaciones que se venían formando bajo diferentes

nombres, según su categoría, siempre recibían sus respectivos títulos de fundación que el Soberano les expedía; siendo esta fundación objeto de varias disposiciones respecto de los indios, acerca de las cuales, desde la de 21 de Marzo de 1551 se comenzó á proveer se les proporcionasen tierras para reducir las á pueblos, debiendo procurarse que esas tierras tuviesen condiciones favorables y propias al objeto.

La regalía aludida fué, pues, desconocida; pero la intervención de la autoridad en la erección de nuevas poblaciones fué y es admitida como facultad propia del orden político y gubernativo. Por esto es que nuestra legislación nos ofrece diversos decretos en que se ejerce esta intervención, por ejemplo, el de 30 de Julio de 1853, que prevenía que toda congregación de familias en terrenos perteneciente á dominio particular, no pudiera erigirse ni solicitar se le erigiera en población políticamente organizada sin que primero hiciese constar el consentimiento del propietario; cuyo decreto á su vez fué derogado por el de 30 de Mayo de 1856; el de 14 de Septiembre de 1857 (expedido dos días antes de que comenzase á regir la Constitución federal), que autorizó la fundación de las ciudades de Colón, Iturbide y Humboldt en el Istmo de Tehuantepec, y en fin, otros decretos referentes á la misma materia.

Reconocido como está, el principio de legislar en ella, viene la cuestión de ver á quien le corresponda proveer en el asunto, y cuál es la regla á que hayan de sujetarse los procedimientos. ®

La ley suprema, el Código fundamental, dice en su artículo 117: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados, y como la erección de nuevos pueblos no está concedida á los poderes de la Unión, es evidente que corresponde proveer á ello á los de los Estados, con excepción del señalamiento de los terrenos, ya se trate de los particulares ó ya de los baldíos; pues en cuanto los primeros, la misma Cons-

titución dice, en el art. 27, que la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización, conforme á la ley que determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse, y como esa ley no se ha dado, sino únicamente el decreto de 30 de Mayo de 1882 que faculta al Ejecutivo federal para la expropiación con el fin de llevar á efecto las obras de pública utilidad, resulta, que los Estados no pueden expropiar, y respecto de los segundos, esto es, de los baldíos, tampoco pueden los Estados disponer, porque es facultad del Congreso fijar las reglas á que debe sujetarse la ocupación y enajenación de los terrenos baldíos, según la fracción 24 del art. 72, y á la vez la ley de 22 de Julio de 1883 no concede á ninguna autoridad de los Estados ni de la Federación facultad de asignar baldíos para el establecimiento de poblaciones; teniendo en consecuencia los propios Estados, legalmente hablando, que ocurrir al Poder Legislativo de la Unión en demanda de tierras cuando se quiera formar un nuevo pueblo que carezca y por lo mismo necesite de tales tierras.

Y como quiera que lo expuesto con relación á los Estados, es aplicable al Distrito Federal y Territorios de la Baja California, á cuya administración proveen los funcionarios federales, se deduce que éstos no están en aptitud de acceder á la pretensión del Síndico del Ayuntamiento del Territorio de la Baja California, sino que es materia de un decreto del Congreso que autorice á aquel Municipio para la expropiación de los terrenos en los términos que lo viene proponiendo; pues como no se trata de obra material alguna de á las que se contrae el citado decreto de 30 de Mayo de 1882, no está facultada esta Secretaría para otorgar la solicitada autorización; la cual, como es fácil comprender, en vista del art. 1º del relacionado decreto, exige una resolución especial del Poder Legislativo federal.

La atenuencia de individuos que pueda haber en la En-

señada, cabecera hoy del Partido Norte, proviene seguramente de que establecida la aduana marítima de Todos Santos con arreglo á la ley de Presupuestos fecha 31 de Mayo de 1881, y de conformidad con el decreto de 14 de Febrero de 1882, el movimiento y negocios consignientes son un grande elemento para el aumento de la población; pero esto, que siempre es un adelanto, puede muy bien ser auxiliado con medidas que, sin traspasar la órbita de la acción legal propendan á ayudar á la prosperidad de aquel puerto.

Cuales sean esas medidas, no toca á esta Secretaría acordarlas, sino á la de Gobernación, pues aunque la ley de 23 de Febrero de 1861, al distribuir los ramos de la Administración pública entre las Secretarías de Estado, no dice expresamente que la erección de nuevas poblaciones corresponda á Gobernación; por el carácter del asunto, por la práctica observada como se advierte al expedirse los decretos relativos por aquella Secretaría, y porque, según informes, ella ha entendido precisamente en los asuntos de la formación del municipio de la Ensenada, se tiene que convenir en que son de su resorte las providencias protectoras que desea el Ayuntamiento de aquella naciente población.

El que suscribe cree que en ese sentido se puede constatar el ocurso que ha dado origen á este dictamen, y cree también que no sólo por las razones expuestas no se debe acordar la autorización para la solicitada expropiación, sino porque la expropiación envolvería el reconocimiento implícito de la propiedad de esos terrenos, ya á la Sra. María Amparo Ruiz de Burton, ó ya al Señor Gastelum, contradicantes que se disputan el derecho de propiedad, y á quienes esta Secretaría, lejos de concedérselo, lo ha estimado, cuando menos, dudoso, previéndole á la mencionada señora, en 29 de Mayo de 1882 en vista de sus gestiones, que ocurra al Juzgado de Distrito para que mande practicar el deslinde y mensura de los terrenos, debiendo justificar ante la misma autoridad la posesión del terreno y las existencias de las mojon-

ras; en el concepto de que si esto no fuere comprobado, se estará á la cabida de dos sitios mencionados en el título primitivo, conforme á lo que dispone el art. 6º de la ley de 22 de Julio de 1863, y que el propio Juez de Distrito tiene que resolver la cuestión sobre mejor derecho que alega Gastelum.

Así pues, si esta Secretaría no se ha conformado con que los terrenos de que se habla sean de propiedad particular, ¿cómo autorizar ni promoverse se autorice la expropiación de ellos? Expropiación presupone propiedad, y aquí no está reconocida la propiedad y, en consecuencia no cabe la expropiación.

Tal es el parecer del que suscribe, que respetuosamente somete al ilustrado de esa superioridad.

Sección 1ª, Agosto 8 de 1883.—*Francisco Maza.*

ACUERDO.

Agosto 8 de 1883.—Remítase en copia la comunicación del Síndico del Ayuntamiento, y transcribáse el precedente dictamen á la Secretaría de Gobernación, á fin de que se sirva acordar lo que en su concepto corresponda.

Participese este trámite al Síndico del Ayuntamiento.

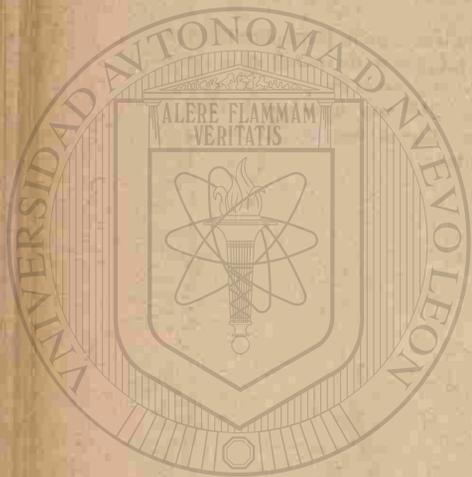
Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1ª.—Número 3,014.—Tengo el honor de acompañar á Ud. copia de la comunicación que con fecha 8 del próximo pasado Julio dirigió á esta Secretaría el Síndico del Ayuntamiento del Partido Norte de la Baja California, pidiendo se le autorice para disponer libremente de los terrenos de la Ensenada de Todos Santos para repartirlos entre varias familias que pretenden establecerse allí para formar una población: y como este asunto se pasó á la Sección respectiva de esta misma Secretaría para que rindiera el in-

forme correspondiente, la expresada Sección lo que ha producido en los siguientes términos:

“El Síndico, etc.”

Y por acuerdo del Presidente de la República tengo el honor de transcribirlo á Ud. á fin de que se sirva acordar lo que en su concepto corresponda.

Libertad y Constitución. México, Agosto 8 de 1883.—P. o. de S., *M. Fernández*, Oficial Mayor.—Al Secretario de Gobernación.—Presente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL

COLONIZACION

Ley de Colonización de 15 de Diciembre de 1883.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio.—Sección 1ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

MANUEL GONZÁLEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

“Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

CAPÍTULO I.

Del deslinde de los terrenos.

Art. 1º Con el fin de obtener los terrenos necesarios para el establecimiento de colonos, el Ejecutivo mandará deslindar, medir, fraccionar y valuar los terrenos baldíos ó de propiedad nacional que hubiere en la República, nombrando al efecto las comisiones de ingenieros que considere necesarias, y determinando el sistema de operaciones que hubiere de seguirse. (Citado en el artículo 4º.)

Art. 2º Las fracciones no excederán en ningún caso de dos mil quinientas hectaras, siendo ésta la mayor extensión que podrá adjudicarse á un solo individuo, mayor de edad, y con capacidad legal para contratar.

Art. 3º Los terrenos deslindados, medidos, fraccionados y valuados, serán cedidos á los inmigrantes extranjeros y á los habitantes de la República que desearan establecerse en ellos como colonos, con las condiciones siguientes: (citado en el art. 22.)

I. En venta, al precio del avalúo, hecho por los ingenieros y aprobado por la Secretaría de Fomento, en abonos pagaderos en diez años, comenzando desde el segundo año de establecido el colono.

II. En venta, haciéndose la exhibición del precio al contado, ó en plazos menores que los de la fracción anterior.

III. A título gratuito, cuando lo solicitare el colono; pero en este caso la extensión no podrá exceder de cien hectaras, ni obtendrá el título de propiedad sino cuando justifique que lo ha conservado en su poder y lo ha cultivado el todo ó en una extensión que no baje de la décima parte, durante cinco años consecutivos. (Citado en los arts. 14 y 16.)

Art. 4º Luego que hubiere terrenos propios para la colonización, con las condiciones que establece el art. 1º el Ejecutivo determinará cuáles deben colonizarse desde luego, publicando el plano de ellos y los precios á que hubieren de venderse, procurándose en todo caso que la venta ó cesión de que habla el artículo anterior se haga en lotes alternados. El resto de los terrenos se reservará para irse vendiendo con las condiciones que establece esta ley, cuando fueren solicitados, ó cuando lo determine el Ejecutivo, quien podrá hipotecarlos con el fin de obtener fondos que, reunidos al producto de la venta de los terrenos, han de ser destinados exclusivamente para llevar á cabo la colonización. (Citado en el art. 22.)

CAPÍTULO II.

De los colonos.

Art. 5º Para ser considerado como colono, y tener derecho á las franquicias que otorga la presente ley, se necesita que, siendo el inmigrante extranjero, venga á la República con certificado del agente consular ó de inmigración, extendido á solicitud del mismo inmigrante, ó de Compañía ó Empresa autorizada por el Ejecutivo para traer colonos á la República.

Si el solicitante reside en la República, deberá ocurrir á la Secretaría de Fomento, ó á los agentes que la misma Secretaría hubiere autorizado para admitir colonos, en las colonias que se funden en la República. (Citado en el art. 24, frac. II.)

Art. 6º En todos casos, los solicitantes han de presentar certificados de las autoridades respectivas que acrediten sus buenas costumbres, y la ocupación que han tenido antes de hacer su solicitud para ser admitidos como colonos. (Citado en el art. 24, frac. II.)

Art. 7º Los colonos que se establezcan en la República, gozarán por diez años, contados desde la fecha de su establecimiento, de las siguientes exenciones:

I. Exención del servicio militar.

II. Exención de toda clase de contribuciones, excepto las municipales.

III. Exención de los derechos de importación é interiores á los viveres, donde no los hubiere, instrumentos de labranza, herramientas, máquinas, enseres, material de construcción para habitaciones, muebles de uso y animales de cría ó de raza, con destino á las colonias. ¹

IV. Exención personal é intransmisible de los derechos de exportación á los frutos que cosechen.

V. Premios por trabajos notables, y primas y protec-

¹ La exención concedida por esta fracción debe sujetarse al Reglamento de 17 de Junio de 1889. (Véase la pág. 167.)

ción especial por la introducción de un nuevo cultivo ó industria.

VI. Exención de los derechos de legalización de firmas y expedición de pasaportes que los agentes consulares otorguen á los individuos que vengan á la República con destino á la colonización, en virtud de contratos celebrados por el Gobierno con alguna empresa ó empresas.

Art. 8º La Secretaría de Fomento determinará la cantidad y la clase de objetos que en cada caso deban introducirse libres de derechos; y la de Hacienda reglamentará la parte relativa á la manera de hacer las introducciones para evitar el fraude y el contrabando, pero sin impedir el pronto despacho de los objetos.

Art. 9º Los colonos que se establezcan en terrenos desprovistos de árboles y que justifiquen que en una parte de su lote, que no baje de la décima parte, han hecho una plantación de árboles en cantidad proporcionada á la extensión, y dos años antes del término de las exenciones, gozarán por un año más de la contribución sobre todo el terreno, y en general, tendrán un año más de exención, por cada décima parte que destinen al cultivo de bosques.

Art. 10. Las colonias se establecerán bajo el régimen municipal, sujetándose, para la elección de sus autoridades y para el establecimiento de impuestos, á las leyes generales de la República y á las del Estado en donde se encuentren. La Secretaría de Fomento podrá, sin embargo, constituir Agentes en las colonias, con el fin de darles mejor dirección á los trabajos, y de exigir el reembolso de las cantidades que se adeudaren á la Federación por cualquier título.

Art. 11. Los colonos están obligados á cumplir los contratos que celebren con el Gobierno federal, ó con los particulares ó compañías que los transporten y establezcan en la República.

Art. 12. Todo inmigrante extranjero que se establezca en una colonia, manifestará en el acto de establecerse,

¹ En uso de la facultad concedida por el art. 8º, que se anota, la Secretaría de Fomento, expidió el Reglamento de 17 de Junio de 1889.

ante el agente federal de colonización ó ante el notario ó juez respectivos, si tiene la resolución de conservar su nacionalidad, ó si desea obtener la mexicana que le concede la parte tercera del art. 30 de la Constitución de la República.

Art. 13. Los colonos serán considerados con todos los derechos y obligaciones que á los mexicanos y extranjeros, en su caso, concede é impone la Constitución federal, gozando de las exenciones temporales que les otorga la presente ley; pero en todas las cuestiones que se susciten, sean de la clase que fueren, quedarán sujetos á las decisiones de los tribunales de la República, con absoluta exclusión de toda intervención extraña.

Art. 14. Los colonos que abandonaren sin causa justificada debidamente, por más de un año y antes de haberlos pagado, los terrenos que se les hubieren cedido en venta, perderán el derecho á dichos terrenos y á la parte del precio que por ellos hubieren exhibido.

En el caso de la fracción III del art. 3º se pierde el derecho al título gratuito, abandonando el terreno ó dejándolo de cultivar por más de seis meses, sin causa debidamente justificada.

Art. 15. En los lugares destinados por el Gobierno federal para nuevas poblaciones, se concederá un lote gratis para los colonos mexicanos ó extranjeros que quisieren establecerse en ellos, como fundadores; pero no adquirirán la propiedad de dicho lote, sino cuando justifiquen que antes de los dos primeros años de establecidos, han fabricado en él habitación, perdiendo el derecho á la adjudicación en caso contrario. Se procurará también que la adjudicación se haga por lotes alternados.

Art. 16. Los mexicanos que residan en el extranjero y que deseen establecerse en los lugares desiertos de las fronteras de la República, tendrán derecho á cesión gratuita de terreno, con las condiciones de la fracción III del art. 3º, hasta de 200 hectaras de extensión, y al goce, por quince años, de las exenciones que otorga la presente ley.

Art. 17. Queda autorizado el Ejecutivo para auxiliar á los colonos ó inmigrantes, en los casos que lo crea conveniente y con sujeción á las sumas que se consignen en las leyes de presupuestos, con los gastos de transporte de ellos y sus equipajes por mar y en el interior, por una vez, y hasta donde lleguen las líneas de ferrocarriles; con los de manutención gratis hasta por quince días, en los lugares que determine, y con herramientas, semillas, materiales para habitaciones y animales para el trabajo y la cría; siendo reembolsable, en los mismos términos que el valor de los terrenos, el de estas últimas ministraciones.

CAPÍTULO III.

De las compañías.

Art. 18. El Ejecutivo podrá autorizar á compañías para la habilitación de terrenos baldíos con las condiciones de medición, deslinde, fraccionamiento en lotes, avalúo y descripción, y para el transporte de colonos y su establecimiento en los mismos terrenos. (Citado en el artículo 20.)

Art. 19. Para obtener la autorización, las compañías han de designar los terrenos baldíos que tratan de habilitar su extensión aproximativa y el número de colonos que han de establecer en ellos en un tiempo dado.

Art. 20. Las diligencias del apeo ó deslinde serán autorizadas por el Juez de Distrito en cuya demarcación esté ubicado el baldío, y una vez concluidas, y si no hubiere opositor, se entregarán á la Compañía para que las presente á la Secretaría de Fomento, con las demás condiciones de que habla el art. 18. Mas si hubiere opositor, se procederá al juicio que corresponda, y en el que se tendrá por parte al representante de la Hacienda federal.

Art. 21. En compensación de los gastos que hagan las compañías en la habilitación de terrenos baldíos, el Ejecutivo podrá concederles hasta la tercera parte de los terrenos que habiliten, ó de su valor; pero con las con-

diciones precisas de que no han de enajenar los terrenos que se les concedan; á extranjeros no autorizados para adquirirlos, ni en extensiones mayores que dos mil quinientas hectaras; bajo la pena de perder en los dos casos las fracciones que hubieren enajenado contraviniendo á estas condiciones, y cuyas fracciones pasarán desde luego á ser propiedad de la Nación.

Art. 22. Los terrenos deslindados por las compañías, y con excepción de los que pudieren cederse á estas en compensación de gastos por su habilitación, serán cedidos á los colonos, ó quedarán reservados, en los términos y condiciones que establecen los arts. 3º y 4º de esta ley.

Art. 23. Las autorizaciones que otorga el Ejecutivo para la habilitación de terrenos baldíos, quedarán sin efecto y sin derecho á prórroga, cuando no se hubiere dado principio á las operaciones respectivas, dentro del término improrrogable de tres meses.

Art. 24. El Ejecutivo podrá celebrar contratos con empresas ó compañías, para la introducción á la República y el establecimiento en ella de colonos é inmigrantes extranjeros, con las siguientes condiciones:

I. Las compañías han de fijar el tiempo preciso dentro del cual han de introducir un número determinado de colonos.

II. Los colonos ó inmigrantes han de llenar las condiciones establecidas en los arts. 5º y 6º de la presente ley.

III. Las bases de los contratos que han de celebrar las compañías con los colonos, se han de ajustar á las prescripciones de esta ley, y se han de someter á la aprobación de la Secretaría de Fomento.

IV. Las compañías han de garantizar á satisfacción del Ejecutivo, el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en sus contratos, en los que se han de consignar los casos de caducidad y multa respectiva.

Art. 26. Las compañías que contraten con el Ejecutivo el transporte á la República, y el establecimiento en

ella de colonos extranjeros, disfrutarán por un término que no ha de exceder á veinte años, de las siguientes franquicias y exenciones:

I. Venta á largo plazo y módico precio de terrenos baldíos ó de propiedad nacional, con el exclusivo objeto de colonizarlos.

II. Exención de contribuciones, excepto la del timbre, á los capitales destinados á la empresa.

III. Exención de derechos de puerto, excepto los establecidos para mejoras en los mismos puertos, á los buques que por cuenta de las compañías conduzcan diez familias, por lo menos, de colonos á la República.

IV. Exención de derechos de importación á las herramientas, máquinas, materiales de construcción y animales de trabajo y de cría, destinado todo exclusivamente para una colonia agrícola, minera ó industrial, cuya formación haya autorizado el Ejecutivo.¹

V. Prima por familia establecida, y otra menor por familia desembarcada; prima por familia mexicana establecida en colonia de extranjeros.

VI. Transporte de los colonos, por cuenta del Gobierno, en las líneas de vapores y de ferrocarriles subvencionados.

Art. 26. Las compañías extranjeras de colonización se considerarán siempre como mexicanas, debiendo tener domicilio en alguna de las ciudades de la República, sin perjuicio de los que puedan establecer en el exterior, y estando obligadas á constituir en el país una parte de su Junta directiva y á tener uno ó más apoderados en la misma República, ampliamente facultados para entenderse con el Ejecutivo.

Art. 27. Todas las cuestiones que pudiesen suscitarse entre el Gobierno y las compañías, serán dirimidas por los tribunales de la República y con arreglo á sus leyes, sin que puedan tener ingerencia en ellas los agentes diplomáticos extranjeros.

¹ La exención de derechos de que habla esta fracción IV, debe de sujetarse á las prevenciones del Reglamento de 17 de Julio de 1889.

CAPÍTULO IV.

Disposiciones generales.

Art. 28. Los particulares que destinen una parte ó el todo de terrenos de su propiedad para colonizarlos con diez familias, por lo menos, de inmigrantes extranjeros, tienen derecho á que las colonias que establezcan en ellos gocen de las mismas franquicias y exenciones que las colonias que establezca el Gobierno federal, siempre que se sujeten á las condiciones que fixe el Ejecutivo para asegurar el éxito de la colonia, y siempre que entre esas condiciones se consigne la de que los colonos han de adquirir, por compra ó cesión, un lote de terreno para cultivo.

El Ejecutivo podrá proporcionar colonos extranjeros á los particulares estipulando con ellos las condiciones con las que los han de establecer, y podrá auxiliarlos también con los gastos de transporte de los colonos.

Art. 29. La colonización de las islas de ambos mares se hará por el Ejecutivo federal con sujeción á los preceptos de esta ley; reservándose precisamente el Gobierno en cada isla, una extensión de cincuenta hectáreas para usos públicos. En caso de que la isla no tuviere la superficie suficiente para hacer la separación prevenida en este artículo, no se hará en ella ninguna venta de terrenos, y solo podrán concederse éstos en arrendamiento por corto plazo.

En las colonias que se establezcan en las islas, habrá siempre un número de familias mexicanas, que no sea menos de la mitad del número total de las familias colonizadoras.

Art. 30. El Ejecutivo queda autorizado para adquirir, por compra ó cesión, terrenos de particulares, siempre que así lo creyere conveniente, para establecer en ellos colonias, y con sujeción á las partidas de gastos que, con tal fin, se consignen en las leyes de presupuestos de egresos.

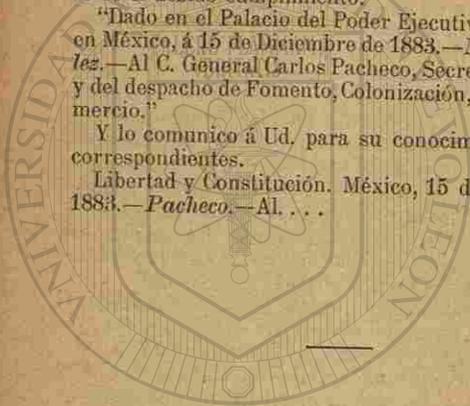
Art. 31. Se derogan todas las leyes anteriores á la presente sobre colonización.—*Aristeo Mercado*, Diputado Vicepresidente.—*Guillermo Palomino*, Senador Presidente.—*Saturnino Ayon*, Diputado Secretario.—*Enrique María Rubio*, Senador Secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á 15 de Diciembre de 1883.—*Manuel González*.—Al C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Libertad y Constitución. México, 15 de Diciembre de 1883.—*Pacheco*.—Al . . .



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

REGLAMENTO del 17 de Julio de 1889 sobre franquicias concedidas á los colonos por la ley de 18 de Diciembre de 1883.

Secretaria de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo por el art. 8.º de la ley del 15 de Diciembre de 1883, para reglamentar las franquicias que se otorgan á los colonos en el art. 7.º de la referida ley, he tenido á bien aprobar el siguiente

REGLAMENTO

Art. 1.º Con arreglo á la frac. III del art. 7.º de la ley del 15 de Diciembre de 1883, y IV del art. 25 de la misma, son libres de derechos los efectos siguientes, para uso de los colonos y Compañías reconocidas:

Substancias alimenticias.

- Aceite.
- Ajos.
- Arvejones.
- Arroz.
- Avena.
- Azúcar común ó refinada.
- Café de todas clases.
- Carne salada y ahumada, incluso el jamón en pernil.
- Cebada.
- Cebollas.
- Frijoles.
- Frutas y legumbres frescas.
- Galletas corrientes.

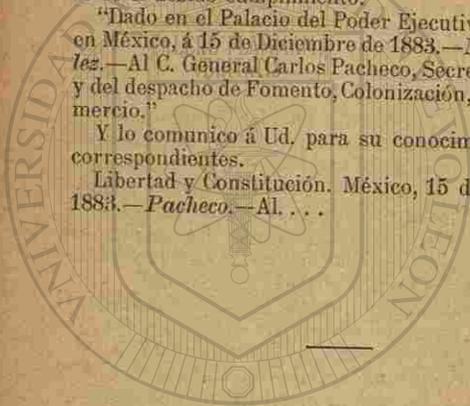
Art. 31. Se derogan todas las leyes anteriores á la presente sobre colonización.—*Aristeo Mercado*, Diputado Vicepresidente.—*Guillermo Palomino*, Senador Presidente.—*Saturnino Ayon*, Diputado Secretario.—*Enrique María Rubio*, Senador Secretario.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á 15 de Diciembre de 1883.—*Manuel González*.—Al C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y efectos correspondientes.

Libertad y Constitución. México, 15 de Diciembre de 1883.—*Pacheco*.—Al . . .



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

REGLAMENTO del 17 de Julio de 1889 sobre franquicias concedidas á los colonos por la ley de 18 de Diciembre de 1883.

Secretaria de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 1^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A SUS HABITANTES, SABED:

Que en virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo por el art. 8.º de la ley del 15 de Diciembre de 1883, para reglamentar las franquicias que se otorgan á los colonos en el art. 7.º de la referida ley, he tenido á bien aprobar el siguiente

REGLAMENTO

Art. 1.º Con arreglo á la frac. III del art. 7.º de la ley del 15 de Diciembre de 1883, y IV del art. 25 de la misma, son libres de derechos los efectos siguientes, para uso de los colonos y Compañías reconocidas:

Substancias alimenticias.

- Aceite.
- Ajos.
- Arvejones.
- Arroz.
- Avena.
- Azúcar común ó refinada.
- Café de todas clases.
- Carne salada y ahumada, incluso el jamón en pernil.
- Cebada.
- Cebollas.
- Frijoles.
- Frutas y legumbres frescas.
- Galletas corrientes.

Garbanzos.
Harina de trigo y de los demás cereales de todas clases.

Leche condensada.

Lentejas.

Maíz.

Manteca.

Mantecquilla.

Mostaza en polvo.

Papas.

Pastas alimenticias.

Pimienta.

Sal común ó de comer.

Te de todas clases.

Vinagro en vasija de barro, vidrio ó madera.

Piedra y hierro.

Galería de barro.

Ladrillo que no sea refractario.

Lozas de piedra y pizarra para pisos, labradas por una sola cara, de todas clases y dimensiones, con excepción de las de mármol ó alabastro.

Piedras para amolar ó mollejonas.

Vidrios planos para ventanas y puertas.

Yeso.

Carretería.

Carretillas de una ó dos ruedas y borriquetes.

Carros, carretas y carretones de todas dimensiones.

Ejes de acero ó hierro para carros.

Ruedas sueltas para carro de todas dimensiones.

Pletería.

Guarniciones de tiros corrientes para carros.

Droguería.

Almidón.

Hierro, acero y demás metales.

Alambre tejido para cercas.

Alcayatas y picaportes.

Bisagras de fierro y latón de todas clases.

Bocallaves de fierro, acero ó latón sin platear ni dorar.

Cerraduras de fierro, acero, latón, cobre ó bronce de todas clases.

Clavos, puntillas, tornillos, tuercas y remaches de fierro ó zinc.

Fierro acanalado y tejas de fierro para techos.

Fuelles para chimenea.

Goznes de fierro ó latón de todas clases.

Herramientas é instrumentos de fierro, latón, acero ó madera, ó compuestos de estas materias, así como estacas, mangos y cabos para herramientas.

Hornos de fierro para cocina y estufas con la correspondiente tubería de fierro.

Herraderas de fierro para animales.

Molinos de viento, de fierro ó de madera, ó de ambas materias, para extraer agua de los pozos.

Poleas de fierro ó madera, ó de ambas materias; viguetas de fierro, siempre que no pueda hacerse uso de ellas más que para la construcción de casas.

Zinc laminado para techos.

Máquinas y sus accesorios.

Objetos diversos.

Caballos castrados.

Escobas de brezo.

Madera ordinaria, aserrada en hojas, vigas, tablas y tablones.

Pelo de res para enjarrar.

Puertas y ventanas de madera y de madera y vidrio.
Tiendas de campaña de todas clases, incluyendo los postes para armarlas.

Art. 2º Gozarán también todos los colonos á su llegada á la República y por una sola vez, de libertad de de-

rechos, para sus muebles buenos ó usados, si fueren corrientes, según la calidad de los colonos; así como para los demás útiles de menaje de todas clases que traigan para establecerse.

Art. 3º La Secretaría de Fomento determinará qué colonias gozan de la libre introducción de viveres con las limitaciones y por el tiempo que juzgue conveniente, con arreglo al art. 4º de la ley citada.

Art. 4º Las importaciones de efectos libres de derechos por este reglamento ó por la Ordenanza General de Aduanas, podrán hacerlas los colonos, cuyo carácter sea reconocido, directamente ó por las Agencias de las compañías colonizadoras, ó por los comisionistas que más les convenga, pero con sujeción á las prevenciones que en seguida se expresan.

Art. 5º Los colonos por sí ó por sus agentes, ocurrirán al Agente respectivo de la Secretaría de Fomento, pidiendo la importación de los efectos que necesiten, bien sea de los que sean libres por este reglamento ó por la Ordenanza de Aduanas, haciendo la petición por una lista en duplicado, en que detallarán con claridad la clase y calidad de efectos que pidan. Esta lista será calificada por el Agente de Fomento, y si la encuentra conforme, pondrá al pie la autorización correspondiente, pasando en seguida un ejemplar á la Aduana por donde deba hacerse la importación, conservando otro en su archivo, remitiendo otro á la Secretaría de Fomento, y librando al peticionario un certificado para su resguardo.

Donde no haya Agentes la Secretaría de Fomento vestirá con este carácter á algún empleado federal.

Art. 6º Las importaciones que hagan los colonos por sí ó por sus Agentes, deben venir en una factura consular sin que aparezcan en ésta otros efectos que causen derechos, sean ó no para los mismos colonos.

Art. 7º Una vez hecha la importación, el Agente ó los colonos formarán los pedimientos de despacho que conviene la Ordenanza, los que presentarán á la Aduana; encontrándolos ésta conforme con el documento ó docu-

mentos autorizados por el Agente de Fomento, verificará la entrega de los efectos; pero si encontrare alguna diferencia, procederá con arreglo á lo dispuesto en el artículo 388 de la Ordenanza de Aduanas.

Art. 8º Los Agentes de la Secretaría de Fomento cuidarán que los Agentes de las Compañías de colonización les den anticipadamente una noticia de los colonos que deban llegar á los lugares por donde van á verificar su entrada al país, para que aquellos lo comuniquen oportunamente á las aduanas respectivas, y á la llegada de los colonos no hagan inconveniente para el despacho de los muebles y menaje que éstos traigan para establecerse. En dicha noticia constará precisamente el nombre de los colonos.

Art. 9º Si los Agentes de Fomento estuvieran en los puntos por donde verifiquen los colonos su entrada, concurrirán á presenciarse el despacho de los muebles y menaje de éstos á fin de hacer la calificación respectiva de la libertad derechos que concede el art. 2º; pero si no estuvieran, será el Administrador de la Aduana quien calificará. En caso de creer que los artículos que importen los colonos son superiores en clase y calidad á lo concedido en el citado art. 2º, procederán los administradores de conformidad con lo que previene el art. 180, frac. VI de la Ordenanza de Aduanas.

Art. 10. Los Agentes de la Secretaría de Fomento cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que no se concedan á los colonos permisos para importación de más efectos que los que estrictamente les sean necesarios; llevando para el efecto una cuenta de las cantidades concedidas, y otra de lo que regularmente puedan necesitar, tanto de viveres como de objetos para construcción de casas, trabajos de campo, etc.

Art. 11. Si aconteciere que algunos colonos ó Agentes de éstos, abusaren de la concesión que se les hace, para vender ó traficar con efectos que hubieren recibido libres de derechos, el Agente de Fomento lo hará saber inmediatamente al Juez de Distrito respectivo para que

éste proceda al esclarecimiento de los hechos según sus atribuciones, y en caso de justificarse el delito, será castigado con arreglo al art. 371 de la Ordenanza de Aduanas.

Los Administradores de las Aduanas tendrán en igual caso la misma obligación.

Art. 12. Llevarán un registro los Agentes de la Secretaría de Fomento, en que conste: el número de orden de los pedimentos de los colonos, la fecha de su presentación, la de la remisión de uno de dichos pedimentos á la Aduana por donde va hacerse la introducción, el nombre de ésta, el número de bultos de los pedimentos, el contenido en general, el nombre ó nombres de los colonos, y el nombre del Agente, si lo hubiere.

Del contenido de este registro remitirán un tanto mensual á la Secretaría de Fomento.

Art. 13. También llevarán los expresados Agentes un registro porcenorizado de las cantidades de efectos concedidos á cada colono, con expresión del número de personas de que se compone su familia, si la tuviere; haciendo el cálculo cada seis meses, de las cantidades que han obtenido de viveres y del consumo correspondiente, así como de otros objetos para fabricación de casas, labores de campo, etc. De este registro remitirán á la Secretaría de Fomento una copia semestral con informe justificado de las exigencias de los colonos, para que la misma Secretaría haga las observaciones que estime justas y disponga lo conveniente para mejor acierto en lo sucesivo.

TRANSITORIO.

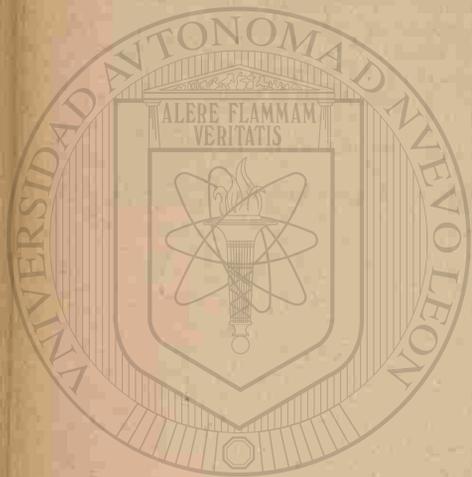
Para dar cumplimiento al contrato celebrado en 11 de Diciembre de 1885 con el C. Guillermo Andrade, serán libres de derechos, además de los efectos de que trata el artículo anterior, y sólo para los colonos que estén comprendidos en dicho contrato, la ropa hecha (incluyendo sombreros y zapatos) que para su uso reciban.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á quince de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve.—*Porfirio Díaz*.—Al C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.

Libertad y Constitución. México, Julio 17 de 1889.—*Pacheco*.—Al.....



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

AGUAS.

LEY de 5 de Junio de 1888.—Especificación de los mares, canales, lagos y ríos que constituyen vías generales de comunicación.

Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la República Mexicana.—Sección 2ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

“Art. 1º Son vías generales de comunicación, además de las carreteras nacionales, ferrocarriles, etc., para los efectos de la fracción XXII del art. 72 de la Constitución, las siguientes: ®

“Los mares territoriales.

“Los esteros y lagunas que se encuentren en las playas de la República.

“Los canales construidos por la Federación ó con auxilios del Erario Nacional.

“Los lagos y ríos interiores, si fueren navegables ó flotables.

"Los lagos y ríos de cualquiera clase y en toda su extensión que sirvan de límites á la República ó á dos ó más Estados de la Unión.

"Art. 2.^o Corresponde al Ejecutivo Federal la vigilancia y la policía de estas vías generales de comunicación y la facultad de regular el uso público y privado de las mismas, con arreglo á las bases generales que siguen:

"A. Las poblaciones ribereñas tendrán el uso gratuito de las aguas que necesiten para el servicio doméstico de sus habitantes.

"B. Serán respetados y confirmados los derechos de particulares respecto de las servidumbres, usos y aprovechamientos constituidos en su favor sobre los ríos, lagos y canales, siempre que tales derechos estén apoyados en títulos legítimos ó en prescripción civil de más de diez años.

"C. La concesión ó confirmación de los derechos de los particulares, en los lagos, ríos y canales que son objeto de esta ley, solamente podrán otorgarse por la Secretaría de Fomento cuando no produzca ni amenace producir el cambio de curso de los ríos ó canales, ni privar del uso de sus aguas á los ribereños inferiores.

"D. La pesca, buceo de perlas y el uso ó aprovechamiento de los esteros, algas que se encuentran en las playas y en los terrenos baldíos, y de los mares territoriales, serán reglamentados especialmente por el Ejecutivo Federal.

Art. 3.^o Los delitos del orden común que se cometiesen en los lagos, canales y ríos interiores, así como el conocimiento de las controversias que se suscitaren entre particulares, con motivo de la aplicación de los reglamentos que expida la Secretaría de Fomento, corresponden á la jurisdicción local que fuere competente.

"México, veintiocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.—Miguel Castellanos Sánchez, Senador presidente.—Luis C. Curiel, Diputado presidente.—Guillermo de Landa y Escandón, Senador secretario.—A. Riba y Echeverría, Diputado secretario."

"Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho.—Porfirio Díaz.—Al C. General Carlos Pacheco, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización, Industria y Comercio."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.

Libertad y Constitución. México, Junio 5 de 1888.—Pacheco.

LEY de 6 de Junio de 1894.—Autorización al Ejecutivo para conceder á los particulares y compañías el uso de las aguas de jurisdicción federal, con objeto de aprovecharlas en irrigación ó como potencia aplicable á diversas industrias.

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 2.^a

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

"PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

"Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

"Art. 1.^o Se autoriza al Ejecutivo para que, de acuerdo con las prevenciones de la presente ley y la de 5 de Junio de 1888, haga concesiones á particulares y á compañías para el mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como potencia aplicable á diversas industrias.

"Art. 2º Las concesiones se otorgarán con las condiciones siguientes:

"I. Previa publicación de la solicitud en el Periódico Oficial de la Federación y del Estado respectivo.

"II. Sin perjuicio de tercero y decidiéndose previamente por los tribunales competentes las oposiciones que surgieran.

"III. Presentación de planos, perfiles y memorias descriptivas para la completa inteligencia de las obras que se proyecten, debiendo hacerse la presentación dentro del plazo que se estipule en la concesión.

"IV. Obligación de admitir un ingeniero como inspector de los trabajos de trazo y de construcción de todas las obras, nombrado por el Ejecutivo y pagado por los empresarios.

"V. Obligación de constituir un depósito en títulos de la Deuda Pública, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se contraigan por los concesionarios.

"VI. Obligación de sujetar las tarifas de venta y arrendamiento de las aguas al examen y aprobación de la Secretaría de Fomento.

"Art. 3º El Ejecutivo podrá conceder á los empresarios las franquicias y exenciones siguientes:

"I. Exención por cinco años de todo impuesto federal, excepto los que se pagan en la forma del timbre, á los capitales empleados en el trazo, construcción y reparación de las obras definidas en la concesión respectiva.

"II. Introducción libre de derechos de importación por una sola vez, de las máquinas, instrumentos científicos y aparatos necesarios para el trazo, construcción y explotación de las mismas obras.

"III. Derecho de ocupar gratuitamente los terrenos baldíos y nacionales para el paso de los canales, para la construcción de presas ó diques y para la formación de depósitos.

"IV. Derecho de expropiar á los particulares, por tratarse de obras de utilidad pública, previa indemnización y con arreglo á las bases establecidas para los ferrocarriles,

de los terrenos necesarios para los usos fijados en la fracción anterior.

"Art. 4º Conforme á los preceptos de esta ley y á los de la de 5 de Junio de 1888, el Ejecutivo reglamentará el aprovechamiento de las aguas en el Distrito Federal y en los Territorios, pudiendo hacer concesiones para construir presas y formar depósitos sujetándose igualmente á los principios que establece el Código Civil.

Art. 5º Se faculta al Ejecutivo para conceder la importación libre de derechos, de la maquinaria y aparatos necesarios para el aprovechamiento de aguas para riego y como potencia, á las Empresas que obtengan concesiones de los Estados con aquel objeto, siempre que den garantías de llevar á cabo los trabajos, y mediante las reglas y limitaciones que para el caso establezca el Ejecutivo de la Unión.—*Pablo Macedo*, Diputado Presidente.—*R. Donde*.—*Senador Presidente*.—*E. Cervantes*, Diputado Secretario.—*Alberto García*, Senador Secretario."

"Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

"Dado en el Palacio Nacional de México, á cuatro de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Ingeniero Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria."

Y lo comunico á Ud. para su conocimiento y demás fines.

Libertad y Constitución. México, Junio 6 de 1894.—*Fernández Leal*.

Secretaría de Fomento, Colonización é Industria de la República Mexicana.—Sección 5ª.

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“PORFIRIO DÍAZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Á SUS HABITANTES, SABED:

“Que el Congreso de la Unión ha tenido á bien decretar lo siguiente:

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Art. 1.º El Ejecutivo de la Unión revalidará por esta sola vez, las concesiones que las autoridades de los Estados hayan otorgado hasta la fecha á particulares, para utilizar las aguas de los ríos ó corrientes de Jurisdicción Federal clasificados así por el artículo 1º de la ley de 5 de Junio de 1888, siempre que se llenen los requisitos siguientes:

1º Que la revalidación se solicite dentro de un año de la promulgación de esta ley.

2º Que la concesión haya sido hecha después de promulgada la ley de 5 de Junio de 1888 y con anterioridad á la declaración de la Secretaría de Comunicaciones respecto á la jurisdicción federal del río ó corriente.

3º Que el concesionario formule solicitud dirigida á la Secretaría de Fomento, pidiendo la confirmación de sus derechos y acompañando la copia debidamente legalizada del título respectivo.

4º Que acompañe también un plano y perfiles de la presa, boca-toma, ú otra obra que hubiese construido para derivar el agua, y de un kilómetro por lo menos del canal, y

5º Que todos estos documentos se remitan á la Secretaría de Fomento por conducto del Gobierno del Estado correspondiente, quien los acompañará con el informe que juzgue conveniente.

Art. 2º Si en oposición á las concesiones que hayan de confirmarse, existen solicitudes de aguas hechas ante la Secretaría de Fomento de acuerdo con la ley de 6 de Junio de 1894, se observarán las reglas siguientes:

1ª Tratándose de simples solicitudes éstas quedarán sin efecto ni tramitación ulterior, desde el momento en

que se haya confirmado la concesión antagónica dada por la autoridad local.

2ª Tratándose de solicitudes que hayan motivado gastos de información pericial, reconocimiento y planificaciones, las solicitudes también quedarán sin efecto, pero los solicitantes serán indemnizados de dichos gastos por el Gobierno Federal siempre que se compruebe lo siguiente:

A.—Que el trabajo que motiva el gasto, se practicó por acuerdo expreso de la Secretaría de Fomento.

B.—El monto positivo del referido gasto. Si no hubiere acuerdo entre el interesado y la Secretaría de Fomento, respecto del importe del gasto, fijará éste la autoridad judicial competente, por los procedimientos correspondientes del orden común. Dichas indemnizaciones no tendrán efecto si el agua del río ó curso de que se trate, es bastante para satisfacer la merced expresada en la concesión confirmable, y la solicitada por el particular ante Fomento.

Art. 3º Cuando las obras autorizadas por las concesiones de los Estados, estén ya construidas y funcionando sin oposición, la confirmación podrá hacerse desde luego. En caso contrario, se publicará la solicitud, según lo prescribe la ley de 6 de Junio de 1894, y toda oposición deberá ser previamente resuelta por los tribunales competentes. Esto último se observará respecto á toda oposición á las confirmaciones solicitadas, cuando aquella se funde no en derechos nacidos de las leyes de 5 de Junio de 1888 y de 6 de Junio de 1894, sino en derechos nacidos de algún otro título.

Art. 4º Tratándose de cursos de agua de carácter dudoso, ya por lo que toca á que sean navegables ó flotables ó ya por lo que mira á su situación como límites probables entre dos ó más Estados, las autoridades de éstos, antes de otorgar una concesión de aguas, consultarán al Gobierno Federal sobre el carácter definitivo de dichas corrientes. Las concesiones hechas en estos casos sin que se haya llenado el requisito preceptuado en este ar-

tículo, no serán de ningún modo confirmadas en lo sucesivo.

Alfredo Chavero, Diputado Presidente.—*J. M. Couttolena*, Senador Presidente.—*J. B. Castelló*, Diputado Secretario.—*Carlos Quaglia*, Senador Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

México, 18 de Diciembre de 1896.—*Fernández Leal*.
—Al.....

GARANTIA DE LA PROPIEDAD RURAL

EN MÉXICO.

Principios fundamentales, según la Ley de Tierras expedida el 26 de Marzo de 1894, en el concepto de que el espíritu de la institución del Gran Registro de la Propiedad de la República que dicha ley establece, es sistematizar y generalizar la práctica de los preceptos conducentes al perfeccionamiento de los títulos de propiedad raíz, con relación tanto á los intereses generales de la Nación en su íntima concordancia con los derechos privados que afecta, como á las prescripciones científicas más caracterizadas sobre identificación predial y del respeto á los derechos de propiedad respectivos, para así satisfacer á la mayor garantía de la propiedad raíz que el desarrollo y propiedad de la riqueza pública imponen.

1º

Toda propiedad rural, cualquiera que sea su denominación, debe estar amparada por un título primordial expedido por la autoridad facultada para ello por la ley, sin cuyo requisito es denunciable como baldía, ya sea en su totalidad ó en su excedente de superficie no amparada, por cualquier habitante de la República, arts. 2º y 6º de la ley de tierras vigente ya indicado. ®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 2º

La Secretaría de Fomento está facultada por los artículos 38 y 40 de la ley relativa, para celebrar toda clase de arreglos ó composiciones conducentes al reconocimiento y expedición de títulos ó declaraciones primordiales que amparen la propiedad raíz poseída, ya sea en su total área ó en las demasías ó excedencias que no es-

tículo, no serán de ningún modo confirmadas en lo sucesivo.

Alfredo Chavero, Diputado Presidente.—*J. M. Couttolena*, Senador Presidente.—*J. B. Castelló*, Diputado Secretario.—*Carlos Quaglia*, Senador Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, á diez y siete de Diciembre de mil ochocientos noventa y seis.—*Porfirio Díaz*.—Al C. Manuel Fernández Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.

Y lo comunico á Ud. para su inteligencia y fines consiguientes.

México, 18 de Diciembre de 1896.—*Fernández Leal*.
—Al.....

GARANTIA DE LA PROPIEDAD RURAL

EN MÉXICO.

Principios fundamentales, según la Ley de Tierras expedida el 26 de Marzo de 1894, en el concepto de que el espíritu de la institución del Gran Registro de la Propiedad de la República que dicha ley establece, es sistematizar y generalizar la práctica de los preceptos conducentes al perfeccionamiento de los títulos de propiedad raíz, con relación tanto á los intereses generales de la Nación en su íntima concordancia con los derechos privados que afecta, como á las prescripciones científicas más caracterizadas sobre identificación predial y del respeto á los derechos de propiedad respectivos, para así satisfacer á la mayor garantía de la propiedad raíz que el desarrollo y propiedad de la riqueza pública imponen.

1º

Toda propiedad rural, cualquiera que sea su denominación, debe estar amparada por un título primordial expedido por la autoridad facultada para ello por la ley, sin cuyo requisito es denunciable como baldía, ya sea en su totalidad ó en su excedente de superficie no amparada, por cualquier habitante de la República, arts. 2º y 6º de la ley de tierras vigente ya indicado. ®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 2º

La Secretaría de Fomento está facultada por los artículos 38 y 40 de la ley relativa, para celebrar toda clase de arreglos ó composiciones conducentes al reconocimiento y expedición de títulos ó declaraciones primordiales que amparen la propiedad raíz poseída, ya sea en su total área ó en las demasías ó excedencias que no es-

tén amparadas expresamente, así como para titular los predios que se denuncien y se acrediten ser baldíos, siempre que estén ó sean debidamente satisfechos en el caso los requisitos de identificación predial y de los derechos anexos que previene el art. 39 de la ley, mediante la planografía técnico-analítica del predio de que se trate y la perfecta identificación de los derechos que afecta respecto á la Nación, al propio interesado y á los propietarios de los predios colindantes, en el concepto de que para el económico efecto de dicho amparo ó titulación primordial, la ley autoriza, en favor de los poseedores la prescripción hasta de 2.500 hectáras (art. 27 de la ley de 22 de Julio de 1863) y la rebaja del 66 al 50 por ciento del precio de las demasías ó excedencias respectivas, ó del 33 por ciento al tratarse de baldíos, graduándose dichas rebajas según el tiempo de la posesión y la naturaleza del correspondiente título (art. 42 de la ley), así como que el pago del excedente de la superficie así amparada ó de los terrenos que se denuncien como baldíos, se haga con títulos de la deuda pública (art. 13 de la ley), todo esto al tratarse de baldíos, con relación al precio de Tarifa (artículo 12 de la ley), cuyo tipo de precio general, aun tratándose de terrenos de la mejor calidad y producción, no excede del valor mínimo asignado en las transacciones comerciales privadas á los terrenos de más baja calidad, condición excepcionalmente económica, que á la vez que estimula al poseedor para perfeccionar su derecho predial, favorece el interés del denunciante para adquirir de un modo esencialmente ventajoso, multiplicándose así los aprovechamientos privados y por tanto los intereses nacionales propios á su provisor y sistemado concurso.

3º

Cualquiera que sea la naturaleza de un título de propiedad raíz, su garantía reconoce como base esencial, tanto la identificación predial (por configuración y ubicación local), como la de los derechos que afecta por su

origen legal en favor del interés privado; por su acreditada posesión en favor de determinada personalidad y por su limitación concordante con los derechos relativos á los predios ajenos al propio interesado, correspondiendo así la eficacia de la garantía con el grado de perfeccionamiento en la requisitación de las condiciones expresadas. Consecuente con la plena satisfacción de dichos principios notoriamente prácticos y justificados, la ley de tierras vigente, preceptúa, para toda Titulación ó Declaración de amparo legal de la propiedad raíz, el que previa y debidamente sean satisfechos los requisitos de identificación predial: mediante la Planografía técnico-analítica del predio de que se trate, autorizada por perito titulado y con responsabilidad pericial al efecto; así como la identificación de los derechos anexos respecto á la Nación, al propio interesado y á los propietarios de los predios colindantes; mediante las constancias que acrediten el título primordial ó sea el hecho de haber salido el predio del dominio de la Nación; el último título traslativo con el especial Registro local de la propiedad á favor del poseedor ó interesado, y por último, la conformidad expresa de los propietarios colindantes, con relación al Plano científico del predio que limitan como el medio más fehaciente para caracterizar la seguridad del respectivo derecho, cumpliendo así todas las condiciones que la previsión y el sagrado respeto á los derechos adquiridos ó otorgados, puede exigir en favor de la garantía efectiva de la propiedad predial ó sea el factor determinante del próspero desarrollo de la riqueza pública en su íntima y concordante relación con los intereses privados, cuyo conjunto la constituye.

4º

Analizados, según los principios ya indicados, los diversos títulos primordiales de la propiedad raíz, expedidos por el Gobierno Colonial, y los subsecuentes hasta el 26 de Marzo de 1894, resultan deficiencias, en la iden-

tificación predial y de los derechos anexos más ó menos trascendentales y explicables, tanto por la naturaleza de los medios disponibles, como de los preceptos propios al estado del país y aun de los conocimientos humanos, en la época de la expedición de los dichos títulos; pero cuya formal existencia y una honrada previsión, determinaron el concretar las legitimaciones primordiales respectivas, bajo la condición de no amparar más que la cabida ó superficie indicada, cuyo amparo condicional lo ratifican los arts. 63 y 65 de la ley de tierras vigente, dejando por lo tanto á salvo los derechos de la Nación, respecto de las demasías que un denunciao ó verificación de colindancias precisare, preceptuándose así una garantía relativa de la propiedad más ó menos sujeta á interpretaciones ó inquisiciones posteriores procedentes de los denunciantes ó de los deslindadores oficiales, condiciones de por sí incompatibles; tanto con la garantía absoluta que impone el capital en su aplicación al mejor aprovechamiento de los elementos constitutivos de la propiedad raíz, cuanto con la confianza propia al grado de creciente desenvolvimiento de los intereses nacionales que impone y reclama el estado de progreso del país. Atento lo expuesto, y la enérgica y favorable evolución obtenida en el aprovechamiento y valor de la propiedad raíz, bajo la influencia de la paz y de las facilidades de comunicación y comercio, realizadas ya, así como que dicha mejora del valor de la propiedad, impone y permite el llevar á cabo los trabajos topográficos y del deslinde de derechos sobre la propiedad raíz, bajo las condiciones que la ciencia prescribe para caracterizar debidamente la perfecta y segura identificación predial, tanto por forma y ubicación local, como por los derechos que afecta por su limitación concordante con los de los propietarios colindantes, ratificada por estos mismos interesados, como la expresión práctica y fehaciente del sagrado respeto al derecho ajeno, por tanto correspondía preceptuar legalmente, tanto el medio de generalizar el amparo de la propiedad raíz por la Nación, independien-

temente de las salvedades que sobre cabida amparada previene el texto de los títulos primordiales expedidos, como el subsanar en dichos títulos las deficiencias que sobre identificación predial y de derechos anexos pudieran tener; mediante las verificaciones y requisitaciones complementarias más económicas y eficaces para acreditar satisfactoriamente dichos efectos bajo la doble égida de la responsabilidad profesional en los trabajos planográficos, y de la auténtica y expresa conformidad de los propietarios colindante (como los inmediatos intereses en la correlativa limitación predial y de derechos preexistentes), con la representación planográfica debida y pericialmente autorizada, de la propiedad raíz, cuyas condiciones respectivamente prescriben los arts. 66 y 99 de la ley de tierras vigente. Para realizar este benéfico y trascendental fin, se estableció la institución del Gran Registro de la Propiedad de la República, cuya institución, á la vez que constituye una fórmula general, bien acreditada por la estricta verificación de los requisitos legales propios á su elevado propósito de garantizar los títulos primordiales de la propiedad raíz independientemente de toda nueva inquisición ó rectificación administrativa sobre superficie, demasías ó colindancias, ya con relación á los derechos de la Nación, á los de los denunciantes ó á los de los colindantes, según respectivamente lo preceptúan los arts. 48, 60 y 50 de la ley de tierras vigente, permite la liberalidad en su iniciativa privada y el carácter de verificación propio de sus atribuciones, el subsanar mediante requisitaciones complementarias sin plazo determinado, las deficiencias ú omisiones que, respecto á identificación predial y de los derechos anexos, contengan los títulos expedidos, hasta alcanzar así el grado de perfección que de dichos requisitos previene la ley para el disfrute de las franquicias consignadas en los arts. 48 y 60 de la ley de 26 de Mayo de 1894, y cuyo texto se inserta á continuación, como la expresión oficial de la mayor garantía que sobre la propiedad raíz pudiera pretenderse.

Art. 48. Toda propiedad inscrita en el Gran Registro de la Propiedad de la República, será considerada por el Gobierno Federal como perfecta, irrevocable y exenta de todo género de revisión. En consecuencia, los efectos que la inscripción surtirá con relación al Gobierno y autoridades de la Nación, serán que ninguna de estas, sea cual fuere su categoría, ni sus agentes de cualquiera especie, pueden exigir en ningún tiempo la presentación de títulos ó documentos primordiales, ni mucho menos sujetarlos á inquisición ó revisión de ninguna clase, pues el simple Certificado de una inscripción surtirá el efecto de un título perfecto é irrevocable, sin que por ningún motivo pueda rectificarse la extensión superficial de la propiedad inscrita.

Art. 60. La Secretaría de Fomento dará noticia á los agentes de tierras de las propiedades que hayan sido inscritas en el Gran Registro de la Propiedad de la República y que estén ubicadas dentro de los límites de su circunscripción, con objeto de que por ningún título ni motivo admitan denuncias de ellas ó de parte de las tierras que las formen.

Consecuente con los principios ya indicados y la notoria utilidad pública y privada de la institución del Gran Registro, se transcriben á continuación las indicaciones propias á su aplicación práctica:

INSTRUCCIONES

PARA OBTENER LA INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD RAÍZ EN EL "GRAN REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA REPÚBLICA."

1ª Presentación de un ocurso al señor Secretario de Fomento ó al Director del Gran Registro, bajo la forma de alguno de los modelos anexos (1 ó 2), á la elección de los interesados según el grado de requisitación propio á los títulos cuya inscripción se solicita, pidiendo la inscripción de los títulos correspondientes á la propiedad de que se trate, en el "Gran Registro de la Propiedad de la República," con el fin de gozar de las franquicias concedidas por el art. 48 de la ley de 26 de Marzo de 1894 que estableció dicha institución. En dicho ocurso se hará mención del nombre, apellido y domicilio del solicitante, ó los de aquel en cuyo nombre ó representación promoviere éste, en el caso de que no lo hiciere por derecho propio; del nombre con que sea conocida la propiedad ó terreno cuya inscripción de títulos se pretenda, ó del que le pusiere su propietario si no hay precedente nominal alguno; así como los nombres de la Municipalidad, Distrito (Cantón ó Partido) y Estado en que esté ubicada y los de los predios colindantes y sus respectivos propietarios; expresando á la vez y en su caso, que en el respectivo Plano presentado para el efecto de la inscripción que se solicita se han respetado las zonas federales y las reservas de superficie que previenen los arts. 14 y 15 de la ley de 26 de Marzo de 1894 respecto á playas, ríos navegables ó flotables, ruinas monumentales é islas.

Al referido ocurso y para el efecto ya indicado se acompañarán, con su correspondiente factura por duplicado,

además de los documentos ó constancias que á continuación se expresan, una copia simple del certificado de Liberación, del predio de que se trata, expedido según la ley de 8 de Noviembre de 1892: *(advertiendo sobre el particular, que cuando alguno de dichos documentos ó constancias estén autorizados por Notarios, Jueces ó funcionarios locales residentes en los Estados de la Federación, corresponde legalizar sus respectivas firmas por el Gobernador respectivo.)*

A. El título primordial, reconocido ó expedido por la Secretaría de Fomento, que acredite haber salido la propiedad de que se trata, del dominio de la Nación, y estar satisfecho el interés de ésta, en lo que se refiere á la enajenación de dicha propiedad.

B. El último traslativo de dominio en favor del que solicite la inscripción, debidamente inscripto en el Registro Público del Distrito, Partido, Cantón ó Estado en que la propiedad esté situada.

C. El plano de la propiedad ó terreno de que se trate, suscrito ó autorizado por ingeniero titulado á satisfacción de la Secretaría de Fomento, y llenando en sí y en sus comprobantes las condiciones siguientes, *(además de las relativas á contener las certificaciones propias para caracterizar su íntima relación, tanto con el respectivo Título primordial ó la Declaración de la Secretaría de Fomento, como es un modo especial con las diligencias correspondientes á la conformidad de los colindantes:)*

I. Contener la denominación propia del predio que representa, así como la del Municipio, Distrito, Cantón ó Partido y Estado ó Territorio de su ubicación local.

II. Contener las indicaciones conducentes para identificar el predio de que se trate, con relación á lugares ó mojoneas bien caracterizadas por su conveniente estabilidad.

III. Estar orientado con relación á sus cuatro líneas marginales rectangulares, representando las direcciones astronómicas del Norte al Sur y del Este al Oeste res-

pectivamente, así como la parte superior del plano el extremo Norte, para así expeditar la apreciación del correspondiente perímetro lindero del predio representado, tanto con relación á las indicaciones usuales de los títulos de propiedad, como de un modo especial con las correlativas de las diligencias, de conformidad de los colindantes, las cuales, legalmente, reconocen como base las indicaciones planográficas, y por tanto, corresponde el precisarlas con la mayor claridad.

IV. Expresar medidas del sistema métrico decimal en las longitudes de las líneas, y del sexagesimal en la amplitud de los ángulos que forman.

V. Estar dibujado en una escala que permita inscribir con toda claridad y precisión, en cada uno de los vértices de los lados rectos del perímetro lindero, ó de las directrices de sus lados sinuosos, tanto las indicaciones nominales y ordinales correlativas, inherentes para caracterizar debidamente los puntos ó lugares que se representan, cuanto las indicaciones topográficas más apropiadas á la expedita identificación de las colindancias parciales respectivas, adoptando siempre escalas cuyo tipo sea de 1 á 1,000 ó sus múltiples enteros.

VI. Tener bien marcado con línea especial todo el perímetro lindero de la propiedad respectiva, y con indicaciones coloridas bien caracterizadas, exteriores á dicha línea, la extensión de las diversas colindancias, así como con numeración progresiva é inmediata, todas las mojoneas ó vértices principales del perímetro lindero ó de las directrices y los puntos intermedios á aquellas ó éstos en que se determine un lindero, paso de agua, camino ó lugar de expedita identificación, adoptando al efecto como vértice de partida aquel que por su situación propia ó su importancia en los linderos sea el más conducente á su debida verificación posterior, ó bien el más septentrional, haciendo estricta referencia á dicha numeración ordinal los datos del respectivo informe pericial y su tabla de datos anexa, de que después se hará mención.

VII. Contener en el lugar correspondiente ó bajo forma de nota marginal con su diagrama explicativo amplificado, al tratarse de las líneas que por su corta extensión no permitan hacerlo con claridad á la escala adoptada en el plano general, las expresiones propias á la longitud y orientación astronómica de cada lado recto del perímetro lindero y la amplitud de los ángulos interiores de éste, cuyos datos figuren en la tabla anexa al respectivo informe pericial, así como en el caso de que en los linderos figuren líneas, ríos ó caminos de curso sinuoso, los datos análogos á las directrices ó líneas auxiliares que sirvieron de base para fijar la posición relativa de aquéllos.

VIII. Contener la indicación precisa tanto de los nombres de los linderos ó lugares que se señalen, como de los respectivos propietarios colindantes; todo esto de completa conformidad con los que respectivamente se indiquen tanto en el título ó títulos primordiales, como en el último título translativo de dominio, y de un modo especial con aquellos á que hagan referencia las diligencias sobre conformidad de colindantes.

IX. Contener las indicaciones relativas tanto á la superficie que abraza en hectaras, como á la declinación de la aguja, con la fecha en que se observó y el lado del perímetro lindero por cuya observación directa del azimut astronómico y rumbo magnético se determinó, igualmente que la situación de dicho lado ó la de cualquier otro del perímetro lindero, hasta donde fuere posible, respecto á algún lugar bien determinado y de fácil identificación, situado dentro ó cerca de los linderos señalados, procurando expresar los datos en la forma más apropiada para facilitar su examen y verificación correlativa.

X. Traer anexo un informe pericial del perito titulado que levantó ó autorizó el plano ya indicado, en el cual, á la vez que se haga una relación general de las condiciones propias á la expedita identificación local del predio de que se trate, se concrete y precise una exposición detallada del sistema de levantamiento adoptado para la determi-

nación de los datos del perímetro lindero, transcritos en el respectivo plano, así como los de las verificaciones que sobre el particular se hubiesen practicado, transcribiendo al efecto en una de las calcas del respectivo plano, y con indicaciones coloridas especiales para cada clase de dichos datos, con el fin de acreditar así, y con toda claridad, tanto el grado de exactitud con que se procedió en el levantamiento del plano dentro de los límites de tolerancia técnica propios del caso, cuanto la precisión de los datos relativos para caracterizar las respectivas líneas de colindancias en su relación con el correcto cierre del respectivo perímetro lindero, insertando al efecto dichos datos y los de su rigurosa derivación hasta obtener la superficie respectiva por el método de coordenadas, con entera sujeción á todas las indicaciones del modelo adjunto núm. 3, en el concepto de que el cierre del correspondiente perímetro debe acreditarse mediante la igualdad respectiva, tanto de las sumas de las proyecciones al Norte con las del Sur y las del Este con las del Oeste, como entre la suma de los ángulos interiores y el producto del número de los vértices menos 2, duplicado por 180° , así como con la concordancia precisa entre las proyecciones parciales corregidas para obtener dichos efectos y el valor del azimut y la longitud correspondiente de los lados, insertos en el plano y su tabla de datos anexa, lo mismo que entre los azimutes de los lados y los respectivos ángulos interiores que figuren en el plano y su tabla de datos anexa, sin cuyos requisitos no son aceptables los trabajos planográficos relativos, para el efecto de una inscripción de títulos en el Gran Registro, acompañando, según el caso lo requiera, el diagrama ó diagramas explicativos correspondientes en una de las calcas del plano, ya en lo relativo á la exposición concreta y detallada del sistema de levantamiento aplicado para la determinación de los puntos principales del perímetro lindero ó de su polígono directriz, como á los detalles de la parte sinuosa que comprenda, consignando al efecto los datos y resultados, con tal claridad, que sea posible

verificar cualquiera de ellos sin necesidad de recurrir al mismo perito; correspondiendo advertir sobre este particular que cualquiera que sea el sistema técnico adoptado como principal para el levantamiento del plano, y especialmente cuando se ha concretado al de rumbo y distancia, procede al determinar por observación directa el acimut astronómico de alguno de los lados ó directrices principales del perímetro lindero, igualmente que practicar el mayor número de verificaciones en la correlación de los vértices señalados en el respectivo plano para así cumplir, tanto con el precepto legal sobre correcta identificación predial, cuanto para eliminar lo más posible los errores de lectura ó de influencia propios de las indicaciones magnéticas, y á su vez el precisar bases para la apreciación de los límites de tolerancia correspondientes al trabajo pericial de que se trate, dentro de las proporciones indicadas en la advertencia final de las presentes instrucciones.

En relación con los preceptos ya indicados y consecuente con el texto expreso de la ley, procede manifestar que en el caso de que la propiedad de que se trate comprenda ríos navegables ó flotantes y ruinas monumentales, ó colinde con playas marítimas, es obligación del perito, y á su vez del propietario interesado, el precisar el primero en su informe pericial, y el segundo en su solicitud para inscripción, que se han respetado las prescripciones legales relativas á dichas circunstancias y que están consignadas en el art. 14 de la ley de tierras, fecha 26 de Marzo de 1894, en el concepto de que la latitud ó anchura de las zonas marítimas ó fluviales de 20, 10 y 5 metros, que respectivamente previene ya el citado artículo 14 de la ley, hacen referencia á la línea del nivel de las aguas en pleamar, y en los ríos, á la línea del límite superior de las aguas no desbordables; así como, al tratarse de ruinas monumentales, el reservar la superficie necesaria para su cuidado y conservación, advirtiendo, además, que en el caso de que la propiedad de que se trate esté comprendida en isla marítima, procede así-

mismo el precisar que se ha reservado la extensión mínima de 50 hectaras para población y otros usos públicos, así como al tratarse de las islas de los ríos, lagos y esteros navegables, que se han practicado los reconocimientos é informaciones por la autoridad política respectiva, conducentes á demostrar que no hay inconveniente en que dichas islas de los ríos ó de los lagos y esteros navegables sean de propiedad particular, según lo previene el art. 15 de la ley.

D. Los documentos que acrediten de una manera auténtica y fehaciente la conformidad de todos y cada uno de los actuales colindantes, que se hayan señalado en el plano respectivo, con los linderos que se hubiesen precisado en este, ó en su caso la constancia de haber sido vencido en juicio el colindante que se hubiere opuesto, adoptando al efecto, como medios de comprobación, cualquiera de los siguientes: escritura pública otorgada ante Notario ó Juez autorizado para otorgar instrumentos públicos; comparecencia ante un Juez de 1ª Instancia, ó comparecencia ante el Agente de tierras de la circunscripción en donde la propiedad estuviera ubicada, correspondiendo justificar en cada uno de estos tres casos el carácter de propietarios actuales de los respectivos predios colindantes, mediante un certificado del encargado del Registro local, en que consten los nombres de las personas á cuyo favor esté registrada la propiedad de los predios colindantes de que se haga mérito, ó por cualquier otro medio legal conducente á acreditar la satisfacción de los mencionados requisitos, así como la autenticidad del plano relativo y su copia principal, tanto con la certificación apropiada de dichos documentos, por el Juez, Notario ó Agente ante quien se hizo constar la conformidad de colindantes, como con la firma del ingeniero titulado que autorizó dicho plano.

E. Una copia certificada de cada uno de los documentos que, según lo ya expresado en las anteriores cláusulas A, B y D, se deben acompañar al ocurso solicitando la inscripción, así como una copia auténtica y otra sim-

ple del plano relativo, ambas en género de calca, teniendo por objeto dichas copias de documentos y planos, á la vez que integrar el expediente respectivo que debe obrar protocolizado en la Oficina del Gran Registro, cuando soliciten los interesados la devolución de los documentos originales presentados, satisfacer la notoria y general conveniencia de que consten en la ya expresada Oficina todos los antecedentes que sirvieron de base al acuerdo relativo á la inscripción de títulos solicitada; y en el caso de que ésta se haya practicado, y por tanto, esté ya autorizada la expedición del certificado respectivo, que ampara la consolidación definitiva de la propiedad, consignada en el art. 48 de la ley sobre la materia, fecha 26 de Marzo de 1894, dicha constancia fiel y justificada sea un recurso en favor del propietario interesado, en previsión del caso de extravío de los títulos originales presentados ó de su consignación expresa en otro asunto, mediante la certificación respectiva por la Oficina del Gran Registro, á costa del interesado y previa su solicitud escrita.

2.^a Presentada la solicitud de inscripción con los requisitos ya expresados, se otorga el acuse de recibo correspondiente á los documentos exhibidos, según anexos 3 y 4, y verificada que sea la satisfacción de los requisitos legales por el personal técnico de la Oficina del Gran Registro, con sujeción á los cuestionarios insertos en los anexos 5 y 6, el Jefe ó Director de dicha Oficina, ante el cual es de gestionarse el asunto de inscripción hasta su término, procede, en vista de los dictámenes ya indicados, á recabar de la Secretaría de Fomento y mediante las informaciones á que hacen referencia los documentos anexos 7 á 14, tanto la declaración prevenida en la fracción I del art. 55 de la ley, cuanto el acuerdo prescrito por los arts. 53 y 55 de la misma ley, para practicar la inscripción solicitada, el cual obtenido que sea, se comunica al interesado en la forma del anexo núm. 15, para que haga el entero de las estampillas que por derecho de inscripción correspondan, según el art. 61 de la

ley de 26 de Marzo de 1894, á la extensión de la propiedad de que se trate, á razón de un centavo por hectara, si no llega á 10,000 hectaras; por el exceso hasta 50,000 hectaras, medio centavo, y si aún es mayor de 50,000 hectaras, un cuarto de centavo por el excedente que hubiere, advirtiendo sobre el particular, que la cuota mínima será de dos pesos, y de que hecho el entero de estampillas correspondiente, así como las copias, á que hace referencia la cláusula E de las presentes instrucciones, se procede á practicar la inscripción y á su vez á expedir á favor del respectivo propietario solicitante, el certificado de inscripción á que hace referencia el art. 48 de la ya citada ley y las certificaciones del Plano y su Tabla de datos anexa, así como, de acuerdo con el art. 60 de la ley, á comunicar al Agente de la Secretaría de Fomento en la localidad respectiva, que se ha practicado la inscripción; todo esto según los anexos 16 á 18.

3.^a En el caso de que el examen del expediente respectivo por la Oficina del Gran Registro, resulte haber incorrecciones substanciales ó de forma en la comprobación de los requisitos legales ya expresados, se ponen en conocimiento del solicitante de inscripción en la forma del anexo 19, para que proceda á subsanarlas; en el concepto de que queda á voluntad de los interesados gestionar lo conducente á la requisitación propia del caso, sin que para ello estén sujetos á plazos fijos, así como que, si para dicho efecto les fuere necesaria la devolución de alguno ó algunos de los documentos que hubieren presentado ya á la Oficina, pueden recabar y obtener su devolución mediante el curso respectivo al Jefe de la Oficina del Gran Registro y las correspondientes tomas de razón y recibo.

Atento el espíritu y texto de los arts. 45, 53, 54 y 55 de la ley de 26 de Marzo de 1894, y sus correlativos los arts. 38, 55 y 59 del Reglamento de la ya mencionada ley, las atribuciones propias de la Oficina del Gran Registro se concretan á la previa verificación de los requisitos legales para recabar el acuerdo y práctica de las inscripciones que se soliciten; por tanto, procede, cuando la ve-

rificación acredita estar satisfechos dichos requisitos, el practicar la inscripción solicitada, y en el caso de que así no sea, el practicar las requisitaciones complementarias para ese efecto; en este último sentido son conducentes las indicaciones que a continuación se expresan bajo el título de advertencia.

Consecuente con el espíritu y texto de los preceptos relativos a la institución del Gran Registro y que están consignados en los arts. 25 á 62 de la Ley de 26 de Marzo de 1894 y los arts. 38, 55 y 50 de su Reglamento, expedido el 5 de Junio de 1894, las atribuciones propias de la Oficina del Gran Registro, se concretan, tanto á verificar si están satisfechos los requisitos legales en las solicitudes de inscripción que se soliciten, cuanto á practicar y caracterizar aquellas que así lo acrediten, mediante el acuerdo expreso de la Secretaría de Fomento sobre el particular y bajo la forma y condiciones que previenen los arts. 53, 54 y 55 de la ley, así como á precisar y formular las requisitaciones complementarias que al efecto solicitado exija al caso. En este sentido, juzgamos conducente al objeto de la presente publicación transcribir en seguida y bajo el título de "Advertencia" el texto de los preceptos legales correlativos.

Advertencia.

Los interesados que no dispongan de título primordial con las condiciones á que hace referencia la cláusula A de la primera de las presentes instrucciones, ó que, disponiendo de éste, su plano anexo no llene las condiciones que se han precisado en las cláusulas C y D, podrán subsanar uno ú otro inconveniente para el efecto de la inscripción en el Gran Registro, previa la transición respectiva y á la cual hacen referencia los anexos 20 y 25, del siguiente modo: en el primer caso, recabando dicho título de la Secretaría de Fomento, mediante denuncia, arreglo, composición ó declaración, sujetándose en el caso á los preceptos legales relativos de los arts. 2 á

5, 9 á 11, y 14 á 15 de la ley de 26 de Marzo de 1894 ya citada, así como á los arts. 14 á 59 de su Reglamento, aprovechando al efecto las ventajas consignadas en los arts. 42, 13 y 44 de la misma ley, cuyo texto se transcribe al calce; en el segundo caso, mediante la solicitud para practicar la verificación correspondiente por un perito titulado y la inserción de los datos relativos en la calca respectiva del plano indicado, autorizada é informada por el mismo perito titulado que hizo la verificación, con el fin de obtener la aceptación del trabajo relativo, así como presentando con el carácter de requisitaciones complementarias las diligencias que acrediten, en la forma legal ya indicada en la cláusula D, la conformidad de los actuales colindantes con las indicaciones del plano requisitado según se ha especificado ya.

Los artículos de la ley de tierras á que se ha hecho referencia, así como sus correlativos 38, 39, 42, 44 á 49 y 50 á 62, pueden verse en las páginas 8 y siguientes de este volumen.

Los arts. 14 á 59 del Reglamento de 5 de Junio de 1894, á que también se hace referencia, se hallan en las páginas 36 á 52 de este mismo volumen.

Consideraciones sobre límites de tolerancia, tanto para el efecto de una verificación por procedimientos análogos á los de la medida verificada, como para la concordanza entre los datos obtenidos por la medida directa de un perimetro linderó y los relativos á la derivación por el cálculo del azimut y la longitud de los lados de dicho perimetro en función de las proyecciones corregidas correspondientes á la condición de perimetro cerrado, las cuales consideraciones son conducentes para definir la responsabilidad parcial á que se refiere el art. 66 de la ley cuyo texto se transcribe en seguida.

Art. 66. Los ingenieros que intervengan en el destino y medición de terrenos baldíos ó nacionales ó de excedencias y demasías, son civilmente responsables para con la Hacienda pública de los daños y perjuicios que le causaren por negligencia ó impericia en el desempe-

ño de su encargo; sin perjuicio de las penas en que incurran en caso de dolo ó fraude con arreglo á las leyes federales.

RELACION ENTRE DATOS DE LEVANTAMIENTO Y LOS

ALERE FLAMMA
VERITATIS

Medidas lineales.

Con resorte de acero, teniendo en cuenta el grueso de fichas.....	0.25 milésimos.
Con cadena común.....	0.50 ..

Medidas angulares.

Con simple brújula, observación directa ó inversa y para distancias menores de 100 metros.....	0°7'30"
Con teodolito ó instrumento provisto de Vermer.....	0°1'00"

Medidas superficiales.

En triangulaciones con empleo de resorte y teodolito.....	0.25 milésimos.
En triangulaciones con emple o de cadena y teodolito.....	0.50 ..
En planometría con cadena y brújula, observación directa ó inversa.....	1.00 ..

RELACION ENTRE DATOS DE MEDIDA Y SUS CORRECCIONES PARA CARACTERIZAR ANALITICAMENTE LA CONDICIÓN ESPECIAL Á UN PERIMETRO CERRADO.

En las medidas angulares, las correcciones no deben exceder de la aproximación del instrumento usado en el

levantamiento del plano respectivo; pues toda corrección superior á este tipo sólo podría considerarse como efecto de una rectificación de los datos respectivos, acreditada expresamente, y no como resultado de apreciaciones fundadas en la combinación, acumulación ó compensación de errores propios á la aproximación del instrumento goniométrico usado; circunstancias bien difíciles de caracterizar prácticamente, mientras no se precise por minuciosas verificaciones, tanto el sentido de dichos errores en las observaciones practicadas cuanto su aplicación especial.

En las medidas lineales procede á la vez el que las correcciones aplicadas no excedan de la proporción de 0.25 á 0.50 milésimos, para así caracterizar la concordante relación de colindancias que proviene la ley en el caso bien común de una verificación de medidas practicada con resorte ó cadena.

En relación con los límites de tolerancia indicados y los preceptos legales conducentes á la identificación de los predios amparados por la inscripción de sus respectivos títulos primordiales en el Gran Registro, aparece acreditada la siguiente conclusión:

Las apreciaciones sobre límites de tolerancia en los trabajos planográficos, destinados al Gran Registro, deben concretarse á precisar las relaciones de los datos determinantes de la posición real de los puntos principales del perímetro linderero y los de la situación de éste hacia lugares bien caracterizados, dentro de la sección de las mojoneras usadas para la respectiva identificación predial, y no con relación á la magnitud ó al valor económico de la superficie comprendida, puesto que cualesquiera que sean éstos, las prescripciones técnicas de levantamiento de un plano deben concretarse á caracterizar el respectivo perímetro linderero en el sentido de su identificación práctica, atendiendo á que á un perímetro bien definido sólo corresponde determinada superficie, mientras que á determinada superficie pueden corresponder diversos perímetros; condición incierta y por tanto in-

compatible con la identificación predial que la ley y el respeto á los derechos de colindancia imponen.

Consecuente con la idea que ha guiado en la publicación de las presentes instrucciones ó indicaciones útiles para la práctica de la institución del Gran Registro, y atenta á la influencia é importancia del levantamiento del plano de una propiedad, en su efecto determinante para el perfeccionamiento de los títulos respectivos, así como que la incertidumbre en el costo de dicho trabajo pericial y su económica relación con el valor representativo de la propiedad, es el común origen, tanto de la vacilación en la mayoría de los propietarios, para gestionar y llevar á cabo la satisfacción de tan útil y necesaria condición, previa á la garantía en el derecho y tranquilo aprovechamiento de la propiedad predial ó raíz, como en los ingenieros para precisar una apreciación en armonía con la justa remuneración de sus trabajos y el conveniente aprovechamiento de éstos por el propietario del respectivo predio, se transcribe á continuación una fórmula que, por su autorizada procedencia, del honorable Maestro Señor Ingeniero Francisco Diaz Covarrubias, permite el hacer una fundada apreciación sobre el particular.

$$C = cS + 5c' \sqrt{S}$$

en la cual se representa

C = Costo del trabajo topográfico ó sea del plano.

c = Costo de la triangulación por cada sitio (legua cuadrada).

c' = Costo de detalles de perímetro por legua lineal (4,190 metros).

S = Superficie de la propiedad en sitios ó leguas cuadradas (á razón de 1,755 hectas 61 por sitio).

En la práctica pueden tomarse

$$C = 200 \text{ á } 250 \text{ sitio; } c=60 \text{ y } c' = 38,$$

Correspondiendo advertir que las apreciaciones á que se acaba de hacer referencia, sólo caracterizan un promedio, cuyos máximo y mínimo podrán precisarse en cada caso concreto, según las condiciones y forma del perímetro lindero respectivo, así como la naturaleza de las facilidades ó dificultades locales propias para venir en conocimiento de los puntos principales que lo constituyen en su técnica correlación, y del clima y condiciones económicas de la localidad en que esté ubicada la propiedad de que se trate.

Ya al terminar las presentes instrucciones juzgamos conveniente el precisar, en obsequio de la expedita verificación de los trabajos planográficos destinados para la inscripción de títulos en el Gran Registro, que conforme á la ley, procede el caracterizar del modo más exacto posible, tanto el acimut astronómico de uno de los lados del perímetro lindero, cuanto la serie sucesiva de los ángulos interiores que forman todos sus lados, y la longitud de éstos; por tanto corresponde obtener dichos datos con la mayor aproximación y comprobación posibles, mediante el uso de instrumentos y procedimientos conducentes á esos efectos.

En relación con estos principios, es conducente para su efecto la siguiente consideración: cuando el sistema ó el polígono del levantamiento no esté apoyado en todos los vértices del perímetro lindero, ó lo esté sólo en algunos, así como en el caso de que dicho perímetro lindero comprenda líneas sinuosas sin amojonamiento especial, corresponde considerar dicho polígono de levantamiento, como un polígono directriz del perímetro lindero, á cuyo polígono directriz se aplicarán todas las correcciones conducentes á la satisfacción del requisito propio á un perímetro cerrado, y precisados así sus vértices, á éstos se relacionarán los vértices del perímetro lindero.

mediante los datos de los respectivos alineamientos de conexión obtenidos y bien verificados, hasta obtener así las coordenadas de los puntos de uno y otro polígono, respecto á un vértice común al levantamiento y al lindero ó algún vértice del perímetro lindero, y ya con estos datos, derivar por el cálculo, según las fórmulas:

$$\text{tang. } A = \frac{x' - x}{y' - y}; D = \frac{x' - x}{\text{sen. } A}$$

y mediante las diferencias de las coordenadas respectivas, el azimut y la longitud de los lados del perímetro lindero que estén limitados por mojoneras, cuya disposición no haya permitido tomarlos como vértices de observación en el polígono del levantamiento, en el concepto de que dichos datos definitivos de los alineamientos sucesivos é inmediatos del perímetro lindero, son los que deben figurar en la tabla de datos, anexa al respectivo Plano.

El Arancel vigente para el pago de honorarios á los Agentes de la Secretaría de Fomento en el ramo de Terrenos Baldíos es el inserto en las páginas 55 y 56 del presente volumen.

ANEXO 1.

Señor Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.

(Nombre, apellido y domicilio del propietario interesado, así como en el caso de que la solicitud se haga por encargo ó poder de éste, indicar además los del mandatario) ante Ud., con el debido respeto, expone:

Que según lo acreditan los documentos anexos al presente ocuro, y de que á su vez se hará mención. s. propietario. de terreno. que no constituye. el predio denominado *(aquí el nombre que tengo y haya tenido en su caso, y cuando no lo tengo, el que le pusiere el interesado actual con el fin de identificarlo)* sito en *(la Municipalidad)* de *(nombre de la Municipalidad)* del *(Distrito, Cantón ó Partido)* de *(nombre del Distrito, Cantón ó Partido)* del *(Estado ó Territorio)* de *(nombre del Estado ó Territorio)* y deseando disfrutar de las franquicias concedidas por los arts. 48 y 60 de la ley de 26 de Marzo de 1894, para las propiedades inscritas en el Gran Registro de la propiedad de la República, solicitada por el presente ocuro la inscripción de los títulos de la propiedad ya mencionada, en el concepto de que para el efecto indicado se acompañan los documentos ó constancias que á continuación se expresan:

BAJO EL NUM. 1.— El título primordial, ó sea el documento que acredita haber salido del dominio de la Nación la propiedad cuyos títulos se solicita por el presente ocuro inscribir en el Gran Registro. *(Con su copia y extracto substancial correspondientes).... en.... fojas útiles.*

BAJO EL NUM. 2.— El último título translativo de dominio, del terreno ó finca cuya inscripción de títulos se solici-

mediante los datos de los respectivos alineamientos de conexión obtenidos y bien verificados, hasta obtener así las coordenadas de los puntos de uno y otro polígono, respecto á un vértice común al levantamiento y al lindero ó algún vértice del perímetro lindero, y ya con estos datos, derivar por el cálculo, según las fórmulas:

$$\text{tang. } A = \frac{x' - x}{y' - y}; D = \frac{x' - x}{\text{sen. } A}$$

y mediante las diferencias de las coordenadas respectivas, el azimut y la longitud de los lados del perímetro lindero que estén limitados por mojoneras, cuya disposición no haya permitido tomarlos como vértices de observación en el polígono del levantamiento, en el concepto de que dichos datos definitivos de los alineamientos sucesivos é inmediatos del perímetro lindero, son los que deben figurar en la tabla de datos, anexa al respectivo Plano.

El Arancel vigente para el pago de honorarios á los Agentes de la Secretaría de Fomento en el ramo de Terrenos Baldíos es el inserto en las páginas 55 y 56 del presente volumen.

ANEXO 1.

Señor Secretario de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización é Industria.

(Nombre, apellido y domicilio del propietario interesado, así como en el caso de que la solicitud se haga por encargo ó poder de éste, indicar además los del mandatario) ante Ud., con el debido respeto, expone:

Que según lo acreditan los documentos anexos al presente ocuro, y de que á su vez se hará mención. s. propietario.... de.... terreno. que no constituye.... el predio denominado *(aquí el nombre que tengo y haya tenido en su caso, y cuando no lo tengo, el que le pusiere el interesado actual con el fin de identificarlo)* sito en *(la Municipalidad)* de *(nombre de la Municipalidad)* del *(Distrito, Cantón ó Partido)* de *(nombre del Distrito, Cantón ó Partido)* del *(Estado ó Territorio)* de *(nombre del Estado ó Territorio)* y deseando disfrutar de las franquicias concedidas por los arts. 48 y 60 de la ley de 26 de Marzo de 1894, para las propiedades inscritas en el Gran Registro de la propiedad de la República, solicitada por el presente ocuro la inscripción de los títulos de la propiedad ya mencionada, en el concepto de que para el efecto indicado se acompañan los documentos ó constancias que á continuación se expresan:

BAJO EL NUM. 1.— El título primordial, ó sea el documento que acredita haber salido del dominio de la Nación la propiedad cuyos títulos se solicita por el presente ocuro inscribir en el Gran Registro. *(Con su copia y extracto substancial correspondientes).... en.... fojas útiles.*

BAJO EL NUM. 2.— El último título translativo de dominio, del terreno ó finca cuya inscripción de títulos se solici-

ta, otorgado en (*aquí el nombre del lugar en que se otorgó*) ante (*aquí el nombre del notario ó funcionario ante quien se otorgó*) y debidamente registrado en el correspondiente Registro Público local de (*aquí el nombre de la localidad en que se registró*) así como legalizada al efecto la firma que lo autoriza, por el cual consta que (*aquí el nombre del propietario solicitante*) adquirió... de (*nombre del anterior causante*) en virtud de (*venta, etc.*) la propiedad ya indicada, así como que (*él*) su... actual... dueño. (Con su copia y extracto substancial correspondientes). En... *fojas útiles.*

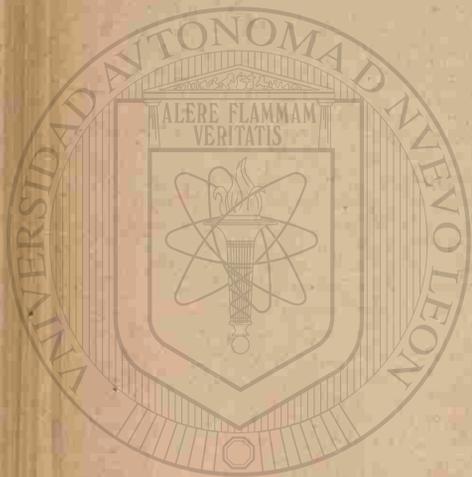
BAJO EL NÚM. 3.— El plano de la propiedad de que se trata, con sus dos copias correspondientes en género de calca, subscripto uno y otras por el ingeniero titulado D..... y conteniendo a la vez las certificaciones correspondientes á su íntima relación con el respectivo título primordial y la satisfacción del requisito de conformidad de colindantes, así como llenando el expresado plano los requisitos legales conducentes á la expedida identificación de su perímetro lindero, mediante el tener transcritos con toda claridad, en el lugar y forma correspondientes, las expresiones numéricas de la longitud y orientación astronómica de los lados del perímetro lindero ó de las directrices respectivas en su caso, la amplitud de los ángulos interiores que forman sus lados y su situación respecto á puntos ó lugares fijos ó bien caracterizados, tales como (*aquí el nombre ó indicación de dicho ó dichos lugares de referencia*) igualmente que la superficie en hectáreas comprendida dentro del perímetro fijado y la expresión de la declinación de la aguja con la fecha en que se observó.

BAJO EL NÚM. 4.— Un informe (con su copia correspondiente) del ingeniero titulado que levantó ó verificó el plano ya indicado, en cuyo informe consta una relación detallada de las operaciones que se ejecutaron para obtener y verificar todos los datos transcritos en dicho plano, así como, en un pliego anexo, todos los datos propios para caracterizar, á la vez que el perímetro lindero, las coordenadas de sus vértices respecto á la meridiana verdadera y su perpendicular, y la respectiva superficie; todo esto según el modelo que al efecto está prevenido por la oficina del Gran Registro, igualmente que las indicaciones relativas á los nombres de los predios colindantes y los de sus respectivos propietarios en la actualidad. En... *fojas útiles.*

BAJO EL NÚM. 5..... documento..... que acredita..... la conformidad de..... colindante..... que afecta la propiedad de que se trata, con los respectivos linderos señalados en el plano adjunto á la presente solicitud, recabada dicha conformidad bajo la forma legal establecida por la frac. II del art. 39 de la ley de 26 de Marzo de 1894, y debidamente requisitada con la certificación que acredita la personalidad que como actuales propietarios colindantes corresponde á las personas que han otorgado su conformidad. En... *fojas útiles.*

En tal virtud, á Ud. suplico por el presente ocurso (cuya copia simple acompaño) el que previos los trámites respectivos, se sirva acordar se inscriban en el Gran Registro de la Propiedad de la República, los títulos correspondientes á la propiedad de que he hecho mención, y cuyo certificado de Liberación (original ó en copia simple) adjunto.

..... de 18.....



ANEXO 2.

SEÑOR DIRECTOR DEL GRAN REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DE LA REPÚBLICA.

Timbre de 50 centavos
cancelado
por el ocursoante).

(Nombre, apellido y domicilio de la personalidad propietaria del predio de que se trate, y en caso de que la solicitud se haga en representación de ésta además los del mandatario) ante Ud. con el debido respeto expone:

Que según lo acreditan los documentos anexos al presente ocurso y de los cuales á su vez se hará mención....s.... propietario de....terreno.... que constituye.... el predio denominado *(aquí el nombre que tenga y haya tenido en su caso y cuando no hubiere precedente alguno, el nombre que le ponga el ocursoante para identificarlo)*, sito en *(la Municipalidad)* de *(aquí el nombre de la Municipalidad, Congregación etc.)*, del *(Distrito, Cantón ó Partido)*, del *(Estado ó Territorio)* de *(aquí el nombre del Estado etc.)*, y deseando disfrutar de las franquicias concedidas por los art. 48 y 60 de la ley de 26 de Marzo de 1894, para las propiedades inseritas en el Gran Registro de la Propiedad de la República, solicita por el presente ocurso la inscripción de los títulos de la propiedad ya mencio-

nada, en el concepto de que para el efecto indicado se acompañan los documentos ó constancias que á continuación se expresan, así como una copia simple del presente ocursó.

	
Número de orden.	CLASE DE DOCUMENTOS.
	Fojas útiles de que consta.

Solicitud

títulos en NES

1. EXPLICATIVO DEL
 AMIENTO
 2. INACIÓN DE LOS
 3. STRO LINDERO Á QUE
 conforme adj. SEÑALADA EN LA PRESENTE TABLA.

alados

lares
 a de
 trices de
 neas
 osas
 número

Obser.
 Núm.

55

7

13

®

19

20

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Datos de
plano,
datos
de los

Vértices

Estación
Núm. ...

OBSERVACIONES

EXPOSICIÓN Y DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO
ADOPTADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
VÉRTICES Y DATOS DEL PERÍMETRO LINDERO Á QUE
HACE REFERENCIA LA PRESENTE TABLA.

INDICE.

**Ley sobre ocupación y enajenación de
terrenos baldíos de los Estados Uni-
dos Mexicanos.**

TITULO I.

Págs.

De los terrenos baldíos y nacionales, de las demasías y excedencias, y bases generales para su ocupación y enajenación..... 7

TITULO II.

De la manera de adquirir los terrenos que son objeto de esta ley..... 13

TITULO III.

De las franquicias que se conceden á los poseedores de terrenos baldíos, demasías y excedencias 19

TITULO IV.

Del Gran Registro de la propiedad de la República..... 20

Datos de
plano,
datos
de los

Vértices

Estación
Núm. ...

OBSERVACIONES

EXPOSICIÓN Y DIAGRAMA EXPLICATIVO DEL
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO
ADOPTADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
VÉRTICES Y DATOS DEL PERÍMETRO LINDERO Á QUE
HACE REFERENCIA LA PRESENTE TABLA.

INDICE.

Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos de los Estados Uni- dos Mexicanos.

TITULO I.

Págs.

De los terrenos baldíos y nacionales, de las demasías y excedencias, y bases generales para su ocupación y enajenación..... 7

TITULO II.

De la manera de adquirir los terrenos que son objeto de esta ley..... 13

TITULO III.

De las franquicias que se conceden á los poseedores de terrenos baldíos, demasías y excedencias 19

TITULO IV.

Del Gran Registro de la propiedad de la República..... 20

	Págs.
TITULO V.	
Disposiciones generales.....	25
Disposiciones transitorias.....	28
Reglamento para los procedimientos administrativos en materia de terrenos baldíos y nacionales, excedencias y demasías.	
CAPITULO I.	
De los agentes.....	30
CAPITULO II.	
De los trámites que se han de seguir en los denuncios de terrenos baldíos, demasías y excedencias.....	33
CAPITULO III.	
De los arreglos y composiciones de terrenos baldíos, demasías y excedencias, celebrados directamente con la Secretaría de Fomento.....	43
CAPITULO IV.	
Disposiciones generales.....	47
Arancel para el pago de honorarios á los Agentes de la Secretaría de Fomento en el ramo de Terrenos Baldíos.....	50

Reglamento para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.

	Págs.
CAPITULO I.	
De los Agentes encargados de vigilar la explotación.....	52
CAPITULO II.	
De los permisos y contratos para la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.....	59
CAPITULO III.	
De la explotación de los bosques y terrenos baldíos y nacionales.....	64
CAPITULO IV.	
De los permisos de caza y pesca.....	70
CAPITULO V.	
De las penas por infracciones á este reglamento.....	72
CAPITULO VI.	
Disposición final.....	78
Circular de 28 de Abril de 1894.....	79
" " 12 de Junio de 1894.....	80
" " 15 de Junio de 1894.....	81
" " 20 de Junio de 1894.....	82
" " 21 de Junio de 1894.....	83

	Págs.
Circular de 2 de Julio de 1894.....	85
" " 19 de Diciembre de 1894.....	85
Tarifas de precios de terrenos desde el año de 1895 hasta 1905.....	87
Ley de cesión gratuita de terrenos baldíos ó nacionales a los labradores pobres	103
REGLAMENTO DE LA LEY ANTERIOR.	
CAPITULO I.	
De la adjudicación de terrenos baldíos y nacionales á los labradores pobres.....	104
CAPITULO II.	
De la adjudicación gratuita de terrenos baldíos y nacionales para la fundación de nuevas poblaciones.....	108
Circular de 31 de Julio de 1902.....	110
Ley de 1º de Febrero de 1856.....	112
AGUAS NACIONALES.	
Decreto de 2 de Agosto de 1863.....	113
Resolución de 20 de Febrero de 1890.....	116
Ley de 14 de Mayo de 1901.....	121
EJIDOS DE LOS PUEBLOS.	
Fundo legal.....	123
Ejidos.....	124
Disposiciones sobre ejidos.....	126

	Págs.
DISPOSICIONES SOBRE EJIDOS.	
Resolución de 20 de Agosto de 1867.....	126
Idem de 13 de Octubre de 1869.....	127
Idem de 10 de Diciembre de 1870.....	129
Idem de 26 de Marzo de 1878.....	131
Idem de 16 de Noviembre de 1880.....	134
Idem de 7 de Enero de 1882.....	135
Idem de 17 de Noviembre de 1885.....	136
Idem de 30 de Agosto de 1888.....	137
Circular de 28 de Octubre de 1889.....	138
Idem de 28 de Octubre de 1889.....	139
Idem de 28 de Octubre de 1889.....	141
Idem de 12 de Mayo de 1890.....	144
Idem de 9 de Octubre de 1856.....	146
Idem de 2 de Febrero de 1894.....	148
Resolución de 10 de Abril de 1899.....	149
Un informe sobre erección de nuevas poblaciones.....	150
COLONIZACION.	
CAPITULO I.	
Del deslinde de terrenos.....	158
CAPITULO II.	
De los Colonos.....	159
CAPITULO III.	
De las Compañías.....	162
CAPITULO IV.	
Disposiciones generales.....	165

Reglamento sobre franquicias concedidas á los colonos..... 167

AGUAS.

Ley de 5 de Junio de 1888..... 175
 " " 6 de Junio de 1894..... 177

Garantía de la Propiedad Rural en México..... 183

Anexo núm. 1..... 205
 Anexo núm. 2..... 209
 Anexo núm. 3..... 211

HERRERO HERMANOS EDITORES.

OBRAS DE DERECHO

PUBLICADAS POR ESTA CASA.

Código Civil del Distrito Federal y Territorios, promulgado en Marzo de 1884. Copia íntegra de la edición oficial. Un tomo en 8º, de 512 páginas, tamaño 15½ por 9½ cm., encuadernado en tela flexible con puntas redondas. \$ 1 00

Código de Minería, Patentes y Marcas. Colección ordenada e ilustrada con luminosas notas por el Señor Lic. Francisco Pascual García. Un tomo en 8º, (de la «Colección de Códigos de bolsillo»), con 312 páginas, encuadernado en tela y planchas. 1 00

Código de Procedimientos Civiles, para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, reformado y adicionado en virtud de la autorización concedida al Ejecutivo por decreto de 1º de Junio de 1880. Magnífica edición escrupulosamente corregida. Un tomo en 8º, mid: 15½ por 9½ cm., encuadernado en tela inglesa flexible. 1 00

Código Penal de México y sus reformas (El). Contiene una exposición histórica de las leyes penales vigentes en México antes de la promulgación del Código, y una sección de precedentes y legislación, comparada de las instituciones penales adoptadas en la misma ley, por el Lic. Ricardo Rodríguez, Ma-

gistrado del Tribunal Superior de Justicia. Un tomo en 8º, de bolsillo, con 482 páginas, encuadernado en tela y planchas I 00

Código de Procedimientos Penales (El), concordando con el Código Penal. Contiene además una serie de formularios de los juicios penales, inclusive los de la competencia de los jurados, por el Lic. Ricardo Rodríguez, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Un tomo en 8º, de bolsillo, con 244 páginas, encuadernado en tela y planchas. I 00

Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. Edición de bolsillo, que mide 15½ por 9½ cm. Un tomo en 8º, magnífica impresión, encuadernado en tela con planchas. I 00

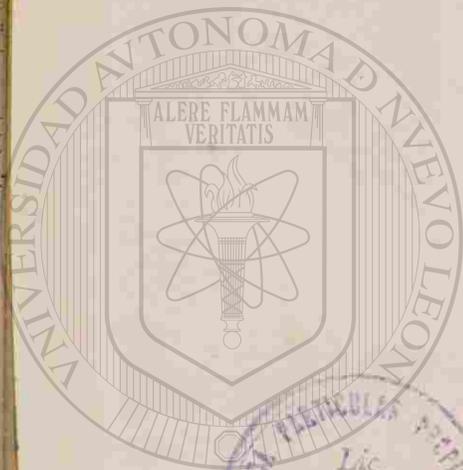
Código de Procedimientos Civiles Federales, expedido en uso de la autorización que concedió al Ejecutivo la ley de 2 de Junio de 1892, aumentado con sus últimas reformas y con las anotaciones hechas por el Lic. Antonio de J. Lozano, abogado de los Tribunales de la República. Copia íntegra de la edición oficial. Un tomo en 8º, de 448 páginas. 15½ por 9½ cm., encuadernado en tela flexible con puntas redondas y planchas. I 25

Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, promulgado el 30 de Diciembre del año de 1902. Copia íntegra de la edición oficial, aumentado con un apéndice en que se contienen algunos reglamentos relacionados con el mismo Código. Un tomo en 8º, de bolsillo, con 344 páginas, encuadernado en tela y planchas I 00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



REV
EC